



# ANALES DEL CONCEJO

## DE BOGOTÁ, D.C.

### PROYECTOS DE ACUERDO

**AÑO II N°. 3877 DIRECTOR(E): DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO ENE. 15 DEL AÑO 2025**

#### TABLA DE CONTENIDO

**Pág.**

<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 087 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE Y DIGNO DE BOGOTÁ D.C. CONTENIDA EN EL DECRETO 380 DE 2015 Y PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTENIDO EN EL CONPES 33 DE 2023”.....	27119
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 088 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN Y/O MODIFICAN LOS ACUERDOS 079 DE 2003 Y 735 DE 2019, PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO, INCLUIDO EL ESPACIO VIRTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”.....	24140
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 089 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO SAN JUAN” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.”.....	24174
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 090 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS TRANS A UNA VIDA SIN VIOLENCIAS CON PLENA GARANTÍA DE DERECHOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	24185
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 091 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE DAN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA NUTRICIONAL A LA PRIMERA INFANCIA EN SUS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA Y A MADRES GESTANTES”.....	24206
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 092 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA “EXPO RESTREPO” COMO UN EVENTO INSIGNIA DEL SECTOR CUERO, CALZADO, MARROQUINERÍA Y AFINES EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”.....	24231
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 093 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR EL CUAL SE EXALTA LA TRAYECTORIA DE JAIME GARZÓN Y SU IMPACTO EN LA CULTURA DE LA CIUDAD, CON EL FIN DE APORTAR AL DEBER QUE TIENE EL DISTRITO CAPITAL PARA LA RECUPERACIÓN, EL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	24245
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 094 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR EL CUAL SE REGULA DE MANERA PROPORCIONAL Y JUSTA EL VALOR A PAGAR DE LOS INTERESES CAUSADOS POR LAS SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD (C-29) EN BOGOTÁ”.....	24255
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 095 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA MIGRACIÓN MÓVIL DEL APLICATIVO DE MANTENIMIENTO VIAL DE BOGOTÁ”.....	24292
<b>PROYECTO DE ACUERDO NO 096 DE 2025 PRIMER DEBATE</b> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS CORREDORES DE CIRCULACIÓN DE LAS ESTACIONES Y PORTALES DE TRANSMILENIO DE LA CIUDAD”.....	24300

**PROYECTO DE ACUERDO NO 087 DE 2025****PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE Y DIGNO DE BOGOTÁ D.C. CONTENIDA EN EL DECRETO 380 DE 2015 Y PARA LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTENIDO EN EL CONPES 33 DE 2023”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El objeto de este proyecto de acuerdo es dictar lineamientos para la actualización de la política pública de trabajo decente y digno, en el marco de lo ordenado por el en el acuerdo 927 del 2024 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura en su Artículo 216.

**II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA****1. INTRODUCCIÓN:**

Desde comienzos de la década de 1990, por un lado tenemos, el inicio de la apertura económica y al tiempo la definición del estado social del derecho con la expedición de la constitución política, con ello se crearon diversas corrientes sociales, académicas y políticas que buscaron la materialización de los derechos laborales de los y las trabajadoras mediante una intervención estatal, esto se logró con la creación del Ministerio de Trabajo (1938), la expedición del Código Laboral (1944), el Código Sustantivo del Trabajo (1951), donde se establecieron los pilares y principios de las relaciones laborales, entre ellos la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que se acompasa con los principios mínimos contemplados en la constitución política de 1991 y el desarrollo jurisprudencial del principio de progresividad y prohibición de regresividad.

A pesar de los grandes logros en las normas por los derechos de los y las trabajadores en el tiempo, la realidad es otra. Esta diferencia entre la normatividad vigente y la realidad social trae consigo múltiples consecuencias negativas para el estado y la comunidad, en efecto, el Estado, siendo quien a su vez expide la normatividad, es el principal infractor de los derechos pues dentro de varias de sus instituciones mantiene un tipo de contratación indebida con el fin de reducir los gastos operativos a costa del bienestar social de los trabajadores. Sacrificar los derechos de los y las trabajadores del Estado por reducir el gasto de operación de las entidades va en contra de la esencia del Estado Social de Derecho, de la Constitución Política y es producto de una visión mercantilista donde existe una primacía de las utilidades sobre el respeto de los derechos fundamentales como al trabajo digno y prestaciones sociales.

**2. JUSTIFICACIÓN:**

Por lo anterior, consideramos se hace necesario actualizar la política de trabajo decente y digno en el distrito contenido en el decreto 380 de 2015 y a su vez revise y adecue el plan de acción del mismo contenido en el

conpes 33 de 2023, esto teniendo en cuenta el concepto de trabajo decente y digno, formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las prioridades de la Organización. Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y con crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas.

La Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999, estudió a fondo cuatro elementos de este concepto: el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca **todas las clases de trabajo** y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así pues, la idea de «trabajo decente» es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada sociedad. Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las relaciones sociales de los trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicación y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral.

Puede afirmarse entonces que el concepto de trabajo decente pone su atención en dos<sup>1</sup> dimensiones adicionales del mundo del trabajo; esto es, en la relativa a los efectos que el mismo fenómeno del trabajo puede tener sobre la economía, y en la dimensión de la democracia en el terreno laboral. Esta visión más amplia es la que le otorga un valor adicional al concepto de Trabajo Decente. En esta última noción habría que reconocer el valor que le otorga el hecho de contar con una mirada más interdisciplinaria.

Por otra parte, se encuentra que los niveles en los que se analizan la existencia o no del Trabajo Decente y del Trabajo Digno, parecen no coincidir en principio. Mientras que los indicadores de Trabajo Decente parecen apuntar todos hacia la medición de las condiciones del mundo del trabajo en un determinado país o región, las condiciones de Trabajo Digno, en cambio, al menos como se han examinado en la Corte Constitucional colombiana, parecerían estar referidas más que a las condiciones personales de los trabajadores, considerados ellos de manera individual.

Los conceptos de trabajo decente y trabajo digno, aunque en ocasiones son utilizados como sinónimos, tienen fuentes normativas diferentes. El enfoque de trabajo decente ha sido desarrollado ampliamente por la Organización Internacional del Trabajo a partir de 1999 y la noción de trabajo digno constituye el referente normativo fundamental del ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral.

En los informes generales de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones el concepto de trabajo decente aparece incluido con mucha frecuencia.

En conclusión, el concepto de trabajo decente tiene más arraigo en fuentes doctrinarias que normativas. En algunos instrumentos de derecho internacional se encuentra simplemente mencionado, aunque como se verá

---

<sup>1</sup> <https://www.sintraprevi.org/pdf/ecssi/TRABAJO%20DIGNO%20Y%20DECENTE%20EN%20COLOMBIA.pdf>

más adelante, estas referencias describen un concepto más parecido al de trabajo digno adoptado por Colombia, que al de trabajo decente presentado por la OIT en 1999. Para el caso de otras herramientas normativas del derecho internacional (como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad), los componentes que hacen parte

Orígenes del concepto de trabajo digno en Colombia: el trabajo en el Estado social de derecho

En la Constitución de 1991 el trabajo adquirió una importancia enorme con la que no contaba antes. Con la conversión del Estado colombiano en un Estado social de derecho el trabajo pasó a ocupar un lugar central por la triple calidad que se le reconoció; en Colombia, desde entonces, el trabajo sería principio, deber y derecho.

El reconocimiento como principio tiene lugar desde el preámbulo, en donde se empieza a hacer alusión al trabajo como uno de los fines hacia los que propende la Constitución, y luego, en el artículo primero cuando se señalan a la dignidad humana y al trabajo, entre otros, como fundamentos del Estado social de derecho. Por otra parte, la consagración constitucional del trabajo como derecho y como deber se lleva a cabo a través de los artículos 25 y 53 de la Carta.

El fundamento normativo constitucional del trabajo digno, entonces, puede encontrarse por dos vías. Por un lado, a través de la referencia a la dignidad humana, que como principio fundante del Estado social de derecho debe reflejarse en todo el ordenamiento jurídico, y de manera concreta, sobre las distintas dimensiones del trabajo. Por el otro, acudiendo a la referencia expresa de los art. 25 y 53 de la C.P. que dan muestra de la relevancia que la Constitución le otorga a las condiciones en las que se desempeña el trabajo.

Solo el artículo 25 de la Constitución Política desarrolla entre otras, algunas de las siguientes leyes.

1. Ley 80 de 1993 (Remuneración igual a los trabajadores)
2. Ley 324 de 1996 (Población sorda)
3. Ley 789 de 2002 (Apoyo al empleo y ampliación a la protección social)
4. Ley 931 de 2004 (Igualdad de trabajo por razones de la edad)
5. Ley 995 de 2005 (Compensación en dinero vacaciones)
6. Ley 1114 de 2006 (Recursos para vivienda de interés social)
7. Ley 1221 de 2008 (Teletrabajo)
8. Ley 1233 de 2008 (Contribuciones especiales de las Cooperativas de Trabajo Asociado a la seguridad social)
9. Ley 1306 de 2009 (Protección a personas con discapacidad mental)
10. Ley 1391 de 2010 (Fondos de empleados)

11. Ley 1413 de 2010 (Inclusión en la medición trabajo no remunerado de la mujer para implementar políticas públicas)
12. Ley 1429 de 2010 (Formalización del empleo)
13. Ley 1636 de 2013 (Protección al cesante)

Concepto que finalmente se puede desarrollar con la Sentencia T-174/97 que aborda el DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS: *El trabajo se preserva por la normativa constitucional "en condiciones dignas y justas", es decir, sobre el supuesto de que quien aporta su esfuerzo a cambio de la remuneración es un ser humano, que constituye finalidad y propósito de la organización política, del orden jurídico y de las autoridades, y jamás un medio ni un instrumento para alcanzar otros fines, sean ellos particulares o públicos.*

*Es propio de la dignidad en que debe desenvolverse la relación laboral que el trabajo se remunere proporcionalmente a su cantidad y calidad. Todo trabajo debe ser remunerado, desde el primer minuto en que se presta, pues del salario depende la subsistencia del trabajador y el sostenimiento de su familia. Que se le pague por vincular su fuerza, su ingenio, su pericia y su tiempo a las finalidades de otro es algo que se constituye en derecho inalienable a partir del trabajo mismo y no por las solemnidades o trámites de índole legal o reglamentario con base en las cuales se haya pactado la prestación de servicios personales. El artículo 53 de la Constitución señala como postulado, insustituible en el Estatuto del Trabajo que debe expedir el legislador, el de la "primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales"*

### **3.1 Contexto y situación actual.**

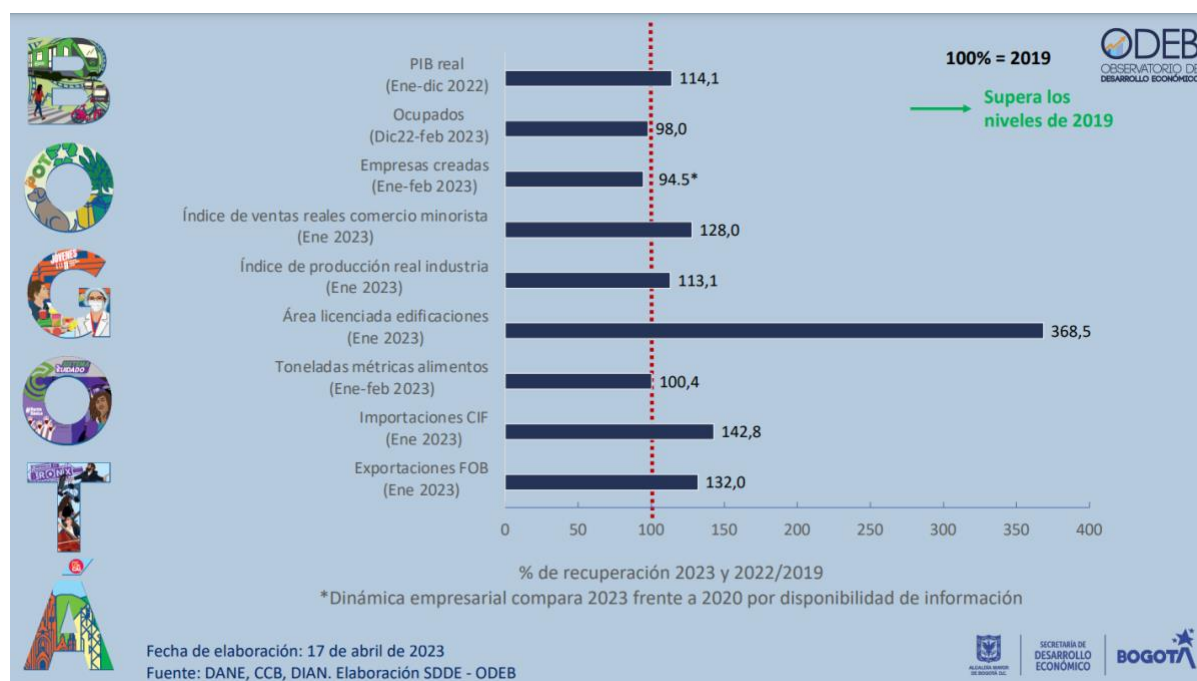
Es inevitable dibujar un contexto de la situación laboral en Bogotá a 2024 sin mencionar el impacto que la pandemia del COVID-19 tuvo sobre la actividad productiva de la ciudad al punto en que podríamos afirmar sin demasiado margen de error que toda la política económica de esta administración se centró en lo que se denominó la “reactivación económica”, a ese respecto es importante evaluar las cifras presentadas por la administración para tener claridad del panorama económico en la cual se impulsa la política que se pretende actualizar.

Según el Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en 2022 el PIB de la ciudad creció un 9,9%, con un impacto positivo en el mercado laboral en general de la ciudad, lo cual si bien nos lleva a cifras similares a las de 2019, aún no se revierte la tendencia contraccionista que venía presentando la ciudad en la última década, tal como se evidencia a continuación:



En términos sectoriales el comportamiento es bastante similar, es de resaltar que la tasa de desocupación de las mujeres viene disminuyendo, porcentualmente, más que la de los hombres (cayó 2,9 puntos porcentuales - p.p.-, al pasar de 15,2 % en el trimestre móvil noviembre de 2021 - enero de 2022, a 12,2 % en el mismo periodo de 2022). También es necesario señalar que el porcentaje de recuperación económica, medido por la tasa de ocupación es 2 puntos porcentuales menor para los jóvenes que para los adultos.

Este “rebote” o recuperación en V de la actividad económica es jalonado, principalmente por el sector inmobiliario, confirmando la tendencia que viene signando la actividad productiva de la ciudad en la que los 2 sectores más importantes son el inmobiliario y el sector servicios.



Lo propio pasa con la creación de empresas, en lo que se reportan 13.443 empresas creadas en la Cámara de Comercio de Bogotá hasta febrero de 2023 lo cual le permite a la administración hablar de un porcentaje de recuperación, medido por la creación de empresas, de un 94,5%. Por último, es importante anotar que las ventas reales en el mercado minorista presentan una tendencia al alza, presentando un porcentaje de recuperación del 128% comparado con las cifras de 2019.

Ahora bien, con estos datos como contexto, es también importante anotar lo siguiente: en Bogotá, del medio millón de empresas registradas, el 87,7% son microempresas, y casi la mitad se dedican al sector servicios<sup>2</sup>. En estas empresas, el 20,9% de los empleados tienen vinculaciones laborales que se pueden clasificar como informales, sin embargo, hay que contar con un fuerte componente de subregistro, pues aquí estamos hablando solo de las empresas formalizadas ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

<sup>2</sup> [https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files\\_articles/edl20-21\\_resultados\\_odeb\\_sdde.pdf](https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/edl20-21_resultados_odeb_sdde.pdf)

## Personal ocupado según modalidad de trabajo y permanencia en el puesto de trabajo

ODEB  
OBSERVATORIO DE  
DESARROLLO ECONÓMICO

- El **44,2 %** de los trabajadores de las empresas en Bogotá tiene **contrato a término indefinido**
- 7,8 p.p. menos trabajadores que los reportados en la primera EDL 2012 (52,0%).

- El **76,6 %** de los trabajadores permanecieron más de un año en el puesto de trabajo.

- Las ocupaciones donde se presenta mayor estabilidad son los directores y gerentes.

Distribución total de trabajadores según modalidad de trabajo. Bogotá 2020 -2021



Fuente: EDL Bogotá 2021-2022. Elaboración SDDE-ODEB.

La **BOGOTÁ**  
que estamos construyendo

Distribución total de trabajadores según ocupación que permanecieron más de un año en el puesto de trabajo. Bogotá 2020 -2021

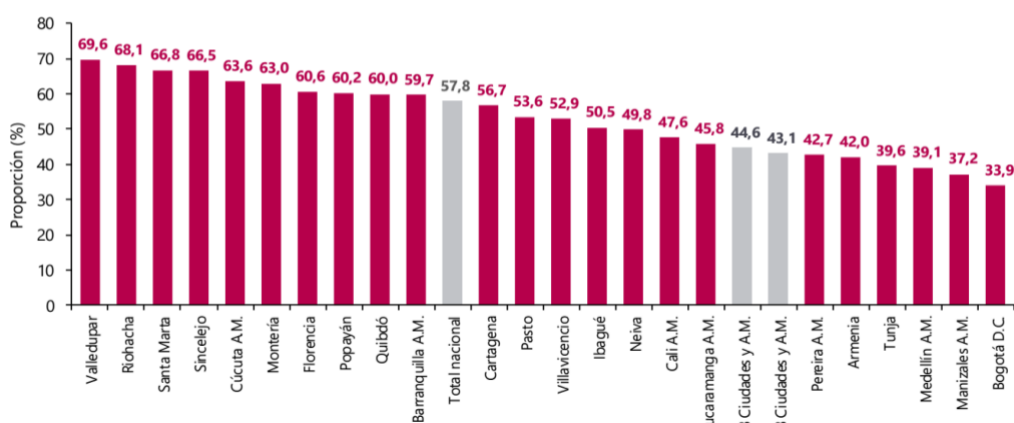


ALCALDÍA DE BOGOTÁ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

BOGOTÁ

Según los datos del DANE, para el último trimestre de 2022 esta proporción para la ciudad de Bogotá era del 33,9% que, si bien, es la más baja de todo el país, sigue siendo preocupante que un tercio de los trabajadores lo hagan bajo la dinámica de la informalidad.

**Gráfico 1. Proporción de la población ocupada informal según ciudades 23 ciudades y áreas metropolitanas Trimestre octubre - diciembre 2022**



Para reforzar dichas cifras, según el documento Informal Economy de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)<sup>3</sup>, Colombia es el país con la mayor cifra de informalidad con un 53,1%, superando por amplio margen a países como México, Brasil y Chile.

<sup>3</sup> <https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/tackling-informality-in-colombia-with-the-social-and-solidarity-economy.htm>



El panorama reseñado a nivel cuantitativo puede resultar mucho más alarmante a nivel cualitativo si se tiene en cuenta que la proliferación de la informalidad esconde relaciones laborales al margen de la legalidad y en detrimento de los más básicos derechos fundamentales.

Un dato importante a tener en cuenta es en Bogotá existen 450.377 empresas con matrícula activa y 92,7% son microempresas, pero durante el primer trimestre de 2024, la creación y la renovación de empresas ha caído respecto al mismo periodo de 2023, jalonado por el comportamiento de las microempresas. Para el periodo 2021 – 2022 más del 70% de los micronegocios no contaban con registro mercantil y un 51,6% no cuenta con RUT. Entre 2021 y 2022 los micronegocios ambulantes o al descubierto se redujeron en -11,2% pasando de 63.649 a 56.512.

Hablamos de micronegocios de unidades productivas que no cuentan con más de 10 trabajadores en su mayoría desarrollan sus actividades en la informalidad. Por ello creemos que el impacto de esta propuesta reviste en un porcentaje importante de ciudadanos.

En cuanto a las empresas formalmente formadas, son muy pocas las que tienen capacidad de ofrecer un empleo formal, 56% de las empresas con registro mercantil tiene hasta tres personas empleadas, incluida la persona propietaria y de estas solo un poco más del 50% realiza aportes a seguridad social a sus empleados.

Lo problemático de esto es la generalización de formas de trabajo dependiente no reconocido o disfrazado que logran ocultar verdaderas relaciones de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha denominado a estas formas como: formas atípicas de contratación, lo cual hace referencia a modalidades de empleo que difieren del empleo estándar. Dentro de estas modalidades se incluye: el empleo temporal; el trabajo a tiempo parcial; el trabajo temporal por medio de agencia; la relación de trabajo multipartita; el empleo encubierto; el empleo por cuenta propia económicamente dependiente; el trabajo a domicilio y las plataformas digitales de trabajo<sup>4</sup>.

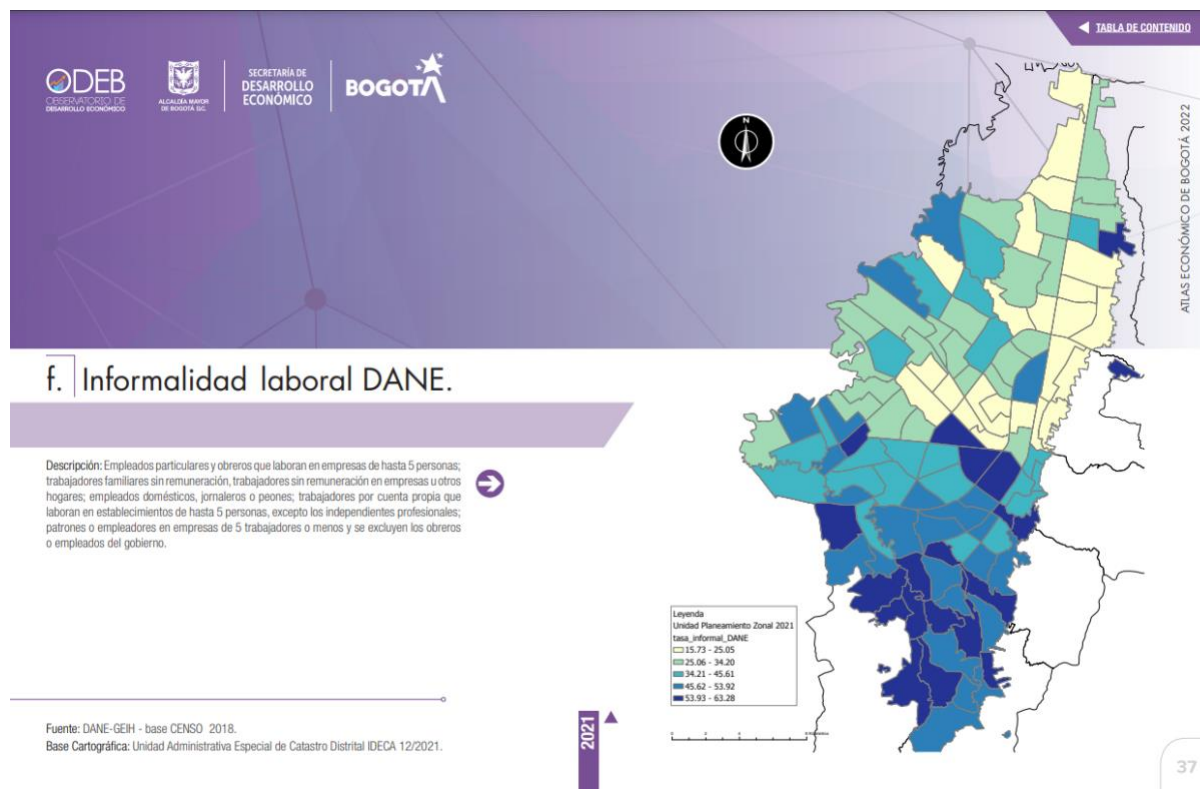
Esto sumado a que la informalidad es una alternativa de ingreso, en especial para poblaciones vulnerables, dicha probabilidad aumenta con la duración del desempleo o con la inestabilidad, y se profundiza en los jóvenes de baja calificación y en trabajadores mayores.

Para el caso colombiano, vale la pena centrar la atención en los contratos de prestación de servicios del sector público ya que bajo esta modalidad el Estado vincula casi un millón de personas<sup>5</sup>. Adicionalmente, se deben revisar modalidades como el contrato individual a término indefinido, fijo y de obra, los contratos de aprendizaje, las plataformas digitales o cualquier tipo de vínculo que implique el desconocimiento de la naturaleza misma de un contrato laboral y las garantías que de este se desprenden; así como los contratos colectivos de trabajo, sumado a los convenios que derivan en la tercerización para la prestación de servicios a la ciudadanía.

<sup>4</sup> Ver: <https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang-es/index.htm>

<sup>5</sup> INFOBAE. (2022, diciembre 30). Contratos de prestación de servicios con el Gobierno nacional irán hasta abril de 2023: qué pasará con los contratistas. Tomado de: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/30/contratos-deprestacion-de-servicios-con-el-gobierno-nacional-iran-hasta-abril-de-2023-que-pasara-con-los-contratistas>

En Bogotá, los estudios de la informalidad, con base en las cifras del DANE muestran que la mayor tasa de informalidad se concentra en el sur de la ciudad.



Sin embargo, no contamos con cifras exactas de la tasa de informalidad presente en el sector público del distrito, que es por donde debería iniciarse en una política de trabajo digno y decente, las OPS, los contratos en provisionalidad y otras vinculaciones similares son, al parecer, la regla general en la contratación de personal en el sector público.

### 3.2 Plan Distrital de Desarrollo.

Con el Decreto 380 de 2015 se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones, se buscaba “Promover eficazmente el acceso de trabajadores y trabajadoras de Bogotá al derecho a un trabajo decente y digno como una forma de erradicación de la segregación social, potenciando los efectos sobre el mercado laboral de las políticas macroeconómicas, sectoriales y educativas” sin embargo y como antecedente se tiene que a partir de la promulgación del acuerdo 761 del 2020 “por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se estableció la obligación de la administración distrital de actualizar esta política, obligación que se consagra en el siguiente tenor:

**“Artículo 61. Política de trabajo decente.** El Distrito Capital de Bogotá, adicional a la Política Pública de gestión integral de talento humano y dentro de la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo, adelantará las acciones tendientes hacia la garantía del derecho al trabajo decente, buscará disminuir las brechas de

desigualdad laboral entre mujeres y hombres y el diseño de estrategias para el primer empleo en los jóvenes y para posibilitar el acceso al empleo formal de personas mayores antes de alcanzar su edad de jubilación. Son parte de esta política las siguientes acciones planteadas en el presente Plan:

1. Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital con la creación de por lo menos 1.500 empleos y la realización de concursos de méritos para la provisión de 1.850 vacantes. Esta estrategia deberá contemplar un análisis integral del diseño institucional, estudios de cargas laborales para definir las necesidades de personal y de los recursos presupuestales disponibles, para definir acciones de mediano y largo plazo.
2. Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la Administración Distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía.
3. Promover la generación de empleo para 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, etnias, jóvenes, jóvenes NINI, personas con discapacidad, y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas.
4. Desarrollar habilidades financieras y digitales a 72.900 emprendedores de subsistencia o pequeños empresarios, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia.
5. Formar 50.000 personas en las nuevas competencias y habilidades para el trabajo en el marco de la reactivación económica.
6. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital.
7. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres.
8. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá.
9. Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media, que permitan una formación acorde a los retos del siglo XXI, la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida.
10. Ofrecer 20.000 cupos nuevos en educación superior.
11. Implementar en el 100% de las entidades del Distrito una estrategia de teletrabajo que considere horarios flexibles, y que dentro de los criterios de priorización incluya personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, y madres cabeza de familia.
12. Las entidades y organismos distritales deberán avanzar progresivamente en el cumplimiento del Decreto Nacional 2365 del 2019. Adicionalmente, las entidades distritales propenderán por que

empleos nuevos que se creen y vacantes que se generen, cuando no tengan lista de elegibles, puedan ser provistas mediante nombramiento provisional con jóvenes entre los 18 y 28 años.

**Parágrafo.** El Distrito Capital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, deberá actualizar la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, consagrada en el Decreto Distrital 380 de 2015”.

A partir de esta disposición se promueve a desarrollar el plan de acción del antedicho decreto 380 de 2015, contenido en el CONPES 33 de 2023, sin embargo, dicha gestión NO actualizó la política pública de trabajo decente y digno, afirmamos lo anterior, debido a la débil participación que tuvo la actualización del plan de acción de la política de trabajo decente y digno contemplado en el conpes 33 respecto a la importante participación previa a la expedición del decreto 380 del 2015 y que podemos describir así:

Para la Política De Trabajo Decente y Digno – Decreto 380 de 2015: 2 años en su desarrollo se realizaron: 8 Talleres con sindicatos, etnias, mujeres, LGBTI, alcaldías locales, jóvenes, empresarios MiPymes, 85 entrevistas semiestructuradas a los actores del mundo del trabajo incluyendo organizaciones sindicales y de la sociedad civil, academia, entidades públicas distritales y nacionales, gremios y medios de comunicación.

Sumado a un proceso de recopilación de aportes a través de redes sociales durante 3 meses, tuvo espacio en la Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Bogotá, fue discutido y socializado el Documento Técnico de Soporte - DTS para la construcción de la Política Pública de Trabajo Decente y Digno, en distintas sesiones ordinarias y en la Comisión Intersectorial de Empleo. Los avances del documento fueron presentados en septiembre de 2013. A finales de 2014, se construyó el proyecto de Decreto de la Política Pública de Trabajo Decente y Digno

En cambio, para la actualización del Plan de Acción de la “Política Pública de Trabajo Decente y Digno en Bogotá D.C 2023-2038” se realizaron solo 4 Mesas de trabajo de manera virtual en dos días, con estas se construyeron los productos, seguido a una revisión del plan de acción consolidado en una reunión el 21 de diciembre de 2022, el 23 de marzo de 2023 se hizo socialización del proceso final de actualización, así como de los productos, resultados y entidades responsables y a finales del 2023 se publica el Plan, por lo que es evidente que se requiere una modificación que proyecte una inclusión y participación real a este plan de acción y por ende en todas las políticas de gestión de talento humano y trabajo digno en el distrito.

Así las cosas, pese a que la expedición de este plan de acción no tiene un año de su expedición como quiera que este no recogió ninguno de los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo que pasó, con el acuerdo 927 de 2024 *por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura en su art. Artículo 216 sobre Política de trabajo decente y digno en su parágrafo se plantea que “La Secretaría de Desarrollo Económico realizará revisión y seguimiento al Plan de Acción de la Política Pública de Trabajo decente y digno de Bogotá CONPES 33 de 2023.”*

Dicha **revisión** debe tener que las cifras que hablan por si solas, a corte **29 de febrero del 2024** el Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital informó que:

1. trabajadores vinculados por medio de la **carrera administrativa** 2022: 12.482; 2023 12.834 y **2023: 12.818.**

2. Por su parte para el caso de los nombramientos en **provisionalidad** se tiene del 2022: 4.545; 2023: 5689 y **2024: 5796**

Se relacionan 59.690 servidores públicos, que conforman la planta de personal de las entidades y organismos distritales.

En contraste las cifras de Ordenes de prestación de servicios se mueven así:

2022: 46.147; 2023: 58.931 y **2024: 50.458**

En este momento quiero destacar que el mayor número paradójicamente de trabajadores vinculados por OPS en las entidades públicas distritales a la fecha es así:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.: 2.555

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.: 3.638

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.: **6.988**

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.: 5.298

Le sigue, Secretaría Distrital de Integración Social: **6.673**

Y secretaria de educación distrital con: 1.610

Decimos que paradójicamente, destacando las entidades donde principalmente la población vulnerable demanda servicios de calidad y continuidad, y pese a lo dispuesto en Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano aprobado en conpes 07 de 2019.

Es preciso entonces recordar que el mundo laboral normalmente vive en constante cambio, por ende es necesario se revisen y midan las políticas para que participativamente se adapten a las actualizaciones que deriven de las discusiones, de las distintas fuentes del derecho y de los acuerdos entre las partes, así las cosas, se tiene por ejemplo la reciente **la sentencia C- 331 de 2023 que habla de que todos los trabajadores tienen derecho al descanso necesario y desconexión laboral o el Convenio 190 (en proceso de ratificación) “sobre la violencia y el acoso**, el cual protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales” y que respondería a las permanentes denuncias en este sentido en la administración distrital.

Pese a la existencia de una política de trabajo decente y digno con su plan de acción y de una política pública de gestión del talento humano, de lo contemplado en la ley 909 de 2024 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública, así como del decreto 1800 de 2019 y el decreto 498 de 2020, la gestión de la función pública y talento humano sigue siendo precario en el distrito y el freno al uso desmedido de OPS requiere de **unas medidas concretas para acorde a la realidad garantizar un trabajo decente y digno para Bogotá.**

### III. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

Que el artículo 1° de la Constitución Política, establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo, entre otros aspectos.

Que el artículo 25 ídem, consagra el trabajo como un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, prescribiendo además, que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Que el artículo 38 ibídem, garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, y el artículo 39 ejusdem, consagra el derecho de los trabajadores y empleadores para constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, cuyo reconocimiento opera a partir de la simple inscripción del acta de constitución; disposiciones que los reconocen como derechos humanos imperativos.

Que el artículo 53 Superior ordena al Congreso de la República expedir el estatuto del trabajo, señalándole los principios mínimos fundamentales que deberá tener en cuenta la Ley correspondiente, tales como:

*"Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.*

*El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.*

*Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.*

*La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".*

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT, como organismo especializado para los asuntos del trabajo y las relaciones laborales, y de la cual Colombia es miembro activo, dispone de un conjunto de convenios que definen un sistema de normas internacionales del trabajo, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y que según lo dispuesto por el artículo 53 ídem, hacen parte de la legislación interna.

Que el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho al trabajo decente de los/as trabajadores/as domésticos/as, fue ratificado por Colombia.

Que el Decreto Nacional 4904 de 2009 "Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones", en su numeral 3.1 del Capítulo III denominado "*Programas de Formación*", establece que las instituciones de

educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación, determinando el objeto de los mismos y los requisitos para su registro.

Que la protección integral y la calidad de vida de los trabajadores está amparada por el Sistema de Seguridad Social Integral creado por la Ley 100 de 1993 y definido como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la mencionada ley.

Que la citada Ley 100 de 1993 ha sido objeto de varias modificaciones legislativas, tal y como se enuncia a continuación: Ley 797 de 2003 (reforma algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y adopta disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales); Ley 1438 de 2011 (reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud); y la Ley 1562 de 2012 (modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta disposiciones en materia de Salud Ocupacional).

Que mediante la Ley 789 de 2002 se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, definiendo el sistema de protección social como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos y para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.

Que por medio de la Ley 1010 de 2006 se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, protegiendo dichas disposiciones el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.

Que por medio del Decreto Nacional 1443 de 2014 se definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Que a través del Decreto Nacional 4108 de 2011, se modifica la estructura del Ministerio del Trabajo así como sus objetivos, entre los que se encuentran los de: *"la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales."*

Que la Ley 1636 de 2013 creó el mecanismo de protección al cesante en Colombia, consagrando en el Capítulo V las disposiciones para la administración del mecanismo de protección al cesante, mientras que en el Capítulo VI se dictan las normas referidas al servicio público de empleo, y dentro de este el Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad, cuyo objeto es integrar, articular, coordinar y focalizar los instrumentos de políticas activas y pasivas de empleo que contribuyan al encuentro entre oferta y demanda de trabajo, a superar los obstáculos que impiden la inserción laboral y consolidar formas autónomas de trabajo, vinculando la acciones de gestión de empleo de carácter nacional y local.

Que por medio de la Resolución 209 de 2014, modificada por la 064 de 2015, proferidas por la Subdirección de Administración y Seguimiento de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, se

autorizó a la Agencia Pública de Gestión y Colocación de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, para prestar los servicios básicos de gestión y colocación de empleo.

Que por medio del Decreto Nacional 2852 de 2013 se reglamenta el Mecanismo de Protección al Cesante creado por la Ley 1636 de 2013, específicamente en los componentes relacionados con el Servicio Público de Empleo, la capacitación para la inserción laboral y el reconocimiento de las prestaciones económicas de seguridad social.

Que la Ley 1429 de 2010 *"Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo"*, contiene en el Título III, Capítulo 1, los incentivos para la generación de empleo de grupos vulnerables.

Que el Decreto Nacional 567 de 2014 estructura la Red Nacional de Formalización Laboral, para garantizar la consolidación del trabajo decente, la cobertura en seguridad social para todos y el desarrollo de las políticas activas de empleo, mediante la aplicación de las herramientas del Servicio Público de Empleo.

Que el documento 173 del 3 de julio de 2014, del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, contiene los lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes, cuyo objetivo central es *"Implementar estrategias que garanticen el tránsito de los jóvenes al mundo laboral y productivo en condiciones de calidad, estabilidad, y protección especial en los aspectos que se requieran."*

Que el Decreto Nacional 1444 del 2014 estructuró la Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo -Red Ormet, que estará integrada por entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal y por organizaciones y entidades privadas que se vinculen a la misma.

Que la Corte constitucional en la Sentencia C-614 de 2009 (Demanda de inconstitucionalidad del artículo 2° (parcial) del Decreto Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el artículo 1° (parcial) del Decreto Ley 3074 de 1968) y en la Sentencia C-171 de 2012 (Demanda de inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011), dispuso medidas para la efectividad de la norma en cuestión, declarando criterios de interpretación y aplicación de constitucionalidad condicionada.

Que de conformidad con el artículo 74 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 *"Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones"*, el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo tiene la misión de crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y sus poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad región.

Que mediante el artículo 75 ídem, fue creada la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del Distrito Capital, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, a la generación de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital.

Que según el artículo 78 íbidem, son funciones básicas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entre otras, las de: *"a. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo económico y social de Bogotá relacionados con el desarrollo de los sectores productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad y de integración creciente de la actividad económica"* y *"c. Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos, y estímulo*



*y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias laborales. En este sentido, participará en la elaboración y ejecución de la política de generación de empleo y la competitividad de las personas discapacitadas".*

Que el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., expidió el Decreto Distrital 294 de 2008, con el objeto principal de optimizar el gasto social distrital destinado a fomentar la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal en el Distrito Capital, estando dirigidas sus disposiciones a las entidades del nivel central y descentralizado de la Administración, así como a las localidades que destinen recursos de inversión para el desarrollo de programas, proyectos y/o acciones orientadas a fomentar la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal; a las instituciones distritales que ofrezcan créditos educativos o incentivos para proyectos productivos o creación de empresas; y al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP.

Que el Decreto 546 de 2007 *"Por el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital"*, conforma la Comisión Intersectorial para la Generación de Empleo e Ingresos y Oportunidades Económicas en el Distrito Capital, que tiene por objeto coordinar la ejecución de las políticas y estrategias de generación de empleo e ingresos, de estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias para la generación de ingresos; de acceso a los servicios de bancarización y de constitución de incentivos para propiciar y consolidar la asociación productiva y solidaria de los grupos económicamente excluidos.

Que el Decreto Distrital 064 de 2011 *"Por el cual se formula la política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C."*, contempla varios ejes temáticos, entre ellos el de Generación de Empleo e Ingresos y dentro de este la Sección 5-1 sobre generación de empleo de calidad, que contiene los objetivos y las estrategias para llevarlo a cabo.

Que la ley 278 de 1996 crea las Subcomisiones Departamentales de Políticas Salariales y Laborales, de carácter tripartito, con la participación del gobierno, representantes de los empleadores y de los trabajadores, con el objetivo de fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y promover el diálogo social y la política del Trabajo Decente y Digno.

Que la Ley 278 de 1996 sobre la *"Comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales creada por el artículo 56 de la Constitución Política"*, señala en su artículo 3° las funciones de las subcomisiones departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encontrándose dentro de ellas, la de: *"c) Fijar de manera concertada la política laboral mediante planes estratégicos en su departamento, en concordancia con lo que al respecto haya fijado la comisión nacional, sobre estos asuntos: bienestar de los trabajadores; adopción de nuevas formas de capacitación laboral; creación de empleo; mejoramiento de la producción y la productividad; redistribución equitativa del ingreso; reconversión industrial y recalificación laboral; participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; universalización de la seguridad social; garantía de los derechos de la mujer, el menor trabajador y otros trabajadores vulnerables y garantía de los derechos sindicales..."*.

**El acuerdo 927 del 2024 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura en su Artículo 216. Política de trabajo decente y digno.** El Distrito Capital de Bogotá, adelantará las acciones que, considerando las necesidades de cada una de las entidades y organismos distritales, propenda porque en aquellos empleos que

sean creados por la Administración cumplan con los estándares de trabajo decente, asegurando igualdad de oportunidades, remuneración justa, seguridad en el empleo, y **condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los empleados, con un enfoque particular en la reducción de las disparidades de género y el fomento de la inclusión de jóvenes.**

**Parágrafo.** La Secretaría de Desarrollo Económico **realizará revisión y seguimiento** al Plan de Acción de la Política Pública de Trabajo decente y digno de Bogotá CONPES [33](#) de 2023.

#### IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente en los artículos 8, 12, y 13 el Concejo de Bogotá es Competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo ya que los contenidos del mismo no versan sobre los aspectos enunciados en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21, del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 la presentación de esta iniciativa no se encuentra restringida al Ejecutivo.

Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 8. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplen las autoridades distritales.

Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12. – Atribuciones. Corresponde al concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...) 25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones Vigentes.

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 13- Iniciativa: los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero el contador y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario. Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan excepciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el alcalde”.

#### V. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con la Ley 819 de 1993 en su artículo 7, “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo”. El presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal, por tanto, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C., la presente iniciativa.

Atentamente,

**HEIDY LORENA SÁNCHEZ BARRETO**  
Concejala de Bogotá

**PROYECTO DE ACUERDO NO 087 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

*“Por medio del cual se dictan lineamientos para la actualización de la política pública de trabajo decente y digno de Bogotá D.C. contenida en el decreto 380 de 2015 y para la revisión y seguimiento del Plan de acción contenido en el CONPES 33 de 2023”*

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 1º, del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA**

**ARTÍCULO 1.** Objeto: Dictar lineamientos para la actualización de la política pública de trabajo decente y digno de Bogotá D.C contenida en el decreto 380 de 2015 y para la revisión y seguimiento del Plan de acción contenido en el CONPES 33 de 2023

**Artículo 2.** Revisión y seguimiento: Se revisará y dará seguimiento al Plan de Acción de la Política Pública de Trabajo decente y digno de Bogotá CONPES [33](#) de 2023 conforme lo contemplado en el art. 219 del acuerdo 927 del 2024.

**Artículo 3:** Lineamientos y principios para la revisión y seguimiento: La secretaría de desarrollo económico realizará en un plazo máximo de 6 meses la revisión y seguimiento del plan de acción de la política pública de trabajo decente y digno de Bogotá, lo cual permita evaluar el cumplimiento como mínimo de lo siguiente:

1. Promoción eficaz de el acceso de trabajadores y trabajadoras de Bogotá, D.C., al derecho de tener un trabajo decente y digno como una forma de erradicación de la segregación social, y de género, potenciando los efectos sobre el mercado laboral de las políticas macroeconómicas, sectoriales y educativas”
2. Garantía del enfoque de género, el cual se entenderá para la política distrital de trabajo decente y digno como la construcción de estrategias por parte de la administración distrital para la promoción de políticas y prácticas laborales inclusivas, la eliminación de barreras de acceso y discriminaciones salariales, la promoción de la igualdad en el desarrollo profesional y la

implementación de programas de formación y sensibilización sobre cuestiones de género en el lugar de trabajo.

3. Inclusión del principio de progresividad y no regresividad. El principio de progresividad implica que el Distrito debe tomar medidas positivas para mejorar y fortalecer los derechos laborales de las personas trabajadoras. El principio de no regresividad implica que el Distrito no debe adoptar medidas que disminuyan o reduzcan los derechos laborales y las condiciones de trabajo ya establecidas.

4. Inclusión del principio de universalidad, en el entendido en que se buscará promover su aplicación a todas las personas que habitan en Bogotá.

5. Garantizar el cumplimiento de los principios mínimos fundamentales contemplados en el art. 53 de la CN y teniendo en cuenta los convenios de la OIT que promueven espacios de trabajo sanos y buenas practicas laborales.

6. Implementación de acciones afirmativas, las cuales se entenderán como medidas o herramientas normativas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas personas o grupos, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género, sociocultural o económico que los afectan, para avanzar hacia una igualdad material de estos grupos poblacionales. Las cuales se desarrollaran para priorizar las vinculación a las vacantes, espacios de formación y en general las políticas de trabajo decente y digno a personas en condición de discapacidad, afro, mujeres jefes de hogar, población indígena y LGBTI.

**Parágrafo:** Lo descrito en el presente articulo se deberá incorporar en los principios de la actualización de la política pública de trabajo decente y digno de Bogotá D.C contenida en el decreto 380 de 2015 para su actualización.

**ARTÍCULO 4.** Lineamientos para la actualización: La actualización de la Política Pública de Trabajo Decente y Digno y su plan de acción, será responsabilidad de la administración, la cual tendrá en cuenta por lo menos lo siguiente:

1. La administración distrital (en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Planeación y el DASCD) presentará antes del 31 de diciembre de 2025 los resultados del estudio de cargas laborales, necesidades de personal, recursos presupuestales disponibles y diseño institucional, especificando en qué entidades y en qué tiempo se abrirán, por lo menos, 1.500 empleos y en qué entidades y en qué tiempo se realizarán concursos de méritos para la provisión de 1.850 vacantes
2. La Secretaría de desarrollo económico generará una estrategia de colocación laboral y seguimiento para esta población, con un seguimiento mínimo de un año después de que un beneficiario es ubicado en un puesto laboral.

3. La Secretaría de Desarrollo Económico elaborará un estudio al cabo de 4 años que permita medir el impacto de la iniciativa, y las causas fundamentales de las fallas que se presenten en su implementación.
4. La administración socializará con los departamentos de recursos humanos de las entidades del distrito los resultados de los estudios realizados para la valoración del trabajo del cuidado y prevención del acoso laboral para todos los trabajadores de las entidades y empresas del sector público distrital.
5. La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación generarán programa de incentivos dirigido a las y los trabajadores oficiales que no cuenten con título profesional para que accedan a programas educativos en educación superior.

**ARTÍCULO 5.** Ruta de exigibilidad: La actualización de la política pública de trabajo decente y digno deberá contener una ruta de exigibilidad de derechos para las y los trabajadores, independientemente de la naturaleza de su vínculo. Dicha ruta de exigibilidad de derechos deberá establecer, por lo menos:

1. Mecanismos de acompañamiento del Estado a trabajadores para la garantía de sus derechos en instancias judiciales y administrativas. Dicha ruta se construirá en conjunto con el Ministerio del Trabajo.
2. Herramientas para la remisión de casos de vulneración de derechos laborales a los entes de control.

**ARTICULO 6.** Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, otorgando a la administración un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la expedición del presente acuerdo, para adelantar las gestiones necesarias para su cumplimiento.

**PROYECTO DE ACUERDO NO 088 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN Y/O MODIFICAN LOS ACUERDOS 079 DE 2003 Y 735 DE 2019, PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO, INCLUIDO EL ESPACIO VIRTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**VI. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

La presente propuesta normativa busca materializar medidas acordes con la prevención, atención y sanción de una de las modalidades de la violencia sexual más extendida e invisibilizada, como lo es el acoso sexual en el espacio público.

Las medidas establecidas en esta propuesta tienen como objetivo establecer acciones de prevención al acoso sexual en el espacio público a través de un trabajo coordinado de las diferentes instituciones distritales responsables, dentro de ellas campañas comunicativas, escenarios de formación, establecimiento de protocolos de atención, normas de señalización, que permitan dar una respuesta efectiva por parte del gobierno distrital frente a la erradicación de este tipo de violencias y goce efectivo del espacio público.

Con el fin de generar un abordaje integral, se complementa con medidas que incluyen estas violencias como faltas dentro del código distrital de policía, así como el procedimiento para la denuncia y sanción. Con ello se busca reforzar la garantía del acceso a la justicia a las mujeres víctimas de este tipo de violencia sexual.

**VII. JUSTIFICACION Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**

El espacio público es uno de los escenarios en donde se identifican las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, en el que se presentan diversas violencias que restringen los derechos de las mujeres, e impide que puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones. El sistema sexo-genero les recuerda a las mujeres que su lugar socialmente impuesto es el ámbito privado y por tanto debe asumir “los riesgos” de un espacio que no les pertenece, como lo es el espacio público.

Este mensaje se trasmite en los diversos ámbitos de la vida de las mujeres: educativo, laboral, comunitario, e irradia estructuras como en el sistema de justicia. Si bien se ha avanzado en leyes que buscan prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, aquellas violencias ocurridas en el espacio público y que no llegan a configurarse como delitos consumados, enfrentan muchas barreras para ser judicializadas y

para que se garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

El acoso sexual en el espacio público se constituye como una modalidad de la violencia sexual que afecta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y a las personas con identidad de género y orientación sexual diversa. El Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, de ONU Mujeres, señala que el acoso sexual:

*“Son acciones realizadas de manera intencional por parte del perpetrador y sin el consentimiento, acuerdo o permiso de la persona quien lo recibe e incluye comentarios sexuales no deseados, acciones o gestos y que incluyen las siguientes firmas Verbales o sin contacto físico. Comentarios sexuales sobre las partes del cuerpo o apariencia de una persona, silbidos, piropos, ofertas sexuales, insinuaciones sexuales, comentarios de doble sentido. No verbales. Gestos, miradas lascivas, exposición de los órganos sexuales, señas, sonidos, seguimiento o acecho. Contacto físico. Roces, manoseo, apretones y pellizcos, empujones, frotos contra la persona de una manera sexual”<sup>6</sup>.*

La Secretaría Distrital de la Mujer ha consolidado algunos elementos que hacen parte del acoso sexual en el espacio público:

- *Comportamientos sexuales que, en otros espacios y relaciones, pueden ser expresiones de afecto y de sexualidad, pero como violencia en el espacio público se caracterizan por ser actos dirigidos a una mujer desconocida o con quien no se tiene una relación, es decir, entre la víctima y el agresor no preexiste una relación que permita prever que el acto de contenido sexual se va a presentar;*
- *Comportamientos ofensivos, que por su contenido o por la forma en que se dan causan la humillación de la mujer afectada y que su carácter sexual es precisamente una forma para degradar a la persona y tratarla como un objeto, como algo –no alguien– obligada a recibir la agresión y*
- *Una expresión de relaciones de poder, en la que la humillación y la degradación se conectan con la subordinación de las mujeres por ser mujeres y en la que el comportamiento en sí mismo es una forma de reafirmar que las mujeres en el espacio público deben asumir el riesgo de salir de los espacios de protección como la casa y que los hombres en este espacio tienen permitido agredir sexualmente a las mujeres<sup>7</sup>*

Pese a existir desde el 2008 el delito de acoso sexual en el código penal, su configuración no aborda los escenarios de ocurrencia ni la complejidad de estas violencias. Las conclusiones del análisis jurisprudencial

<sup>6</sup> ONU Mujeres (2011), Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Global Programme. Glossary and Definitions of Key Terms, disponible en [http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/safe\\_cities\\_glossary\\_2011.pdf](http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/safe_cities_glossary_2011.pdf)

<sup>7</sup> Secretaría Distrital de la Mujer (2019), Protocolo de Prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público en Bogotá.



sobre acoso sexual en el espacio público en Colombia, señalaron que ante la inexistencia de un delito que configure las características propias del acoso sexual en el espacio público, estas violencias son judicializadas por otros delitos que desdibujan las afectaciones de carácter sexual y niegan los derechos a las víctimas, los procesos se dilatan y las mujeres muchas veces desisten de acudir o de mantenerse en un proceso judicial, porque sus derechos no son garantizados y muchas veces se enfrentan a escenarios de revictimización.

Dentro de las conclusiones de este análisis, también se hizo visible la necesidad de revisar otro tipo de respuestas para la atención de estas violencias, más allá del ámbito penal, que puedan generar acciones oportunas y efectivas por parte del Estado y que garanticen los derechos de las víctimas de una manera integral.

Por ello, las medidas de tipo administrativo incluidas en esta propuesta cobran relevancia para la prevención y sanción del acoso sexual en el espacio público en el Distrito Capital, las cuales podrían permitir establecer acciones de transformación a través de la educación, capacitación y comunicación, estrategias de articulación y coordinación con las diferentes dependencias del distrito, así como el procedimiento sancionador y sanciones administrativas a que haya lugar.

Teniendo en cuenta que el Código Distrital de Policía es el instrumento normativo para el distrito capital que busca establecer las reglas de convivencia y seguridad ciudadana y la prevención de conductas que puedan trascender en hechos de mayor gravedad, se identifica como el instrumento normativo para incluir como faltas las conductas de acoso sexual, las cuales no sustituyen los mecanismos de acceso a la justicia por vía penal, sino que buscan ser un complemento a la ruta judicial para garantizar de manera integral el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias tanto en los ámbitos privados como públicos.

## **Necesidad de la propuesta normativa**

### **1. Obstáculos de acceso a la justicia**

De acuerdo con la caracterización<sup>8</sup> realizada por las duplas de atención psicojurídica sobre las violencias en el transporte público de la Secretaría Distrital de la Mujer, se identifica que en los casos en los que los agresores fueron aprehendidos por la policía se reportan diversos obstáculos:

1. Se les otorga los datos del agresor pero no se les ofrece la opción de interponer la denuncia, en muchos casos minimizando los hechos porque el agresor “no la tocó, no le hizo nada” desincentivando la denuncia.
2. En los casos en donde se logra denunciar, los hechos se tipifican como injuria por vía de hecho, que es un delito en contra la integridad moral que desconoce las afectaciones sexuales de estos hechos. Al ser un delito conciliable se confronta a las mujeres con el agresor, y cuando no hay acuerdo en su mayoría se

---

<sup>8</sup> Secretaría Distrital de la Mujer, (2022), Duplas psicojurídicas: un año y medio de experiencia: guía de caracterización sobre las atenciones realizadas por el equipo.

archivan las investigaciones o se presiona a las mujeres a llegar a un acuerdo conciliatorio.

3. Las mujeres víctimas de agresiones en taxis o de plataformas privadas sienten temor por denunciar pues el agresor tiene los datos de ubicación que puede implicar riesgos a su vida e integridad.
4. En muchos casos las mujeres no lograron identificar a su agresor, lo cual dificulta acceder a la justicia, y en los casos en los que se denuncia estas son archivadas.
5. La capacidad de acción de las autoridades para hechos ocurridos en espacios privados de acceso público como centros comerciales, o consultorios médicos es reducida porque no se tiene claras las competencias en estos escenarios.
6. Las violencias ocurridas a través del espacio virtual, identificado como un escenario que hace parte de lo público, que se relacionan con amenazas de publicar fotos o videos íntimos, envío de mensajes o fotos de contenido sexual sin consentimiento, acceso abusivo a correo electrónico o redes sociales, son difícilmente judicializadas, la fiscalía impone en la víctima la carga de identificación del agresor y no existe un interés en investigar estas conductas.
7. Las violencias perpetradas por las autoridades en el marco de la protesta y la movilización social, también encuentran dificultades ante la imposibilidad de identificar al agresor y el miedo de que se ejerzan represalias en su contra, pues ellas si fueron debidamente identificadas por las autoridades.

Una normatividad que aborde estos hechos de manera específica, contribuirá a la superación de los obstáculos planteados, en miras a garantizar de manera real el acceso a la justicia para las mujeres habitantes de Bogotá.

## **2. Cifras de ocurrencia**

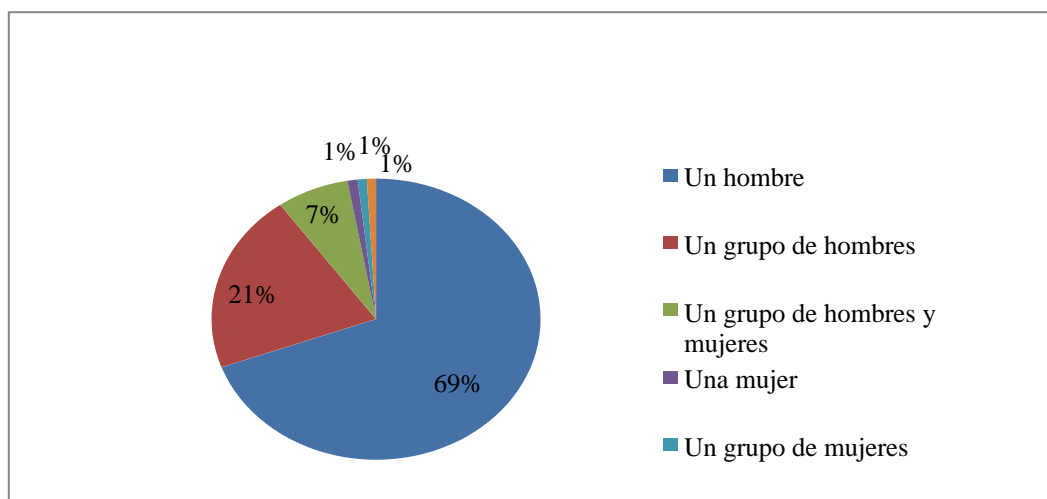
Según el programa de ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres para 2017<sup>9</sup> el 83.9% de las mujeres en Bogotá se sentían muy inseguras o inseguras usando el sistema Transmilenio. El 38.4% de las mujeres encuestadas decidieron no tomar este transporte por temor a sufrir algún tipo de violencia sexual.

En el primer semestre de 2019, el distrito realizó un estudio de línea de base sobre acoso callejero en la localidad de Kennedy<sup>10</sup>, con una muestra de 1374 mujeres mayores de 14 años, en el que se identificó que los lugares más inseguros para las mujeres son las vías y calles 49.2%, los espacios deportivos 31.5%, el acceso a las estaciones de Transmilenio 26.8% y los puentes peatonales 26.7%.

<sup>9</sup> ONU Mujeres, (2017) Ciudades seguras y espacios públicos seguros para mujeres y niñas Colombia, disponible en <https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2019/03/brochure-ciudades-seguras>

<sup>10</sup> Secretaría Distrital de la Mujer (2019), Mujeres en cifras 17. Acoso Callejero- Sexual. Línea de base, disponible en <https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2019/boletines/Mujeres%20en%20Cifras%202017.pdf>

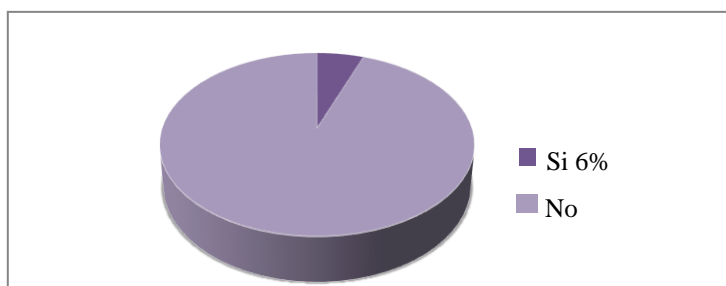
7 de cada 10 mujeres encuestadas dice haber experimentado acoso callejero y señalaron que la persona que lo realizó fue un hombre, y en 1 de cada 5 casos fue un grupo de hombres.



**Ilustración 1 En la mayoría de situaciones de violencia vividas ¿Quién realizó el acoso? (%)**

Respecto al acceso a la justicia, solo el 6% de las mujeres que han vivido en los últimos 12 meses alguna situación de acoso la han denunciado ante alguna autoridad. Entre quienes no denunciaron, el 34,8% argumentan que no lo hicieron por falta de pruebas, el 24,0% porque opinan que no sirve para nada denunciar, el 22,2% no creen en la justicia, el 16,7% piensan que el trámite es muy complicado, el 11,5% no saben dónde denunciar y el 16,3% no lo hacen porque no creen que sea grave lo ocurrido.

1 de cada 3 mujeres que denunciaron responde que la autoridad que tomó la denuncia lo hizo juzgándola negativamente.



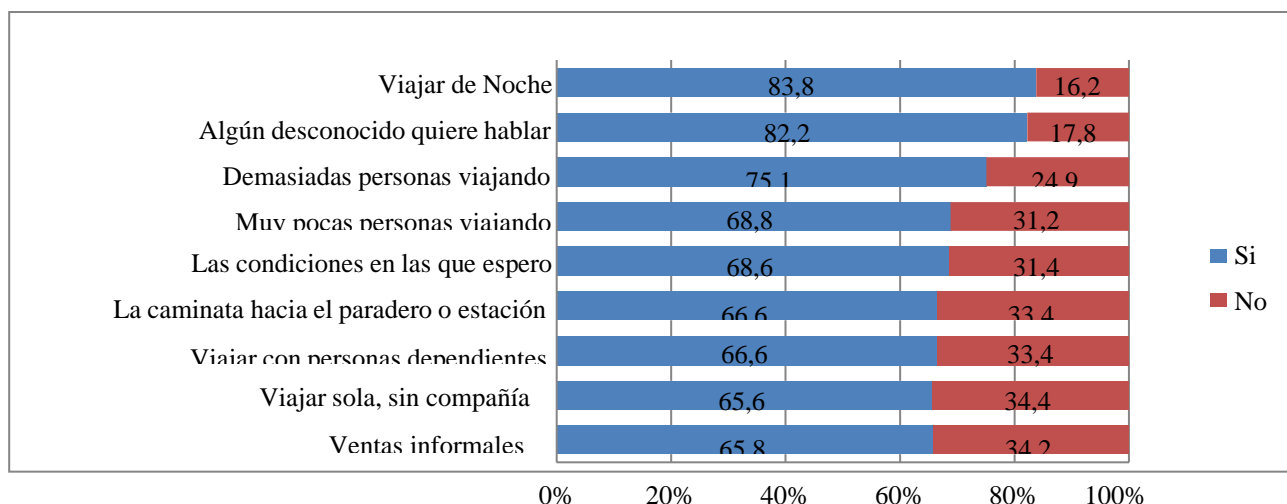
**Ilustración 2 ¿Denunció esta situación de acoso? (%)**

Por otro lado, la campaña me muevo segura de la Secretaría Distrital de la Mujer en 2019<sup>11</sup> realizó una encuesta sobre percepción de seguridad de las mujeres en el espacio y transporte público durante la noche se identificó

<sup>11</sup> Secretaría Distrital de la Mujer (2019b), Percepción de seguridad de las mujeres en el espacio y transporte público durante la noche. Bogotá-2019, disponible en <https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/mms/Presentaci%C3%B3n%20Encuestas.pdf>

que:

1. 3 de cada 4 mujeres consideran que la noche en Bogotá es peligrosa.
2. El 34.5% de las mujeres entrevistadas consideran que la iluminación de las áreas transitadas es poca.
3. El 89.1% de las mujeres considera que no hay seguridad en las vías.
4. 47,1% De las mujeres afirman que los senderos peatonales son difíciles de transitar.
5. Frente a las situaciones de inseguridad en el transporte público El 83.8% de las entrevistadas considera inseguro viajar de noche, el 82.2% que algún desconocido quiera entablar una conversación, el 75.1% demasiadas personas viajando, el 78.8% muy pocas personas viajando, la caminata hacia el paradero o estación 66.6%, viajar con niño o niña, persona mayor o con discapacidad 66.6%, viajar sola, sin compañía 65.6%, ventas informales 65.8%.



**Ilustración 3 Percepción de seguridad transporte público en la noche**

De acuerdo a los datos reportados por la Secretaría Distrital de la Mujer, para el año 2021 fueron acompañados 49 casos ocurridos en Transmilenio, 7 casos en bus, 14 casos en taxi y 18 casos en plataformas de transporte.

Dentro de las expresiones de violencias los manoseos o tocamientos reportan el 44%, la agresión verbal o física el 17%, los comentarios sexuales el 15%, el exhibicionismo el 10%, rozamiento de partes del cuerpo 8%, miradas morbosas 4% y toma de fotografías o grabaciones sin consentimiento 2%. Los lugares de ocurrencia de las expresiones de acoso callejero, el lugar que representa más casos es la calle con 98 casos, otro espacio 77 casos, comercio 19 casos y parque 5 casos.

Frente a las denuncias de acoso sexual en Bogotá de acuerdo con los datos reportados por el Ministerio de Justicia<sup>12</sup> entre 2012 y 2020 se reportaron 2771 denuncias por acoso sexual de las cuales 22 se encuentran en

<sup>12</sup> Ministerio de Justicia, (2020), Acoso sexual- Fiscalía, disponible en <https://sej.minjusticia.gov.co/ViolenciaGenero/Paginas/AcosoSexual-Fiscalia.aspx>

ejecución de penas, es decir, con sentencia condenatoria, lo que corresponde a un grado de sanción de un 0.7%.

Esta información, refleja la necesidad de fortalecer el marco normativo de la ciudad, a través de una norma que aporte a la desnaturalización y a la erradicación de estas violencias con acciones de prevención y sanción que permitan a las mujeres habitar y disfrutar del espacio público.

### **3. Vacíos en el marco normativo violencia sexual**

Tal como se evidenció en los resultados del análisis jurisprudencial del delito de acoso sexual en Colombia, actualmente las conductas de acoso sexual en el espacio público no son contempladas por el delito establecido en el Artículo 210 A del código penal, pues este desconoce las múltiples dinámicas, ámbitos y factores que intervienen en el acoso sexual en el espacio público.

Dentro de los hallazgos se identifican obstáculos tanto en la interpretación como en la configuración del tipo penal. Frente a la interpretación se evidencia la exigencia de una relación de subordinación que es entendida de manera restringida y aplicada solo a escenarios laborales y educativos, sin tener en cuenta la subordinación estructural a la que se encuentran sometidas las mujeres.

La persistencia de los hechos en el tiempo es otra de las interpretaciones que obstaculiza que las violencias ocurridas en el espacio público puedan ser abordadas por el delito de acoso sexual, pues en su mayoría, son hechos que ocurren sorpresiva y esporádicamente y no se conoce la identidad del agresor.

La configuración del tipo penal entonces, si bien podría interpretarse de manera amplia, posee un contenido que limita la adecuación de los hechos ocurridos en el espacio público, ocasionando que se judicialicen a través de delitos querellables de menor categoría.

Lo anterior, trae consecuencias en términos procesales, pues se desestiman los hechos, no se reciben las denuncias o se investigan por el delito de injuria por vía de hecho, lo cual resulta sumamente problemático, pues se desliga simbólica y materialmente de las violencias de tipo sexual que sufrieron las mujeres en la calle. Trae consigo desistimientos pues al ser un delito querellable y por tanto conciliable, al tener que enfrentarse con su agresor las mujeres prefieren desistir.

### **4. Necesidades de las mujeres víctimas- enfoque reparador**

De la experiencia en el acompañamiento de casos por parte de las profesionales de la Secretaría de la Mujer, se ha identificado que muchas de las mujeres víctimas más allá de que se imponga una pena al agresor, desean que se repare el daño causado, que el agresor se responsabilice de su acción, que pida perdón, que no comparta los mismos espacios, que realice algún trabajo o curso pedagógico que le permita transformar su visión y su posición frente a las mujeres y se generen garantías de no repetición.

La Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que los actos simbólicos establecidos dentro de la reparación además de generar efectos en las situaciones de cada una de las víctimas, pretende generar efectos colectivos al hacerse público el rechazo de estos hechos, al reconocer la gravedad de los mismos y al comprometerse con la erradicación de la violencia, se envía un mensaje de rechazo y de no tolerancia que a su vez busca propiciar la no repetición<sup>13</sup>.

Por tal razón, la inclusión de elementos de justicia restaurativa, son esenciales en el marco de esta propuesta. Al ubicar a la víctima como sujeto activo en la presentación de soluciones y propuestas de reparación de acuerdo a sus expectativas y necesidades, con ello no solo se aporta a la reparación individual sino a la reparación colectiva con respuestas que transmitan un mensaje colectivo, pues los hechos más allá del daño generado en la víctima individual dejan un efecto de miedo de habitar las calles o el transporte público por tanto la sanción social que se pueda generar y el mensaje de no repetición que incluya acciones estatales concretas permitirá cambiar el posicionamiento de las mujeres en el espacio público y su relacionamiento con él.

De tal forma, haciendo uso de la función preventiva y pedagógica, establecidas en el código Nacional de Policía (art 2), la presente propuesta normativa incluye sanciones con enfoque reparador que permitan a las mujeres a través de medidas reales y concretas la garantía de su derecho a la justicia y a la reparación.

## **5. Sanciones administrativas como complemento a las medidas judiciales**

El procedimiento, las faltas y las medidas correctivas acá presentadas pretenden ser un complemento y no un remplazo de las medidas judiciales de tipo penal existentes. El objetivo de la presente iniciativa busca generar una respuesta estatal más cercana y expedita a las mujeres víctimas. Sin ser excluyente de la posibilidad de adelantar el proceso penal, si así lo considera pertinente la víctima y si los hechos pueden llegar a constituir un delito.

El establecimiento de los hechos de acoso sexual en el espacio público como una falta administrativa, pretende constituirse como una alternativa de tratamiento inmediato y evitar el desgaste y la revictimización del largo proceso judicial que deben enfrentar las mujeres víctimas de estas violencias, que muchas veces resultan en desistimientos e impunidad.

Adicionalmente, la presente propuesta no se limita a incluir las faltas dentro del código de policía. Establece un marco regulatorio que incluye medidas de prevención, atención y reparación para generar un abordaje integral, que permita al distrito capital aportar acciones bajo los principios de corresponsabilidad, articulación y eficacia hacia la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

De tal manera, con un marco jurídico sancionatorio del ámbito distrital se pretende fortalecer la labor integral

---

<sup>13</sup> Corte Constitucional, (2016) Sentencia T 652 de 23 de noviembre de 2016

del Estado mediante:

- La modificación de normas y creación de medidas: en este de caso de tipo administrativo que corresponden a la competencia del ente territorial.
- Con preeminencia del ámbito distrital sobre el nacional: para mayor accesibilidad que podría tener este tipo de justicia para las víctimas, teniendo en cuenta los obstáculos existentes en el ámbito penal.
- Bajo las condiciones tanto constitucionales como legales que favorecen la inclusión de este tipo de medidas: la constitución incluye el bloque de constitucionalidad que integra a la misma los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los que garantizan la igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Así como las leyes y medidas de política pública de erradicación de violencias y medidas de convivencia que permiten la inclusión de las medidas de la presente propuesta.

### **Experiencias comparadas**

En el contexto regional, los gobiernos nacionales y locales han adoptado diversas estrategias para abordar el tema de acoso sexual en el espacio público. Algunos de ellos se han enfocado en el fortalecimiento del sistema penal y por tanto en la inclusión de delitos concretos al código penal, otros han generado o reformado leyes o cuerpos normativos de violencias contra las mujeres en general que incluyan el tema de acoso sexual en el espacio público. Otros han optado por leyes específicas de medidas de prevención, atención y sanción.

Las administraciones locales han optado por incluir como infracciones las conductas de acoso sexual en el espacio público y por tanto se imponen sanciones de multa, arresto y trabajo comunitario o definir la conducta y establecer actividades de visibilización (México- Argentina). En Lima Producto de la delegación a que hace la ley de acoso sexual en el espacio público a los gobiernos regionales, provinciales y locales, existen ordenanzas como en el distrito de independencia que sanciona con multa la conducta de acoso sexual en espacio público y establece otras medidas de prevención. O se evidencian las normas que establecen un protocolo de actuación para el sistema de transporte público, como es el caso de Quito.

Otras estrategias pueden incluir, medidas en las leyes de desarrollo urbano<sup>14</sup> sobre la planeación de los espacios públicos que favorezcan la libre circulación de las mujeres, así como la planeación de las políticas de seguridad teniendo en cuenta las necesidades y riesgos para las mujeres.

---

<sup>14</sup> México, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2016.

En el siguiente cuadro se identifican las medidas administrativas y judiciales que se han adoptado en algunos países de América Latina, que pueden dar algunos referentes para las decisiones que se tomen frente a la propuesta de decreto o Acuerdo en la ciudad de Bogotá

### México

CIUDAD	Ciudad de México
Instrumento normativo	Ley de cultura cívica
Tipo de medidas	Sancionatorias
Tipo de sanción	Administrativa (administrativa (amonestación, arresto administrativo o actividades de apoyo a la comunidad).
Conductas	<p>Infracciones a la dignidad de las personas:</p> <p>VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a través de la lactancia, en las vías y espacios públicos;</p> <p>IX. Proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona con el propósito de afectar su dignidad; y</p> <p>X. Realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona. Sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada.</p>
Sanciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por insultar a mujer que amamanta en vía pública: se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad</li> <li>• Por acosar con silbidos o frases sexuales y exhibicionismo y por exhibicionismo: Se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.</li> </ul>
Otras Medidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos de reeducación y/o sensibilización sobre igualdad, no discriminación y no violencia de género y/o nuevas masculinidades.</li> <li>• La persona infractora quede registrada en un Subregistro de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México, y, en caso de haber reincidencia, que sea remitida a la autoridad penal (Ministerio público) para que sea determinada su responsabilidad.</li> <li>• Para poder acceder a la sanción con trabajo comunitario es necesario inscribirse en un padrón de infractores.</li> </ul>

CIUDAD	Puebla
Instrumento normativo	Código reglamentario municipal
Tipo de medidas	Sancionatorias
Tipo de Sanción	Falta Administrativa art 209 /sanción administrativa



Conductas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las expresiones verbales con connotación sexual o lasciva, tales como palabras, comentarios, jadeos, silbidos o cualquier sonido que puedan aludir al cuerpo, la sexualidad, la forma de vestir o a la edad.</li> <li>Las conductas no verbales con connotación sexual o lasciva, tales como exhibición de genitales, masturbación, actos que involucren contacto corporal, tocamientos, roces intencionales u opresión de genitales contra el cuerpo.</li> <li>Invitaciones, insinuaciones, solicitudes o proposiciones para actos lascivos o con connotación sexual;</li> <li>La captación de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o de alguna parte de él, con connotación sexual o lasciva.</li> </ul>
Sanciones	Un arresto inmutable de hasta 36 horas y una multa de hasta ocho mil pesos. Se obliga al infractor a acudir a un programa o taller de sensibilización y concientización, con el fin de evitar que reincida.
Autoridad que impone la Sanción	Juzgado calificador. La policía atiende el caso si es flagrancia, fuera de flagrancia se puede denunciar ante el juzgado con apoyo de algún testigo, de fotografías, videos y demás elementos que sirvan para sostener el dicho.

<b>CIUDAD</b>	<b>Guadalajara</b>
Instrumento normativo	Reglamento de Policía y Buen Gobierno
Tipo de medidas	Sancionatorias
Tipo de sanción	Administrativa
Conductas	Molestar a otra persona a través de acciones, expresiones, o conductas de naturaleza o connotación sexual, que generen una situación intimidatoria, de incomodidad, degradación o humillación, o un ambiente ofensivo en los lugares establecidos en el artículo 10 del reglamento.
Sanción	La persona acosadora puede ser sancionada con un número de horas de arresto cuando es descubierto in fraganti o bajo denuncia de la persona acosada y se le puede imponer una multa. (30 a 60 UMA diarias, 36 horas de arresto)
Autoridad que impone la sanción	La Policía Municipal el que ejecute la detención. La queja se puede interponer ante cualquier policía, pero este debe derivarlo al municipal quien es el titular de la sanción para los hechos de orden público considerados como faltas administrativas.

## Perú

<b>PAÍS</b>	<b>Perú</b>
Instrumento Normativo	Ley No 30314 de 2015 para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos

Tipo de Medidas	Prevención, Atención y sanción
Conductas	<p>Se establece el concepto de acoso sexual en el espacio público, los sujetos, el ámbito de aplicación, los elementos constitutivos del Acoso sexual.</p> <p>Dentro de las manifestaciones del acoso sexual en el espacio público establece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actos de naturaleza sexual, verbal o gestual</li> <li>• Comentarios e insinuaciones de carácter sexual</li> <li>• Gestos obscenos que resultan insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos</li> <li>• Tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos.</li> </ul>
Medidas	<p><b>Sanciones:</b> se delega esta competencia a los gobiernos regionales, provinciales y locales para que establezcan procedimientos administrativos para la denuncia y la sanción, incorporen medidas de prevención y atención en los planes operativos institucionales y brinden atención a su personal.</p> <p>Al ministerio del interior lo delega para establecer como contravención en el código Nacional de policía el acoso sexual en espacio público y sanciones correctivas. Le ordena desarrollar un registro Policial de denuncias por este tipo de acoso, le ordena crear un protocolo de atención de estos casos y tipificar como infracción en el régimen disciplinario de la policía como conducta sancionable negarse a recibir denuncias de acoso sexual en el espacio público</p> <p><b>Prevención:</b> inclusión en políticas públicas, cursos de formación a personal de servicio público de transporte</p> <p>Acciones de prevención y atención de los casos derivados de acoso sexual en el espacio público dentro de los servicios médicos de salud mental.</p>

<b>CIUDAD</b>	<b>Lima_ Distrito Independencia</b>
Instrumento Normativo	Ordenanza N° 000439-2022-MDI
Tipo de medidas	Sancionatorias y preventivas

Medidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sancionatorias multa de S/ 9,200 (equivalente al 200% de una Unidad Impositiva Tributaria-UIT) a quienes realicen un comportamiento físico o verbal inapropiado de índole sexual grave contra una o varias personas, tales como tocamientos, frotamientos contra el cuerpo, masturbación pública, exhibicionismo. Alcanza también actos de tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación, exhibicionismo o mostrar los genitales en contra de una u otras personas, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes; en los espacios públicos.</li> <li>- En el caso de acoso sexual callejero de índole sexual leve contra una o varias personas, tales como frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, se sancionará con una multa de 4,600 soles (equivalente al 100% una Unidad Impositiva Tributaria-UIT).</li> <li>- Por no colocar carteles que prohíban el acoso sexual o no seguir los lineamientos técnicos de medición, respecto a la colocación de carteles que contengan esta prohibición en establecimientos, obras en proceso de edificación y vehículos de transporte menor (mototaxi) (50% de una UIT)</li> <li>- Permitir o tolerar el titular, propietario o quien haga sus veces y/o conductor de establecimientos, obras en proceso de edificación y vehículos público de transporte menor (mototaxi); todo tipo de comentarios, insinuaciones de índole sexual contra una o varias personas; mediante frases, gestos, silbidos y sonido de besos por parte del personal a su cargo. (100% de una UIT)</li> <li>- Permitir o tolerar el titular, propietario o quien haga sus veces y/o conductor de establecimientos, obras en proceso de edificación y vehículos público de transporte menor (mototaxi), la realización de tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación, exhibicionismo y/o mostrar los genitales en contra de una u otras personas, por parte de personal a su cargo. (200% de una UIT)</li> </ul> <p>Preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- campañas educativas e informativas, con la finalidad de sensibilizar a la población en general, y en particular a los propietarios o encargados de establecimientos, a los propietarios de obras en proceso de edificación y los representantes de las personas jurídicas autorizadas a prestar el servicio de transporte público de pasajeros</li> <li>- capacitación a funcionarios y personal administrativo</li> <li>- Señalización de espacios públicos, obras en proceso de edificación</li> </ul>
Autoridad que impone la sanción	Gerencia de control y fiscalización a través del procedimiento administrativo sancionador.

### Argentina

<b>País</b>	<b>Argentina</b>
Instrumento normativo	Ley federal Ley n° 27.501, que incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia a la mujer

Tipo de medidas	Prevención
Medidas	<p>La ley n° 27.501 incorpora al artículo 6° de la ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en el espacio público. Agrega, así, el inciso g) como una modalidad de la violencia contra las mujeres.</p> <p>Incluye la medida de implementación de una línea telefónica gratuita para dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.</p> <p>En las políticas públicas en materia de violencias contra las mujeres, se incluye dentro de los contenidos mínimos curriculares de educación la violencia contra las mujeres en el espacio público.</p> <p>En las acciones de la Secretaría de Seguridad se incluye la solicitud a las fuerzas policiales y seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de violencia de género cuando la violencia ocurre en el espacio público o de acceso público.</p>

<b>CIUDAD</b>	<b>Buenos Aires</b>
Instrumento Normativo	Ley No. 5.306 de 2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires No. 4697
Medidas	Establece el día de la lucha contra el acoso sexual callejero, establece la definición de acoso sexual y acciones de difusión dentro de ellas actividades y campañas de difusión para la visibilización y desnaturalización del Acoso Sexual Callejero, así como también para la erradicación de este tipo de violencia de género y de sus consecuencias

### Ecuador

<b>Ciudad</b>	<b>Quito</b>
Instrumento normativo	Ordenanza Metropolitana N° 0235. Protocolo de Actuación del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros de Quito
Medidas	<p>Brinda instrucciones operativas y claras sobre qué hacer, los procedimientos, las instancias y funcionarios o funcionarias responsables de la atención necesaria para dar respuesta y, así, atender la situación generada y restituir, en la medida de lo posible, el derecho vulnerado</p> <p>Asimismo, la respuesta del Municipio de Quito incluye la aplicación de tecnologías que permiten respuestas inmediatas. La plataforma móvil para</p>

reportar el acoso sexual se activa a través del envío de un mensaje de texto al 6367, con la palabra Acoso y el número de la unidad de transporte. El mensaje de celular llegará a la central de operaciones de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, que activará el Protocolo de Actuación. Mediante una llamada al pasajero que realice el reporte, Brigadas de Promotores acompañarán a la víctima para guiarle en las distintas opciones de atención y denuncia. La Policía Metropolitana y los encargados de la recaudación en paradas y estaciones del Sistema son los encargados de proteger a las víctimas.
---

## VIII. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

### CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL

Dentro de la normatividad internacional sustento de la presente propuesta encontramos

1. ***La Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer:*** define la violencia contra las mujeres, dentro de ella el acoso sexual y prohíbe su ocurrencia en el trabajo, en las instituciones educativas y en otros lugares<sup>15</sup>.
2. ***la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW:*** obliga a los Estados Parte que adopten las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos, incluida específicamente la igualdad ante la ley, en la gobernanza y la política, el lugar de trabajo, la educación, la asistencia sanitaria y otras áreas de la vida pública y social.<sup>16</sup>
3. ***La Recomendación General No 19 del Comité de la Cedaw:*** señala el acoso como hostigamiento sexual y lo determina como “un comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> ONU, (1993), Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, disponible en <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

<sup>16</sup> ONU, (1979), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, disponible en <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>

<sup>17</sup> ONU, (1992), Recomendación General 19, La violencia contra la Mujer, Comité de la Cedaw, Disponible en

4. ***La Plataforma de Acción de Beijing:*** reconoce el acoso sexual como una forma de discriminación y de violencia contra la mujer, y solicita a los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y la sociedad civil, que garanticen la promulgación y cumplimiento de leyes sobre acoso sexual y que los empleadores elaboren políticas y estrategias de prevención para combatir el acoso<sup>18</sup>.
5. ***La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará:*** reafirma el derecho de las mujeres a no ser víctimas de violencia, incluido el acoso sexual laboral o en cualquier otro contexto, y exige a los Estados que sancionen y promulguen normas jurídicas para proteger a las mujeres frente al acoso y otras formas de violencia. Determina que el acoso sexual en el lugar de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar constituye violencia contra la mujer<sup>19</sup>.
6. ***El Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación de 1958 de la OIT:*** el acoso sexual es una forma de discriminación sexual<sup>20</sup>.
7. ***El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989:*** también prohíbe específicamente el acoso sexual en el lugar de trabajo<sup>21</sup>.
8. ***El Convenio 190 de 2019 sobre la violencia y el acoso:*** Establece acciones para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el cual se aplica para todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales<sup>22</sup>.

---

[https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1\\_Global/INT\\_CEDAW\\_GEC\\_3731\\_S.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf)

<sup>18</sup> ONU, (1995), Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, disponible en [https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA\\_S\\_Final\\_WEB.pdf](https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf)

<sup>19</sup> OEA, (1994), Convención Interamericana para prevenir, y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará, disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

<sup>20</sup> OIT, (1958), C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), disponible en [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_Ilo\\_Code:C111](https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111)

<sup>21</sup> OIT, (1989), C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, disponible en [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C169](https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169)

<sup>22</sup> OIT, (2019), C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, disponible en [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C190](https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190)

Como expresión de la violencia, el acoso sexual entonces se manifiesta de diferentes formas y en diferentes ámbitos tal como lo establece la normatividad internacional, que trascienden del ámbito privado, y que se expresan en el escenario laboral, en el escenario educativo, en el de la salud, más recientemente en escenarios virtuales y por supuesto en el espacio público. Para lo cual los estados deben generar respuestas integrales adaptadas a cada contexto y características propias de dichos ámbitos. Respuestas como las que se incluyen en la presente propuesta normativa.

## MARCO CONSTITUCIONAL

**Artículo 13.** *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan*

**Artículo 43.** *La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.*

**Artículo 44.** *Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.*

## MARCO LEGAL

## **Normatividad nacional**

Dentro de este apartado se encuentran las normas en materia de prevención y sanción de las violencias contra las mujeres, las cuales incluyen medidas nacionales y distritales. Así mismo se incluyen las normas de seguridad y convivencia teniendo en cuenta que ellas son el mecanismo mediante el cual se pretende generar las acciones de prevención y las medidas correctivas de tipo administrativo.

### **Normas de prevención y sanción de las violencias contra las mujeres**

Dentro del marco nacional de violencias contra las mujeres se identifica la Ley 1257 de 2008, que establece normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, mediante la cual se incluye en el código penal el delito de acoso sexual y se genera como obligación a los departamentos y municipios la inclusión de medidas de prevención y atención para las mujeres víctimas de violencia.

La Ley 1719 de 2014 adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, establece la inclusión de algunos delitos al código penal, así como la ampliación de los derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual.

Así mismo, la Ley 1761 de 2015 crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y dicta otras disposiciones en prevención y atención, en concreto la Asistencia Técnico Legal, *donde establece que* el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo garantizará la orientación, asesoría y representación jurídica a mujeres víctimas de las violencias de género, así mismo señala que esta asistencia técnico legal y la representación jurídica de las mujeres víctimas de las violencias de género la podrán realizar las entidades rectoras de políticas públicas para las mujeres y de equidad de género existentes en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal, de conformidad con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias. (Art 9).

En documento Conpes 4080 de 2022 Política Pública de Equidad de Género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país. En la que se establece que “Con el fin de prevenir y atender las violencias en el ámbito del espacio público y el transporte, el Ministerio de Transporte, con el apoyo del Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Superintendencia de Transporte entre 2022 y 2030, diseñará y socializará una estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público y el transporte haciendo especial énfasis en el acoso sexual”<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> DNP, (2022) Conpes 4080, Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país.



Por su parte, Bogotá cuenta con un marco normativo importante frente a la garantía de los derechos de las mujeres, enmarcado en el Decreto 166 de 2010, Política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital, reformada por el Acuerdo 184 de 2015, que tiene como objetivo “Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan el Distrito Capital, de manera que se modifiquen, de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género en el Distrito Capital”<sup>24</sup>.

Esta política fue actualizada por el CONPES DC 14, política pública de mujeres y equidad de género 2020-2030, publicado en enero de 2021. La Política busca modificar progresivamente y de forma sostenible, las condiciones de desigualdad, discriminación y violencias, que por razones de género enfrentan las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, establece 8 derechos priorizados por las mujeres de Bogotá: paz, vida libre de violencias, educación, derechos económicos, salud, participación, educación no sexista y cultura libre de sexismos<sup>25</sup>.

Mediante el Acuerdo 421 de 2009 se creó el Sistema Distrital para la Protección Integral de las Víctimas de Violencias en el espacio público y privado, Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador SOFIA, reformado mediante el Acuerdo 703 de 2018 que busca articular las competencias de los organismos y las entidades distritales en materia de prevención, atención, sanción, erradicación y reparación de las violencias contra las mujeres<sup>26</sup>.

En el marco del Acuerdo 526 de 2013 se crearon los Consejos locales de Seguridad de mujeres con los cuales se busca abordar la agenda de seguridad local desde un enfoque diferenciado y disminuir los niveles de violencia tanto en el espacio público como en el privado<sup>27</sup>.

A través del Decreto 044 de 2015 se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital, que tiene por objeto “profundizar en el reconocimiento del respeto de los derechos humanos en el ambiente laboral, entendiendo que las conductas constitutivas de acoso laboral y acoso sexual

---

<sup>24</sup> Alcaldía de Bogotá, (2010), Decreto 166 de 2010, "Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

<sup>25</sup> Secretaria Distrital de Planeación, (2021), CONPES 14 DC, Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030, disponible en <https://www.sdp.gov.co/content/politica-publica-de-mujeres-y-equidad-de-genero-2020-2030>

<sup>26</sup> Concejo de Bogotá, (2009) Acuerdo 421 de 2009 se creó el Sistema Distrital para la Protección Integral de las Víctimas de Violencias en el espacio público y privado.

<sup>27</sup> Concejo de Bogotá, (2013) Acuerdo 526 de 2013 Por el cual se crean los Consejos locales de Seguridad para las mujeres.

laboral vulneran los derechos humanos, razón por la cual el Distrito pretende facilitar el acceso de todas(os) las(os) servidoras(os) públicas(os) en el Distrito Capital a la administración de justicia, especialmente en los casos de las mujeres, así como el ejercicio pleno de su derecho a una vida libre de violencias”<sup>28</sup>

En el marco de esta normatividad y la articulación que entre entidades establece el Sistema SOFIA en el 2019 se expidió el Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y transportes públicos en Bogotá, que creó medidas de articulación para orientar a las mujeres víctimas en los procedimientos judiciales existentes y el acceso a los servicios de acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de tres componentes prevención, atención y sanción social y promoción del acceso a la justicia. Cuenta con 5 fases de implementación en el sistema de transporte, empezando por Transmilenio y ampliándose hacia los demás sistemas de transporte terrestre y aéreo. Sin embargo, este protocolo se centra en el sistema de transporte y no crea un procedimiento sancionador específico, sino la derivación al sistema de justicia, tampoco cuenta con medidas de reparación.

- **Normas de seguridad y convivencia**

En lo que tiene que ver con las normas de convivencia, se identifica la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de seguridad y convivencia, en el cual se establecen normas de carácter preventivo que “buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente”<sup>29</sup>

Dentro de este código se establecen como faltas los comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. (Art 33) dentro de las que se encuentran: En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público: (...) b) Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.

Así como comportamientos que afectan a los grupos sociales de especial protección constitucional. (Art. 40) entre ellos “Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo”. Esta norma también establece los procedimientos y las autoridades de policía responsables para investigar y sancionar estas faltas.

---

<sup>28</sup> Concejo de Bogotá, (2015) Decreto 044 de 2015, Por el cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital

<sup>29</sup> Congreso de la República, (2016), la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de seguridad y convivencia.

El artículo 12 de esta norma establece como potestad de las asambleas departamentales y al Concejo Distrital de Bogotá el poder subsidiario de Policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley. Estas corporaciones en el ejercicio de poder subsidiario no podrán: 1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador; 2. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.; 3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

Acuerdo 079 de 2003 Código Distrital de Policía, establece las reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas en el Distrito Capital para propender por una sana convivencia ciudadana, señala en el artículo 15 Comportamientos que favorecen la seguridad de las personas, en el artículo 70, así como los comportamientos que favorecen la protección y conservación del espacio público, sin embargo no establece medidas específicas para sancionar y prevenir el acoso sexual en el espacio público<sup>30</sup>.

## **IX. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**

El Concejo de Bogotá es competente para regular la materia en virtud de lo establecido en los numerales 1 y 24 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993:

*“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

*Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”*

## **X. IMPACTO FISCAL**

Con base en el artículo 7 de la ley 819 de 2003, con respecto al análisis del impacto fiscal de las normas indica que: *“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”*.

Y el Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá), en su Capítulo IX, Artículo 67, indica que los proyectos de acuerdo deben contener requisitos mínimos, en los que se incluye en el literal d. Análisis del impacto fiscal del proyecto.

Con base en lo aquí expuesto, es importante destacar que este proyecto de acuerdo **no implica costos**, ni gastos

---

<sup>30</sup> Concejo de Bogotá, (2003) Acuerdo 079 de 2003 Código Distrital de Policía

fiscales para su implementación.

Atentamente,

**HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO**

H. Concejala de Bogotá D.C.

Unión Patriótica

**JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA**

H. Concejal de Bogotá D.C.

Colombia Humana

**QUENA MARÍA RIBADENEIRA MIÑO**

H. Concejala de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

**DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA**

H. Concejala de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

**ROCÍO DUSSÁN PÉREZ**

H. Concejala de Bogotá D.C

Partido Polo Democrático

**OSCAR FERNANDO BASTIDAS**

H. Concejal de Bogotá D.C

Partido MAIS

**ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ**

Concejala de Bogotá D.C. Colombia

Humana

**PROYECTO DE ACUERDO NO 088 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

Proyecto de Acuerdo No. \_\_\_\_\_ de 2025

**Por medio del cual se actualizan y/o modifican los Acuerdos 079 de 2003 y 735 de 2019, para la prevención, atención y sanción del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 12 de la Ley 1801 de 2016, y los numerales 1°, 8° y 18° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1.- OBJETO.** Establecer nuevas competencias y atribuciones a las autoridades distritales de Policía, en el sentido de incluir dentro de las normas de comportamiento para la convivencia en el distrito, la prohibición de conductas constitutivas de acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, así como la creación de medidas de prevención, atención y sanción para ser implementadas por parte de la institucionalidad competente en el distrito capital.

**Parágrafo 1.** La determinación de estas violencias como faltas a la convivencia no excluye que estas puedan constituirse como un delito y ser judicializadas por el sistema penal.

**Parágrafo 2.** Las medidas contenidas en esta norma se establecen como complementarias para un acceso más efectivo a la justicia de las mujeres y personas con orientación o identidad de género diversa habitantes del distrito capital.

**ARTICULO 2.- DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO, INCLUIDO EL ESPACIO VIRTUAL.** Toda conducta de tono sexual de tipo verbal, no verbal y /o contacto físico sin el consentimiento o la aprobación de quien la recibe, ejercida en el espacio público, establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, que afecten o generen un daño, físico, sexual o psicológico en la víctima. Estas conductas se identifican como un tipo de violencia sexual que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y/o personas con orientación o identidad de género diversa.

**ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.** La presente norma se aplica en espacios públicos, que comprende toda superficie de uso públicos conformados por vías públicas, zonas de recreación pública, así como espacios privados de acceso público como medios de transporte, centros comerciales, parques de diversión, y en general lugares por donde transiten las mujeres y personas con orientación o identidad de género diversa, y los espacios virtuales de interacción como las redes sociales y las páginas web.

**ARTICULO 4.- PRINCIPIOS.** Las medidas que se adopten en el marco de la prevención, atención y sanción del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual en el distrito capital, deberán atender los siguientes principios:

- a. **Igualdad y no discriminación.** Toda persona debe ser tratada con igual respeto y dignidad, cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, raza, condición social, o cualquier tipo de diferenciación que jerarquice a las personas y las considere como inferiores, es contrario al principio y derecho a la igualdad.
- b. **Debida diligencia.** Se tendrá en cuenta la obligación que tienen los Estados y las entidades que lo componen de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres y/o las personas con orientación o identidad de género diversa., en este caso aquellas ocurridas en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual,, y en llevar a cabo el abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y velar por que las autoridades involucradas se comporten de conformidad con esta obligación.
- c. **Prevención.** Las medidas establecidas en esta norma están orientadas a fortalecer un diseño institucional en la administración distrital que permitan prevenir y monitorear situaciones de acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, así como medidas de atención que permitan generar la salvaguarda del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y las personas con orientación o identidad de género diversa.
- d. **Protección especial y seguridad.** El acoso sexual en los espacios públicos y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, tiene consecuencias graves sobre las personas que las sufren. Las entidades responsables deberán realizar todas las acciones que sean necesarias para garantizar en todo momento la seguridad y la integridad física, psíquica, moral y sexual de las personas víctimas de estas violencias.

- e. **Acceso y goce de la ciudad.** El derecho a la ciudad es el derecho de todas y todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Este es un derecho colectivo interdependiente de todos los derechos humanos, y debe ser reconocido a toda persona sin discriminación de género, edad, condición de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual.
- f. **Movilidad libre y segura, y a la defensa de la persona.** Las relaciones desiguales de género se ven expresadas en los escenarios públicos, donde las agresiones sexuales, hurtos, manoseos, abusos, acoso sexual, transmiten el mensaje de que esos lugares no les pertenecen y por los cuales les está prohibido transitar. Toda persona tiene derecho a una movilidad libre y segura en la ciudad, y el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de estos derechos, así como adoptar medidas de protección y debida defensa a cualquier persona afectada, en especial las mujeres, las niñas y las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversas.
- g. **Ambiente saludable y armonioso.** Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado, considerado como una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado y seguro que se exprese dentro de su entorno laboral, educativo, comunitario, social o cualquier otro, de tal forma que preserve su salud física y psicológica; por ende, los actos de acoso sexual son contrarios a este principio.
- h. **Interseccionalidad.** La experiencia de las personas evidencia identidades múltiples que crean desigualdades, por tanto, la interseccionalidad busca exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. Las violencias contra las mujeres les impactan de forma diferencial y entrelazada con factores e identidades como su etnia, raza, religión, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual e identidad de género, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, entre otra. Las autoridades con responsabilidades dentro de esta norma tendrán en cuenta las múltiples opresiones a las que se enfrentan las mujeres y las personas con orientación o identidad de género diversa víctimas para la aplicación de las medidas acá establecidas.
- i. **Acción sin daño.** Todas las actuaciones se realizarán con una intervención articulada y sin revictimizar a las personas que hagan parte de las medidas aquí asignadas, a través de una reflexión sistemática



sobre su quehacer y su manera de relacionarse con los diferentes actores que hacen parte del sistema o la ruta.

- j. **Corresponsabilidad.** Todos los actores distritales con competencias en temas de mujeres, convivencia, movilidad, seguridad, salud, educación y cultura concurrirán de manera articulada con acciones integrales para garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia en el espacio público.
- k. **Coordinación.** Todas las entidades competentes en la atención a las mujeres víctimas de violencia y los sectores de movilidad, cultura, educación, salud, seguridad, gobierno, deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas para brindar una atención integral. Las acciones establecidas en esta norma se implementarán de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónicamente entre los mecanismos con lo que cuenta la Secretaría de la Mujer, y con las demás entidades competentes de los diferentes órdenes territoriales en materia de prevención, atención y protección a las mujeres y personas con orientación o identidad de género diversa, víctimas de acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.
- l. **Eficacia.** Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, atender los casos que se presenten e imponer las sanciones correspondientes, teniendo en cuenta las características de estas violencias y las capacidades operativas existentes de la institucionalidad para enfrentarlos.
- m. **Atención diferenciada.** Las medidas establecidas en esta norma tendrán en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las víctimas de acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, en las etapas procesales y principalmente en la sanción y las medidas de reparación.

**ARTICULO 5.- ENFOQUES.** Las medidas que se adopten en el marco de la prevención, atención y sanción del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual en el distrito capital, deberán atender los siguientes enfoques:

- a. **Enfoque de derechos.** Las acciones establecidas en esta norma tendrán en cuenta las desigualdades identificadas y buscarán transformar las prácticas discriminatorias, desde la perspectiva de Derechos Humanos y la dignidad humana, entendiéndose como un principio, valor y derecho fundamental de los y las ciudadanas en Colombia, sin excepción.

- b. Enfoque diferencial.** Las medidas establecidas para el acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, tendrán en cuenta la mirada que permite visibilizar, identificar y reconocer condiciones y situaciones particulares y colectivas de la desigualdad, fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión de las personas o grupos humanos que son sujeto de especial protección constitucional, que requieren de acciones integradas y diferenciadas de protección y restitución de los derechos vulnerados de acuerdo a sus necesidades específicas según el género, la orientación sexual e identidades de género, etario, étnico, discapacidad.
- c. Enfoque de género.** La presente norma tendrá en cuenta las desigualdades existentes en la sociedad entre hombres y mujeres, sobre las cuales se han estructurado las relaciones de poder de subordinación y subvaloración, que le impide a las mujeres acceder y disfrutar del espacio público y los establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual en igualdad de condiciones y las expone a múltiples discriminaciones y violencias.
- d. Enfoque de orientación sexual.** Las acciones definidas en esta norma tendrán en cuenta el reconocimiento de distintas formas y expresiones de la sexualidad, reconocerán las divergencias y pondrá en práctica acciones para la eliminación de la discriminación y la violencia por este motivo.
- e. Enfoque de identidad de género.** La aplicación de las medidas de prevención, atención y sanción contra el acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, reconocerá la discriminación, exclusión, marginación, invisibilización y violencias cometidas hacia las personas con identidades de género no hegemónicas en este escenario, que impide la satisfacción de otros derechos.
- f. Enfoque etario.** Las medidas establecidas en esta norma buscaran contribuir al ejercicio pleno de la ciudadanía de todas las personas en su ciclo vital, en especial a las niñas, las mujeres y personas con orientación o identidad de género diversa atendiendo a sus capacidades y potencialidades propias de su edad.
- g. Enfoque étnico.** Las actuaciones distritales establecidas en esta norma tendrán en cuenta las prácticas de subordinación y exclusión vividas por las personas y pueblos indígenas, raizal, ROM, palenqueros y afrodescendientes, para generar una atención diferenciada y aportar a la transformación de las situaciones de inequidad, discriminación y vulneración de derechos.
- h. Enfoque interseccional.** Las medidas implementadas por las instituciones responsables deben estar orientadas a analizar comprender y responder a las formas cómo convergen distintos tipos de discriminación y opresión en una misma persona y como esto genera experiencias únicas que pueden

ser de opresión o privilegio y que incluso pueden ser simultáneas. Buscando responder a las circunstancias individuales y factores contextuales de las mujeres y personas con orientación o identidad de género diversa, víctimas de violencia, y su interacción en las relaciones de poder.

- i. **Enfoque centrado en la persona sobreviviente.** Este enfoque permite conocer y reconocer cuáles son las causas y consecuencias de la violencia basada en género, prestando servicios diferenciales, con el propósito de que cada mujer evalúe las opciones disponibles y respalde sus decisiones.
- j. **Enfoque territorial.** Las medidas establecidas tendrán en cuenta el contexto distrital y local y la relación con los actores presentes en él. Las intervenciones en los espacios públicos deben favorecer la cohesión social, el acceso y la garantía al derecho a la ciudad en igualdad de condiciones y en garantía del derecho a una vida libre de violencias.

**ARTICULO 6.-** Adiciónese un capítulo nuevo dentro del **Acuerdo 079 de 2003** de la siguiente manera: *“MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO, INCLUIDO EL ESPACIO VIRTUAL, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y LAS PERSONAS CON IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA”* así:

**ARTICULO XX.- COMPORTAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y LAS PERSONAS CON IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO, INCLUIDO EL ESPACIO VIRTUAL.** *Los siguientes son los comportamientos mínimos que la ciudadanía en general debe tener en cuenta para garantizar la protección de las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.*

- a. **No realizar expresiones verbales con connotación sexual,** *tales como palabras, comentarios, jadeos, silbidos o cualquier sonido que puedan aludir al cuerpo, la sexualidad, la forma de vestir de una persona, en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.*
- b. **No realizar conductas simbólicas con connotación sexual,** *tales como gestos obscenos que resulten humillantes u ofensivos, en espacio público en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.*
- c. **No realizar conductas no verbales (físicas) con connotación sexual,** *tales como exhibición de genitales, masturbación, actos que involucren contacto corporal, tocamientos, roces intencionales u*

*opresión de genitales contra el cuerpo, en espacio público en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.*

- d. **No hacer Invitaciones, insinuaciones, solicitudes o proposiciones para actos lascivos o con connotación sexual**, en espacio público en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.*
- e. **No realizar captación de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o de alguna parte de él, con connotación sexual**, en espacio público en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual.*
- f. **No permitir o tolerar** el conductor, titular, propietario, representante legal o quien haga sus veces de vehículos públicos de transporte (Transmilenio, buses, taxis y plataformas de transporte) y/o establecimientos públicos, obras de construcción, etc.; **todo tipo de comentarios, insinuaciones de índole sexual contra una o varias personas**; mediante frases, gestos, silbidos y sonido de besos por parte del personal a su cargo, sin importar la naturaleza contractual del vínculo.*
- g. **No permitir o tolerar** el conductor, titular, propietario, representante legal o quien haga sus veces de vehículos públicos de transporte (Transmilenio, buses, taxis y plataformas de transporte) y/o establecimientos públicos, y en general lugares por donde transiten las mujeres y personas con orientación diversas; **la realización de tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación, exhibicionismo y/o mostrar los genitales en contra de una u otras personas**, por parte de personal a su cargo, sin importar la naturaleza contractual del vínculo.*

**ARTÍCULO XX.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS EMPRESAS Y PLATAFORMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONSTRUCTORAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.** *La Secretaría de Gobierno en articulación con la Secretaría de la Mujer, elaborarán un protocolo de prevención, atención y sanción del acoso sexual en espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, que será acogido por las y los propietarios, titulares, administradores, representantes legales de empresas y plataformas de transporte público, establecimientos públicos y empresas constructoras, el cual deberán expedir y aplicar e incluirá como mínimo:*

- a. **Acciones de capacitación y pedagogía interna para sus trabajadores orientadas a la divulgación de los enfoques diferenciales y la prevención de estas violencias en la prestación de sus servicios y la interacción con la comunidad.***
- b. **Acciones de difusión como avisos dentro de los vehículos e instalaciones sobre prohibición de acoso sexual.***

- c. Mecanismos y espacios de escucha no revictimizantes para las víctimas de acoso sexual.*
- d. Sanciones disciplinarias para quienes incurran en estas violencias con las personas usuarias de los servicios o en la interacción con la comunidad donde se prestan estos.*
- e. Medidas de reparación para las víctimas, las cuales tengan en cuenta sus necesidades y expectativas.*
- f. Medidas de divulgación en lugares públicos (parques, vía pública, etc.) de las medidas establecidas en los protocolos y las rutas para interponer las quejas ante las empresas.*

**ARTÍCULO 7.- MEDIDAS CORRECTIVAS.** Las medidas correctivas frente al incumplimiento de los comportamientos para garantizar la protección de las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa, estarán acordes con las multas establecidas en el numeral 1 del artículo 40 del Código Nacional de Policía para los abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo, perpetradas contra los grupos sociales de especial protección constitucional. Esto estará acompañado de la participación de quienes comentan las faltas en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia y compromiso de cumplir las reglas de convivencia ciudadana, que incluyan entre otros:

- a. Medidas de perdón público o rechazo público de las violencias.,
- b. Retracción por medios públicos, locales o comunitarios.,
- c. Obras locales que transmitan un mensaje colectivo y que tengan en cuenta los enfoques diferenciales de acuerdo a las necesidades de las víctimas y las comunidades de las que hacen parte.
- d. Obras que permitan propiciar espacios públicos seguros para las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa.
- e. Otras medidas concertadas con las víctimas que aporten a su reparación y a la garantía de no repetición.

**ARTÍCULO 8.- PROGRAMAS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON ENFOQUE REPARADOR.** Dentro de los lineamientos técnicos expedidos por la Secretaría de Gobierno con apoyo de la Secretaría de la Mujer para estos efectos, se incluirán medidas que apunten a reparar a las víctimas a través de un plan concertado con las víctimas.

**ARTÍCULO 9.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS.** La Secretaría de Gobierno en articulación con la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de Educación y las Alcaldías Locales actualizarán sus programas de formación, capacitación y actualización en enfoque de género y justicia restaurativa para las diferentes autoridades y funcionarios/as que participan en

la prevención, atención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, en especial de las inspecciones de policía que asumirán funciones preventivas de policía.

**ARTÍCULO 10.- FORMACIÓN A PERSONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, PLATAFORMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PERSONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.** La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hábitat desarrollarán cursos de formación a personal de transporte público, plataformas de transporte público y personal de obras de construcción, con una duración no menor a 35 horas, sobre enfoque de género, nuevas masculinidades y erradicación de violencias contra las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa en el ámbito público y privado.

**Parágrafo.** Para los cursos de formación a personal de transporte público la Secretaría de Movilidad involucrará a los centros de enseñanza automovilística y al SENA para que dentro de los currículos de enseñanza se incorporen temas de prevención de violencias y acoso sexual en el espacio público contra las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa.

**ARTÍCULO 11.- ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.** La Secretaria de la Mujer, la Secretaria de Educación y la Secretaría de Cultura crearán de manera articulada estrategias de difusión y sensibilización relacionadas con el rechazo y la sanción social de las conductas constitutivas del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, así como programas y estrategias para la apropiación del espacio público por parte de las mujeres y las personas con identidades y orientaciones sexuales diversas.

**ARTÍCULO 12.- INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS.** Las entidades distritales que tengan a cargo observatorios que incluyan información sobre violencias basadas en género, deberán incluir aquellas relacionadas con el acoso sexual en espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, detallando información relacionada con los lugares de ocurrencia de los hechos y la caracterización de las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa que son víctimas.

**ARTICULO 13.- SEÑALIZACION DE ESPACIOS PÚBLICOS.** La Secretaría de Gobierno en articulación con la Secretaría de Planeación, establecerán la regulación respectiva para instalar en espacios públicos como calles, parques, plazas y paraderos, avisos que visibilicen las prohibiciones establecidas en esta norma y las medidas correctivas a imponer.

**ARTÍCULO 14.- REGISTRO DISTRITAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.** La Secretaría de Gobierno establecerá un *registro distrital de medidas correctivas* que contendrá la información de las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de las infracciones asociadas con el acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, incluyendo los siguientes

datos: Nombre, domicilio, sexo; infracciones cometidas; lugares de comisión de la infracción; medidas correctivas impuestas y realización de programas comunitarios y actividades pedagógicas.

**Parágrafo 1.** El *registro distrital de medidas correctivas* será de consulta obligatoria para las autoridades competentes para obtener los elementos necesarios que motiven la aplicación de sanciones, identificando si hay reincidencia.

**Parágrafo 2.** La información contenida en el *registro distrital de medidas correctivas* tendrá por objeto contar con una base de datos que permita establecer los antecedentes de infracciones de este tipo cometidas por una persona, establecer reincidencia, tipo de programas comunitarios y actividades pedagógicas e impacto de los mismos, así como el diseño de las estrategias y acciones tendientes al manejo del espacio público y la prevención de violencias dentro de este.

**Parágrafo 3.** La información incluida en el registro de infractores podrá ser solicitada por las autoridades judiciales dentro de los procesos de investigación a su cargo.

**ARTÍCULO 15.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.** Inclúyase como parte integral de este acuerdo el protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual y el transporte público en Bogotá, expedido por la Secretaría Distrital de la Mujer.

**ARTÍCULO 16.- PROCEDIMIENTO.** Los incumplimientos a los comportamientos establecidos para garantizar la protección de las mujeres y las personas con identidad y orientación sexual diversa del acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, serán tramitados de conformidad con el procedimiento verbal abreviado establecido en el artículo 223 del Código Nacional de Policía.

**Parágrafo.** Para los casos de acoso sexual en el espacio público y en establecimientos públicos o privados de acceso público, incluido el espacio virtual, no se agotará la etapa de conciliación, dado estos se configuran como hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.

**ARTÍCULO 17.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA SEGUNDA INSTANCIA.** Adiciónese el numeral 19 al artículo 11 del Acuerdo 735 de 2019 que establece las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual quedará así:

**19.** *Comportamientos de acoso sexual en el espacio público, en el transporte público o en establecimientos privados de acceso público establecidos en el código distrital de policía o el que haga sus veces.*

**Parágrafo 1.** *Cuando se impongan medidas correctivas como consecuencias de conductas de acoso sexual en el espacio público se tendrá en cuenta que las medidas correctivas consistentes en participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Secretaría de la Mujer y a las medidas establecidas en el presente acuerdo.*

**Parágrafo 2.** *Cuando las conductas de acoso sexual sean cometidas contra niños, niñas y adolescentes, la autoridad competente deberá remitir de oficio el caso a la autoridad judicial competente. Así mismo, las medidas correctivas consistentes en participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el ICBF.*

**ARTÍCULO 18.- VIGENCIA.** La presente norma rige a partir de la fecha de su publicación



**PROYECTO DE ACUERDO NO 089 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO SAN JUAN” A LA CALLE 22  
ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN  
BOGOTÁ D.C.**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El presente Acuerdo tiene como objeto denominar “**DIANA NAVARRO SAN JUAN**” al tramo vial comprendido sobre la Calle 22, desde la Carrera 14 hasta la carrera 17 de la ciudad de Bogotá, como un reconocimiento a la diversidad sexual y de géneros en la ciudad, con la exaltación de la memoria de una de sus principales referentes social y políticas como lo fue la activista transgénero Diana Navarro San Juan.

**CONTEXTO**

La ciudad de Bogotá, como ciudad capital de las colombianas y de los colombianos, ha sido el epicentro no solo del desarrollo del país, escenario de grandes transformaciones sociales y políticas y a su vez, testigo y epicentro de situaciones de la conflictividad social como el desplazamiento, la discriminación, la xenofobia, la homofobia y la transfobia entre otras expresiones de desigualdad social que son evidentes no solo en las cifras de denuncias de estos flagelos, sino también, en la vida concreta de personas que representan grupos sociales históricamente marginados, a quienes el distrito debe reconocer su aporte a la sociedad, a la lucha por la igualdad y el trabajo por superar múltiples condiciones de marginación, discriminación y exclusión.

Diana Navarro San Juan, aportó de manera significativa a la lucha por la igualdad social de las personas lesbianas, gays, bisexuales y especialmente las personas transgénero más empobrecidas y marginadas, como lo son quienes viven, habitan y trabajan en el barrio Santafé de la Localidad de Mártires.

Fue reconocida por su liderazgo en diferentes ámbitos de la vida social. Así se destacó en la defensa de los derechos de quienes habitan el Barrio Santafé, en la Localidad de Los Mártires, donde impulsó la creación del Decreto que estableció allí una zona de alto impacto para usos referidos a la prostitución y actividades afines. También impulsó la creación en esta zona de la Casa LGBTI se la Secretaría Distrital de Integración Social que hoy lleva su nombre y la creación de la Unidad Contra la Discriminación en la Subdirección para Asuntos LGBTI, en la misma entidad. En el barrio Santafé es recordada por sus gestiones, ejercicios de incidencia y la elaboración de documentos jurídicos (derechos de petición, acciones de tutela, demandas, entre otros) para proteger a personas transgénero, personas en ejercicio de la prostitución, personas en habitabilidad de calle, migrantes, vendedores ambulantes, entre otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Dicho trabajo se extendió a lo largo del país.

Como activista por los derechos de las personas de los sectores LGBTI fue fundadora y directora de la Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Hacer, la segunda organización de personas trans en tener personería jurídica en el país. Desde allí Co- lideró la creación de la Red Distrital de Personas Trans y la Red Nacional de Personas Trans con otras activistas. También participó y fue coordinadora de la Mesa LGBT de Bogotá, en donde ayudó en la organización de la Marcha por Ciudadanía Plena LGBTI y la Gala León Zuleta. Así mismo, apoyo y movilizó la organización de la Fiesta Roja Navidad Trans, la Alfombra Roja y

Gala Rosa por la no transfobia, la realización de la Jornadas Distritales De No Violencias Contra Las Mujeres Trans, proyecto misión Bogotá (inclusión socio laboral trans en el sistema Transmilenio, y otras entidades del gobierno en Bogotá durante la Bogotá Humana) entre otros procesos enfocados a visibilizar los derechos de las personas transgénero y las organizaciones que trabajan en su defensa.

Se destacó por su trabajo de articulación con la Policía Nacional de Colombia y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en la capacitación de funcionarios para la protección de los derechos de las personas de los sectores LGBTI privadas de la libertad o bajo custodia del Estado y fue asesora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Por todo ello, fue incluida en el listado de activistas de esta población a quienes el Senado de la República entregó un reconocimiento en el marco de la conmemoración del 28 de junio en 2022.

Este liderazgo social también se tradujo en un activismo político que la llevó a ser la primera persona trans al hacer parte de la dirección nacional de un partido político en Colombia, al ser elegida integrante de la Junta Nacional de Polo Democrático Alternativo en 2006. También fue candidata la Junta de Administradora Local de Los Mártires en 2007

Diana Navarro San Juan, como servidora pública y desde la institucionalidad, diseñó y ejecutó acciones afirmativas para transformar al Estado. Siendo asesora del Gobierno de Bogotá, fue quien lideró procesos en garantía derechos, como el “litigio estratégico”, entre Grace Kelly Bermúdez y la Secretaria de Integración Social de Bogotá, la cual benefició a las personas transgénero con la eliminación del requisito de la libreta militar para ser contratadas por todas las entidades del distrito.

Como servidora pública trabajó en la implementación de la Política Pública LGBTI de Bogotá en la Secretaría Distrital de Integración Social y en los primeros ejercicios para diseñar la Política Pública LGBTI Nacional en el Ministerio del Interior, en donde impulsó la Creación de la Mesa de Casos Urgentes para atender a las situaciones de violencia en contra de las personas de los sectores LGBTI.

El activismo de Diana Navarro San Juan, entrecruzaba todas las esferas de su vida, es por esto, que es difícil delimitar el accionar de Diana como activista social y como activista en el servicio público, porque el activismo de Diana era su misión de vida, y pese a que en Colombia existe la Política Pública Nacional LGBTI desde mayo de 2018, Diana en la 39 Asamblea General de la OEA en San Pedro Zula, Honduras 2009, instó al entonces Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, para que invitara al Estado Colombiano a formular una Política Publica integral para las personas de los sectores sociales LGBTI, y fue tan persuasiva que ese mismo año 2009, el vicepresidente Angelino Garzón, convocó al movimiento social para adelantar las primeras acciones de discusión sobre la pertinencia de que esta política estuviera dentro de la agenda pendiente del movimiento a nivel nacional.

Además de sus habilidades como cabildera, Diana Navarro Sanjuan, también impulsó importantes avanzadas jurídicas, es así como estuvo detrás de la acción de tutela que derivó en la sentencia T-314 de 2011 en la cual la Corte Constitucional exhortó al Estado colombiano para que “(...) *Ministerio del Interior y de Justicia para que articule... una política pública integral nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas.*”

Posterior a la adopción del decreto que adopto en 2018 la Política Pública Nacional LGBTI, Diana Navarro San Juan, co - lideró acciones de control político y social a la gestión del estado, y es así como en 2019 empezó a promover y participar en espacios de estudio e investigación sobre la implementación de Políticas Públicas, esfuerzos que en 2020 se cristalizaron en la conformación de la primera Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI de la cual Diana Navarro San Juan fue co-fundadora y a la cual aportó sus reflexiones y trabajo hasta el año 2022.

Diana Navarro San Juan, no solo se destacó por su activismo en defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y los aportes en el diseño e implementación de política pública LGBTI Nacional y en Bogotá, sino también se debe resaltar que realizó ejercicios de exigibilidad de derechos, activismo social e incidencia en función de otras movilizaciones sociales y políticas públicas, entre las que se destacan las étnicas (lídero al estrategia Ubuntu por la paz, intervención interseccional en personas NARP con enfoque de orientaciones sexuales e identidad de géneros diversas), mujeres y equidad de género (fue Miembro del Consejo Distrital Consultivo de Mujeres Curul Mujeres Diversas), personas vinculadas a actividades sexuales pagadas, prevención de la trata de personas, prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, VIH/sida (fue miembro del Mecanismo Coordinador País Proyecto Fondo Global de la lucha contra el sida, tuberculosis y malaria). Su liderazgo social y político, no solo lo ejerció en Colombia, sino que estuvo involucrada en procesos en la región de América Latina y el Caribe, y de manera global.

Incluso, como figura pública y referente cultural, Diana Navarro San Juan, encarna la diferencia y la diversidad en Bogotá, ella representa a un sector la lucha por la justicia social, fue la gran primera voz de las personas LGBTI en situación precariedad, y en especial las personas transgénero en Colombia.

Su imagen y discurso han sido inmortalizados en diferentes cintas, libros, artículos y entrevistas, y actualmente, Diana se perfila como un icono de la lucha diversa y como la protagonista de una historia que merece ser contada y que debe permanecer en la memoria de la ciudad de Bogotá.

## **I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA**

El presente proyecto de acuerdo busca hacer un reconocimiento a la población LGB y en especial a la población Transgénero de Bogotá, con base en la normatividad legal vigente y como un acto político institucional de reconocimiento a un liderazgo social de la ciudad.

En el contexto internacional más cercano, han sido varios los pronunciamientos de las Naciones Unidas y una serie de organismos multilaterales que han evidenciado la necesidad de tener acciones afirmativas, de reconocimiento y visibilización de los derechos de personas con identidades de género u orientaciones sexuales no hegemónicas. Dos ejemplos de ello son; la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011), que fue la primera resolución relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, y la Resolución 32/21 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2016) que establece un mandato para un experto independiente en protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género. También en 2018, la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11, 2018).

Previamente, en 2006 se presentaron los principios de Yogyakarta, que habla de las obligaciones de los Estados en esta temática y exalta el derecho a la participación en asuntos políticos y públicos, además la lucha contra

los estereotipos y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, de ello deriva la necesidad de acciones concretas de los Estados por resarcir, reparar física y simbólicamente a los grupos discriminados, así mismo, desde 2008 la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución sobre derechos humanos, orientaciones sexuales e identidades de género, instando a los Estados a desarrollar acciones en función de estas poblaciones.

La cual se ha venido ratificando anualmente, igualmente, se creó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Colombia, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, de la cual Colombia es signataria y se encuentra en proceso de ratificación, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

A su vez, al Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-24/17 (2017) reconoce el derecho al cambio de nombre, imagen y corrección de género en registros y documentos. Además, en la sentencia del Caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras reconoce la discriminación por identidad de género e insta a tomar medidas para su prevención.

Por otra parte, las Naciones Unidas desde el Comité de DECS (Observación General No.10 de 2009) y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Recomendación General No. 28 de 2010), insta a los Estados a desarrollar programas contra las situaciones de discriminación por identidad de género.

En el contexto colombiano, ha sido reiterado el ejercicio de protección de la Corte Constitucional al reconocimiento del derecho a la identidad de género. Algunos ejemplos de su extensa jurisprudencia sobre la materia son las siguientes sentencias: La Sentencia T-594/93, que fue una de la primera sentencia en la que la Corte reconoció el derecho a la identidad sexual y de género. En ella, la Corte protegió el derecho de una persona trans a cambiar su nombre en el registro civil.

La Sentencia T-551/99, en la que la Corte protegió el derecho de una persona trans a cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La Sentencia T-1031/07, en la que la Corte reconoció el derecho de las personas trans a definir su identidad de género y a ser tratadas de acuerdo con esa identidad.

La Sentencia T-911/09, en la que se protegió el derecho de una persona trans a ser tratada de acuerdo con su identidad de género en el ámbito laboral. Sentencia T-532/12, en la que la Corte reconoció el derecho de las personas trans a acceder a tratamientos médicos relacionados con su identidad de género. Sentencia T-478/15, en la que se protegió el derecho de una persona trans a cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de presentar pruebas médicas o psicológicas. Sentencia SU-337/17, en la que la Corte reconoció que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional debido a la discriminación histórica que han enfrentado.

Desde el año 2018 se estableció la Política Pública Nacional LGBT por medio del Decreto 762 de este año, indica en uno de sus artículos específicamente **Reconocimiento garantía y acceso a derechos. (artículo 2.4.4.2.1.6) establecer medidas que permitan “8. Promover el ejercicio pleno de derechos de los sectores sociales LGBTI víctimas del conflicto armado y de otro tipo de violencias, por medio de mecanismos para la protección, prevención, atención, asistencia y reparación integral”**, por ello el distrito en correspondencia con la memoria y reparación simbólica a una población tan victimizada tanto por la sociedad como por el Estado, por acción y omisión de garantía de derechos, puede reparar simbólicamente con la exaltación de la memoria de una persona referente de los sectores LGBTI.

La Política Pública LGBT de Bogotá desde el acuerdo 371 de 2009 y el decreto 062 de 2014, establece lineamientos para la vivencia plena de derechos de las personas LGBT en el distrito, donde el derecho a la vida, seguridad, la cultura y la participación son clave en la nivelación y compensación de derechos que han sido históricamente negados a la población de los sectores LGBT, de allí que algunas unidades operativas como el centro de atención a la diversidad sexual y de géneros de Teusaquillo “Sebastián Romero” creada mediante el Decreto 149 de 2012 con la puesta en marcha de la Sub dirección para asuntos LGBT lleva este nombre en reconocimiento y homenaje a un activista de dicho movimiento, así mismo, lo han hecho de manera posterior algunas unidades operativas de la Secretaría de Integración social con personas de estas poblaciones y en otros casos y contextos la Secretaría de Educación con los colegios oficiales entre otros.

## **II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**

### **POR QUÉ LA CALLE 22 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 17 DEBE NOMBRARSE “DIANA NAVARRO SAN JUAN”**

La zona elegida para la denominación de la calle “Diana Navarro San Juan”, está ubicada en el barrio Santafé de la Localidad de los Mártires, zona en donde habitan y trabajan un número significativo de mujeres trans que han encontrado en dicho espacio un escenario para reconstrucción de sus vidas, después de ser marginadas y desplazadas o simplemente desechadas por una parte de la sociedad que no comprende su construcción identitaria, por lo cual, desde las actividades de peluquería, actividades sexuales pagas y trabajos en hotelería o simplemente desde la construcción de segundos hogares han desarrollado sus nuevas vidas.

El proyecto no genera costos adicionales para el distrito, la denominación de la calle se hará por medio de la proclamación del acuerdo del concejo de Bogotá y las entidades ajustarán el nombre en documentos oficiales del distrito, tanto en su documentación como en los momentos de fijación de nomenclatura y señalización de la calle en mención

## **BIBLIOGRAFÍA.**

- Alcaldía Mayor de Bogotá (2008) Por una ciudad de derechos. Lineamientos generales de la PPLGBTI.
- Alcaldía Mayor de Bogotá (2019) Línea de base de la Política Pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBTI.
- Concejo de Bogotá (2009) Acuerdo 371. Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas -LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Constitución Política de Colombia, 1991
- Naciones Unidas (2007) Principios de Yogyakarta.

### III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA

La Constitución Política de Colombia, establece que:

**Artículo 1** “...El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos...”

En concordancia con el artículo antes citado, la misma Ley 397 estableció en el Artículo 2° que las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

De otra parte la Ley antes citada en el Artículo 4° definió “...el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.

Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura...”

**Artículo 8:** “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”

**Artículo 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

**Artículo 16.** Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

**Artículo 72:** “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”

En consecuencia, el legislador expidió la Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

## **COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**

### **Decreto 1421 de Julio 21 de 1993**

Con plena observancia de las atribuciones conferidas al Concejo de Bogotá, por el Decreto 1421 de Julio 21 de 1993, Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, es competencia de la corporación, regular la preservación y defensa del patrimonio cultural, tal y como lo establece el numeral 13 del Artículo 12. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

### **Ley 136 de 1994.**

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Las disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2° del Decreto Ley 1421 de 1993 :

**ARTÍCULO.- 2o. Régimen aplicable.** El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

**Artículo 32.** (Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012).

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

[...]

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

[...]

**Parágrafo 2°.** Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la Ley.

## **ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO:**

En el Concejo de Bogotá, no se han presentado iniciativas de proyectos de acuerdo que establezcan reconocimiento de la memoria de la activista Diana Navarro San Juan.

#### **IV. IMPACTO FISCAL**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es importante precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos, por lo que es perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano plazo.

La Secretaria Distrital de Movilidad, incluirá en la señalización regular de la calle 24 entre carrera 14 y 17 el nombre de la vía, esto no genera gastos extraordinarios sino que hace parte de sus actividades de señalización en vía.

#### **V. TÍTULO – ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS**

##### **PROYECTO DE ACUERDO NO. \_\_\_\_ DE 2025**

##### **POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.**

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C.  
EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS  
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO LEY 1421,

##### **CONSIDERANDO:**

Que en Bogotá existe una Política Pública LGBT (acuerdo 379 de 2009), que establece una serie de acciones y lineamientos para reivindicar los derechos de las personas LGBT en el distrito capital, ante la segregación y la desigualdad social de las que han sido víctimas a raíz de la discriminación por orientación sexual e identidad de género,

Que Bogotá está comprometida con el cambio cultural, por ello desde hace más de 10 años promueve la campaña en “Bogotá se Puede ser” para reivindicar los derechos de las personas LGBT.

Que la exaltación de la memoria de la activista Diana Navarro San Juan, es una forma de reivindicación no solo de su vida sino de personas y comunidades de la población LGBT que trabajan por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en Bogotá.



**Autores****HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO**

Concejala de Bogotá D. C.

Partido Unión Patriótica

**ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ**

Concejala de Bogotá D. C.

Partido Colombia Humana

**JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA**

Concejal de Bogotá D. C.

Partido Colombia Humana

**OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY**

Concejal de Bogotá D. C.

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social

**QUENA MARIA RIBADENEIRA MIÑO**

Concejala de Bogotá D. C.

Partido Polo Democrático Alternativo

**DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA**

Concejala de Bogotá D. C.

Partido Polo Democrático Alternativo

**ROCÍO DUSSAN PÉREZ**

Concejala de Bogotá D. C.

Partido Polo Democrático Alternativo

**JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS**

Concejal de Bogotá D.C

Partido Alianza Verde

**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**

Concejal de Bogotá D.C

Partido con toda por Bogotá

## **VI. ARTICULADO**

**PROYECTO DE ACUERDO NO 089 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA “DIANA NAVARRO SAN JUAN” A LA CALLE 22 ENTRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 14 Y CARRERA 17, EN BOGOTÁ D.C.**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Nómbrase la calle 22 en el tramo comprendido entre la Carrera 14 y la carrera 17 “Diana Navarro San Juan”.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se llevará a cabo mediante la inclusión en la nomenclatura del Distrito la asignación del nombre de la calle Diana Navarro San Juan, en el tramo establecido.

**ARTÍCULO TERCERO VIGENCIA.** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

***PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE***

**PROYECTO DE ACUERDO NO 090 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**“Por medio del cual se establecen lineamientos para garantizar el derecho de las personas trans a una vida sin violencias con plena garantía de derechos, mediante la implementación de acciones afirmativas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”**

**I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1. OBJETO**

Este Proyecto de Acuerdo tiene como objeto garantizar el derecho de las personas trans a una vida sin violencias con plena garantía de derechos, mediante la implementación de acciones afirmativas dentro de las entidades del Distrito.

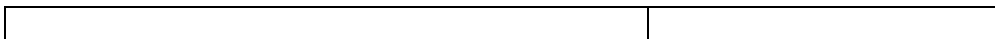
Los lineamientos creados desarrollan la Política Pública LGBTI del Distrito, estableciendo acciones afirmativas para uno de los sectores poblacionales más vulnerados en todos sus derechos, como en este caso lo son las personas trans.

**2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA**

Por iniciativa de la Administración Distrital en el año 2009, el Concejo de Bogotá creó y aprobó el Acuerdo 371 de 2009, que establece los lineamientos de Política Pública LGBTI del Distrito, como la primera política pública de su tipo en la Nación y que ha posibilitado derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Así mismo en el periodo 2020 – 2023 se presentó el proyecto de acuerdo 294 de 2023 por parte de los Concejales Heidy Sánchez, Luis Carlos Leal y Martin Rivera concertado con la administración distrital y que establecía acciones afirmativas para las personas Trans y que tuvo ponencia positiva por parte de los ponentes Julián Rodríguez Sastoque y Pedro Julián López, que, sin embargo, no alcanzó a ser debatido en plenaria para segundo debate.

<i>Título</i>	<i>Estado del proyecto</i>
<i>Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones</i>	371/2009 aprobado y sancionado
<i>“Por medio del cual se establecen lineamientos para garantizar el derecho de las personas trans a una vida sin violencias con plena garantía de derechos, mediante la implementación de acciones afirmativas dentro de las entidades del Distrito.”</i>	294/2023 Aprobado en primer debate y archivado por cierre del periodo constitucional.



La Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual MIDS de la Política Pública LGBT en marzo de 2021, elaboró y presentó a Bancada de la Diversidad Sexual y de Géneros del Concejo de Bogotá D.C, el documento “*Propuesta de acciones afirmativas para personas trans en Bogotá*” el cual es base fundamental del presente proyecto de acuerdo.

### 3. NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

De acuerdo a la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-143 de 2018 el derecho a tener una identidad de género se ha conceptualizado como “*la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales*”. Todo ello basado en los conceptos adoptados por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso los principios de Yogyakarta.

Sin embargo, en Colombia las violencias contra las personas trans están profundamente internalizadas en diversos estamentos de la sociedad. Esto basándose, en unas creencias discriminatorias construidas a partir de una normalidad cisgénero y heterosexual. Todas las expresiones e identidades de género y orientaciones sexuales que se salgan del orden establecido, son repudiadas generando la imposibilidad de ejercer los derechos más primarios y fundamentales, como lo son, la vida y el derecho a ser.

Las violencias contra la población trans, aun cuando están documentadas y a partir del activismo están siendo poco a poco más visibles no son fácilmente denunciadas y a su vez, son poco sancionadas. Este tipo de violencias configuran claramente una vulneración a los derechos humanos y a la dignidad humana. Todas estas violencias, producen unas barreras de acceso a derechos que impiden el goce efectivo de los mismos.

Por todo lo anterior, es urgente proteger la vida y todos los derechos fundamentales de las personas con identidades y expresiones de género diversas, garantizando una vida libre de violencias. Por tal motivo se requiere que la ciudad de Bogotá, cuente con un núcleo normativo que contenga medidas y acciones afirmativas que se materialicen en la prevención de hechos de violencia y en la inclusión a fin de que en la ciudad las personas trans puedan diseñar y llevar a cabo un proyecto de vida en condiciones dignas.

Las personas trans han sido históricamente vulneradas y constantemente se han visto abocadas a barreras de acceso y garantía de derechos. Esto permeado por la discriminación sistemática que sufren día a día. Diversas situaciones afectan gravemente sus derechos humanos.

Por lo tanto, es necesaria la intervención de las entidades públicas para garantizar el ejercicio pleno y la protección de estos derechos, por medio de la concertación e implementación de acciones afirmativas que faciliten y permitan ser en Bogotá.

#### 3.1. Contexto y situación actual de las personas trans en Colombia

El panorama actual de la población trans en Colombia es preocupante. A continuación, se exponen una serie de ámbitos en los cuales existe la necesidad de una intervención que garantice y proteja los derechos de las personas trans.

En el ámbito de la violencia, los delitos contra la población están en aumento. La Defensoría del Pueblo muestra que: “*quienes sufrieron con mayor rigor la violencia por prejuicios fueron mujeres transgénero (27 casos); hombres gays (14); mujeres lesbianas (8), un hombre transgénero y en 27 casos no se identifica la orientación sexual e identidad de género*” (Defensoría del Pueblo, 2021). Para lo que ha transcurrido de 2022

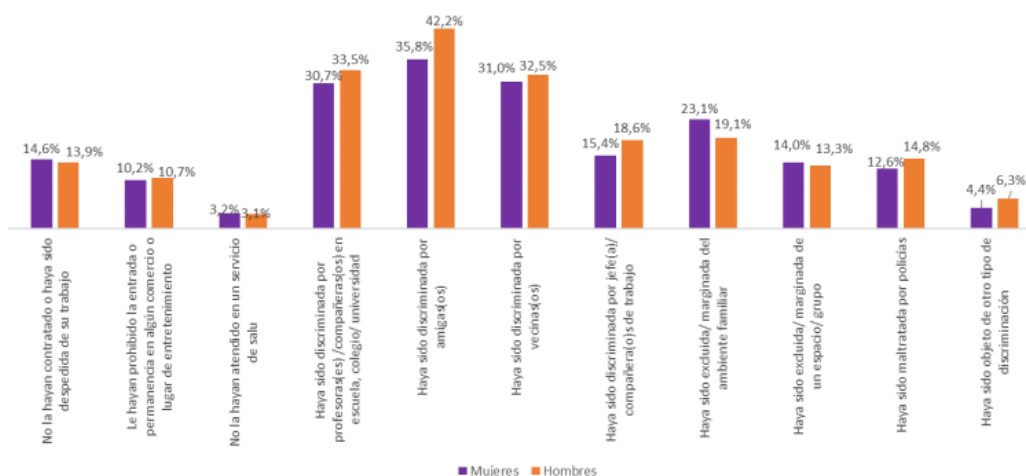
el observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo ha registrado cerca de 14 homicidios contra la población LGBTIQ+, de los cuales nueve corresponden a hombres gay, cuatro a mujeres trans y una mujer lesbiana (Caribe Afirmativo, 2022).

En el plano político-social, es preocupante la posición discriminatoria de la sociedad colombiana frente a la identidad de género. La encuesta de cultura política del DNP muestra que, si bien los colombianos en mayoría consideran que la población LGBTIQ+ tiene los mismos derechos que las demás personas; solo el 60% considera que se les debe reconocer tales derechos (Bernal & Patiño, 2020).

Esto quiere decir que, si bien la mayoría reconoce que “existen” unos derechos, que no son más que los que tiene cualquier ciudadano; apenas seis de cada diez encuestados está de acuerdo con que estos derechos se reconozcan o materialicen. Ello genera un entorno social fuertemente hostil hacia la población, que se traduce en una discriminación sistemática.

El informe del DNP “*diagnóstico de sobre la situación de discriminación de la población LGBTI en Colombia*” muestra que, dentro de la encuesta de cultura política, la mayoría de encuestados no cree que se haya avanzado en la no discriminación de la población LGBTIQ+ y también que esta discriminación es transversal, es decir, que se evidencia en espacios que van desde el hogar, las instituciones y el espacio público (Bernal & Patiño, 2020, pág. 11). En la siguiente gráfica del informe, se logra ver todos los espacios de sociabilidad donde las personas han percibido una discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

*Gráfica 3. Porcentaje de personas que reportan haber presenciado hechos de violencia o discriminación ocurridos en razón de la orientación sexual o identidad de género de otra persona.*



*Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social).*

Como lo muestra la gráfica, el 40% de las personas encuestadas fue discriminada por un amigo, el 32% por un vecino, el 30% por profesores y compañeros de clase y el 20% en espacios familiares. Bajo todas las miradas, ello es profundamente preocupante, ya que solo demuestra que los entornos que deberían fungir como protectores, se constituyen como expulsos o agresores.

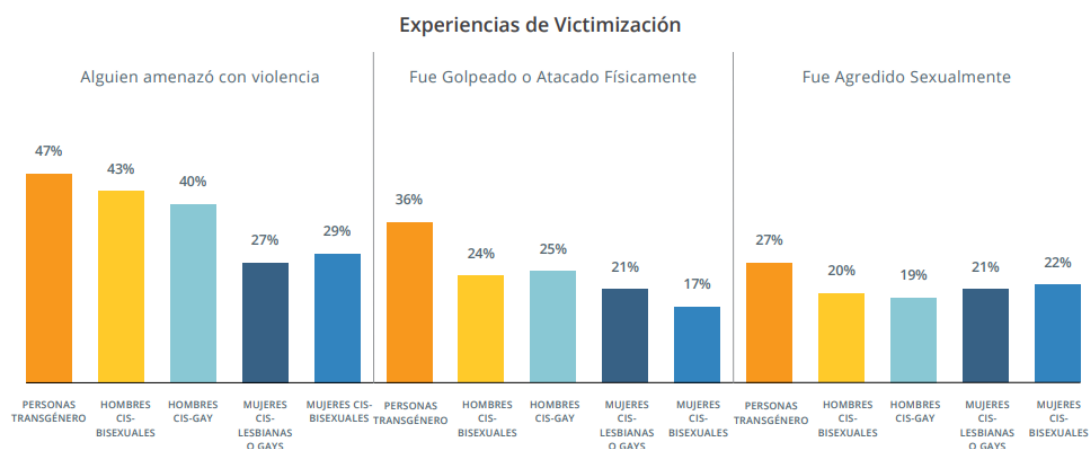
En el plano educativo la situación es grave, pues es un espacio de sociabilidad fundamental para el desarrollo de la persona. Sin embargo, desde el colegio hasta la universidad, la población LGBTIQ+ se encuentra en situación de vulnerabilidad ante hechos de discriminación. Especialmente, por la ausencia de una pedagogía de inclusión y de educación frente a la diversidad. Igualmente, por la ausencia de mecanismos eficientes de protección que permitan la sanción de actitudes y acciones violatorias de los derechos. En este sentido, el informe del DNP muestra que, según la Encuesta de Clima Escolar LGBT, el 37,2% de los estudiantes con orientación sexual o identidad de género diversa se ha sentido agredido por parte de un profesor por esta razón.

Pero, lo más alarmante es que el aparato institucional de los planteles educativos fomenta la discriminación y la revictimización:

“Es preocupante ver que en muchos casos las autoridades educativas no solo no intervienen frente a hechos discriminatorios como pueden ser los comentarios homofóbicos y el lenguaje excluyente, sino que ellos mismos tienen estas prácticas de discriminación. De acuerdo con la misma encuesta, el 39.9 % de quienes respondieron a la pregunta de con qué frecuencia los profesores u otros miembros del personal del colegio intervinieron en caso de estar presentes cuando sucedían comentarios discriminatorios expresó que el personal nunca intervino. El 75,4% de los estudiantes LGBT manifestaron que alguna vez escucharon comentarios homofóbicos por parte de sus profesores u otro personal de la institución durante el último año” (Bernal & Patiño, 2020). Se evidencia que los estudiantes pertenecientes a los sectores sociales LGBTIQ+ se encuentran en un estado de indefensión en sus planteles educativos que no garantizan la protección de sus derechos.

En el ámbito laboral las situaciones también son preocupantes. Solo 4 de cada 100 hombres y mujeres trans tiene un contrato laboral formal (Bernal & Patiño, 2020). Además, entre abril y diciembre de 2021 la población LGBTIQ+ tenía una tasa de desempleo de 15,2 %, mientras que la general fue del 13 % (DANE). En el ámbito de la salud encontramos graves consecuencias de todas las anteriores situaciones, de tal modo que la dignidad humana de la población trans se ve afectada. La Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, por medio de su Instituto Williams, publicó un informe titulado “Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia. Resultados de una encuesta nacional que ofrece un panorama preocupante.

El estudio, de casi cinco mil personas LGBTIQ+ encuestadas, muestra cinco conclusiones: 1. el 72% de los encuestados reportaron angustia psicológica moderada 2. El 55% de había tenido pensamientos suicidas en su vida 3. Uno de cada cuatro (25%) había intentado suicidarse al menos una vez 4. Las mujeres bisexuales (33%) y las personas transgénero (31%) tuvieron una tasa más alta de intentos de suicidio 4. Uno de cada cinco encuestados LGBT (21%) ha recibido tratamiento de alguien que intentó cambiar su orientación sexual o hacer que se identificaran con su sexo asignado al nacer (“terapia de conversión”) 5. (35%) de los encuestados transgénero informaron haber recibido este tratamiento (Williams Institute, 2019). En el mismo informe muestran las experiencias de victimización:



Los encuestados señalan que también han sentido agresión verbal y física por parte de policías y funcionarios públicos.

Todos estos ámbitos muestran que el panorama de la población trans en Colombia es sumamente grave, porque se enfrentan a una sociedad que los discrimina por su identidad de género. Esto deriva en altas cifras de asesinato, precariedad laboral, rechazo en el colegio y los círculos sociales, todo con consecuencias en la salud mental y física.

### 3.2 Contexto y situación actual en Bogotá

La situación de la población trans en Bogotá también es una representación de la gravedad del panorama nacional. La Mesa intersectorial de Diversidad Sexual de marzo de 2021 identificó una serie de recomendaciones de política pública que se pueden adoptar para solucionar problemas de la población. El documento divide las acciones necesarias de intervención de política por derechos, de tal modo que ofrece un panorama de la situación de la población en el Distrito:

#### **Derecho a la salud**

El derecho a la salud en Colombia es un derecho fundamental. La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha destacado su importancia por su conexión con el derecho a la vida, la integridad y la dignidad humana; también porque garantiza el derecho a la salud para sujetos de especial protección constitucional; y por último es un ámbito básico para la protección de una vida digna.

En la población trans es un derecho que muchas veces se ve vulnerado porque el sistema de salud está pensado para personas cisgénero. Esta es una de las barreras que se les presenta al momento de querer ser parte de este sistema, la siguiente barrera la encuentran en el momento que acceden al sistema de salud ya que la mayoría de veces se convierte en un espacio inseguro, porque el trato de los prestadores de salud suele ser discriminatorio y prejuicioso. Al ser pensado por y para personas cisgénero, se falla en la prestación de exámenes y consultas urológicas o ginecológicas, pues no reconocen que hay hombres con vulva y mujeres con pene que necesitan de estos exámenes/consultas médicas.

En consecuencia, documento de la Mesa Intersectorial de la Diversidad identifica que, por las dinámicas propias de la población trans, el sistema de salud no se ajusta a las necesidades de la población, pues está diseñado para personas cisgénero y en muchas ocasiones los procesos médicos suelen ser victimizantes y discriminatorios. Por lo tanto, dentro de la población LGBTIQ+, las personas trans tienen mayores percepciones negativas sobre el servicio de salud. El documento afirma que: “Sobre su propia percepción de estado de salud, las personas transgénero son quienes más sienten que su salud es mala o muy mala, en mujeres transgénero se ubica en el 5,8%, en hombres transgénero 31,4%, mientras que en hombres gay 1%, mujeres lesbianas 2,2%” (Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, 2021).

El precario servicio de la salud a personas trans y la inseguridad que sienten al recurrir a este, las ha orillado a auto medicarse o a recurrir a consejos de conocidos o de internet para seguir con su tránsito hormonal. La automedicación es más recurrente en las mujeres transgénero por la facilidad de adquirir pastillas hormonales a través de los anticonceptivos, esto es peligroso en su proceso de afirmación de género. En una muestra estadística de población transgénero 17,6% de los participantes, reportaron haber recurrido a procedimientos invasivos no médicos para la modificación corporal (1 participante relató haber intentado la automutilación genital, 1 participante refirió la inyección de aceite de avión en los glúteos y un tercer participante la inyección de silicona cosmética en glúteos y mamas) (Cañaveral J, 2020, Estudio comparativo de las condiciones de salud de las personas transexuales con asistencia médica y otro tipo de apoyo en su proceso de afirmación de género, Universidad de Caldas).

Además, la población trans, como lo muestra la Mesa Intersectorial en el tema de las enfermedades mentales, las personas que son cis-heterosexuales tienen un 1,9% de diagnóstico de enfermedades mentales; mientras que, las mujeres transgénero tienen un 3,4%, casi el doble de incidencia. A esto se le puede sumar el hecho de que el informe “Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia: Resultados de una encuesta nacional” muestra que las personas transgénero tuvieron una tasa más alta de intentos de suicidio (31%).

#### **Derecho a la educación**

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho y un servicio público. Sin embargo, las personas trans son más afectadas por el acceso a la educación y el sostenimiento en el sistema. Como se analizó en el panorama nacional, en el sistema educativo las situaciones de discriminación y violencia para las personas trans son sistemáticas. La Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual muestra que, según los datos de la Política Pública LGBTI, las mujeres transgénero son las que menos estudian dentro de la población LGBTIQ+, como se muestra en la gráfica:



### Porcentaje de personas LGBTI que actualmente estudia.

Sector	Si	No
Lesbianas	14.3%	85.7%
Gais	13.2%	86.8%
Bisexuales	19.0%	81.0%
Mujeres transgénero	10.0%	90.0%
Hombres transgénero	20.5%	79.5%
Intersexuales	15.8%	84.2%
LGBTI	15.0%	85.0%

*Fuente: Observatorio de la PPLGBTI con base en la EM2017*

A esto se suma que el 51% de los hombres transgénero alcanzó solo la básica secundaria, para las mujeres transgénero fue el 39%. Dentro de los factores que influyen en estas bajas tasas de nivel educativo están la necesidad de conseguir un trabajo, el embarazo y también el ambiente discriminatorio presente en las instituciones educativas.

#### **Derecho a la vivienda**

Frente al tema de la vivienda, la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual muestra que las personas trans tienen dificultades en la consecución de una vivienda digna. Puesto que, la mayoría de personas viven en pequeños cuartos y por la dificultad de acceder a crédito y capital, tienen dificultades para acceder a vivienda propia. Principalmente, por la precariedad laboral de las personas. Esto genera una débil estabilidad en materia de vivienda y por eso se encuentran en situaciones de vulnerabilidad donde son expulsados y discriminados frecuentemente por los vecinos y habitantes de los lugares donde viven.

#### **Derecho a la vida digna**

La Corte Constitucional ha determinado que la dignidad humana equivale a: 1) Al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y 2) A la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde a su condición humana. Qué una persona se deba enfrentar a un sistema que definitivamente no está hecho para ella es una humillación por la cual personas cisgénero y heterosexuales no pasan. En otros derechos que son fundamentales y básicos para la dignidad humana, también se ha visto esta lucha constante de la población LGBTIQ+ para hacer valer sus derechos.

#### **Derecho a la seguridad**

Se evidencia que las noticias de violencia contra la población LGBTIQ+ en Bogotá se incrementaron en los últimos años. Estos hechos ocurren principalmente por no ajustarse a los “roles de género tradicionales” contruidos, por lo que los crímenes se han denominado homofobia o transfobia. Se evidencia que gran parte de la población realiza las denuncias de maltrato por medios diferentes a las instituciones oficiales, porque por en estas la población presenta discriminación y marginación. Dentro de estas violencias y vulneraciones que vive la población se destacan las siguientes:

- Verbales.
- Físicas.
- Sexuales.

- Psicológicas: podemos encontrar la intimidación, el acoso, amenazas, etc.
- Indiferencia.

La vulneración y violencias que vive a diario la población LGBTIQ + afecta sistemáticamente los otros derechos de la población. Entendemos que, sin la seguridad correspondiente para estas poblaciones, no se podrá gozar de una estabilidad dentro de la sociedad.

#### **Derecho al Trabajo**

El panorama del derecho al trabajo en Bogotá para la población trans es preocupante. La Mesa Intersectorial identifica que las mujeres transgénero en un 24% han recibido tratos humillantes en sus sitios de trabajo, mientras que gays y bisexuales tienen tasas de 5,3% y 3% respectivamente. El informe también identifica que 10,7% de mujeres transgénero han recibido amenazas de despido en el ambiente laboral, por lo tanto, si se tiene en cuenta que esto es casi 8 veces más que la media de los otros grupos, encontramos que esto se debe a su identidad sexual.

#### **Derecho a la participación**

La población trans en su día a día se enfrenta a barreras que generan temor en el momento de querer participar activamente en proyectos públicos y sociales. Hay testimonios de personas transgénero que cuentan cómo han vivido en carne propia la violencia por parte de la población civil y otras veces por la fuerza pública. La violencia policial ha hecho que se desconfíe de proyectos públicos donde pueda participar la población transgénero. En una encuesta hecha en 2007, dentro de la población LGBTIQ+, se encontraba la mayor proporción de personas que nunca han votado (46,9% entre los entrevistados nunca había participado en unas elecciones) (Castillo, 2009). Las experiencias participativas de las personas trans son gracias a organizaciones de colectivos hechos por y para trans.

#### **Derechos culturales**

Las personas trans expresan sus vivencias y su memoria a través de procesos culturales y recreativos que tienen un mensaje de unidad, resistencia y amor propio. Por lo tanto, es importante que la Administración Distrital fomente estos espacios por medio de políticas concretas.

### **4. MARCO JURÍDICO**

Se presenta a continuación un compendio de normas que soporta la competencia y viabilidad del presente proyecto de acuerdo, evidenciando mandatos claros para el Estado, la Administración Distrital y el Concejo de la Ciudad de desarrollar acciones y políticas públicas encaminadas al restablecimiento y garantía de los derechos de los sectores sociales objeto de la presente iniciativa, al igual que a la realización de acciones que den respuesta a las formas de desigualdad económica y simbólica que han experimentado.

#### **4.1. MARCO CONSTITUCIONAL**

En materia de normativa nacional, con ocasión del presente debate, es preciso poner de presente en primera medida los siguientes artículos y mandatos de la Constitución Política de Colombia:

- Artículo 1. Se establece que *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”*
- Artículo 2. Consagra dentro de los fines esenciales del Estado *“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”*

Así mismo consagra este artículo que *“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (...)”*

- Artículo 13. Frente al particular y para los fines del presente proyecto de acuerdo, establece que *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”*

Señalando de forma expresa que *“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”*

- Artículo 5. *“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (...)”*
- En concordancia con los anteriores mandatos, el artículo 16. dispone que *“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad (...)”*
- Artículo 43. Establece que *“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación; y que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”*.
- Artículo 70. Entre otras, dispone que *“(...). El estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las personas que conviven en el país.”*
- Artículo 313. Corresponde a los concejos: *“1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (...)”*
- Artículo 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. *“(...) A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio. (...)”*

#### 4.2. DISPOSICIONES INTERNACIONALES

A nivel internacional, se encuentra un amplio postulado de normas y acuerdos relativos a las poblaciones minoritarias en el mundo, que son hoy fuente de derecho y soporte de las acciones promovidas en el presente proyecto de acuerdo:

- Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada en 1948, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), y en la que reunió los instrumentos necesarios para la defensa de los derechos fundamentales de todo ser humano. Aunque la Declaración no constituye un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sí ha tenido repercusión en la elaboración de pactos y convenciones internacionales.
- Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, definidos como PIDESC (ONU, 1966) y el Protocolo de San Salvador (OEA, 1988) obligan a los Estados a tomar medidas positivas para mejorar las condiciones sociales y reducir las brechas de desigualdad entre grupos históricamente marginados.

- Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 1º la obligación de los Estados Parte de “(...) *respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social*”.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ratificado por Colombia el 26 de octubre de 1969 y adoptado por Naciones Unidas, el contenido de este Pacto sienta las bases en los principios de libertad, justicia, paz y reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, considerando que los Estados tienen la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.
- Del mismo modo, mediante la Declaración “*Preparativos de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia*”; se reafirma el compromiso de los países adscritos a abordar manifestaciones que atenten contra las orientaciones sexuales de los individuos y se reconoce además que algunas personas y grupos poblacionales pueden experimentar otras formas de discriminación (ONU, 2000).
- En cuanto a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, la “*Convención sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*” (CEDAW), resuelta el 18 de diciembre de 1979, obliga a los Estados que la ratifiquen a la realización de acciones que contribuyan a la erradicación de las violencias contra las mujeres (ONU, 1979). Del mismo modo la “*Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres*”, conocida también como la “*Convención Belém do Pará*” promulgada en 1994, afirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los Derechos Humanos y limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. (OEA, 1994).
- En el 2002, Colombia se compromete a través de la Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, a reafirmar su decisión de combatir cualquier forma de discriminación, incluida la discriminación por la orientación sexual. Es relevante destacar que esta Carta ubica a las personas con orientaciones sexuales no hegemónicas dentro de los grupos sujetos de protección especial, por lo que en los artículos 52 y 53 reconocen que las personas, sin distinción de su orientación sexual, poseen los mismos Derechos Humanos. Además, indica que combatirán toda forma de discriminación por razones de orientación sexual, a través de acciones que incluyen la modificación de la normatividad interna de los países. (Consejo Presidencial Andino en Guayaquil, 2002).
- Los Principios de Yogyakarta (2006) se ocupan de los Derechos Humanos y de su aplicación en las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Se busca que los Principios de Yogyakarta que afirman las normas legales internacionales, sean vinculantes para todos los Estados.
- Las Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General No.10 de 2009) y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Recomendación General No. 28 de 2010), enfatizan que la identidad de género debe ser protegida contra la discriminación e insta a los Estados a crear políticas y programas que eliminen las situaciones de discriminación por identidad de género.
- El Estado colombiano firmó en marzo de 2011 la Declaración Conjunta con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la finalización de los actos de violencia y violaciones de los

Derechos Humanos relacionados sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género.

- Por otra parte, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH, 2015) reconoce que *“la orientación sexual es una parte fundamental de la vida privada de las personas y que está relacionada con el desarrollo de la identidad y el proyecto de vida que cada uno tenga, incluyendo su personalidad y las relaciones que establece con otros seres humanos”* (Colombia Diversa, 2019, p. 12).
- La Comisión IDH cuenta con una Relatoría Especial para los derechos de las personas LGBTI en las Américas concluye que es constante y mayoritaria la vulneración de los derechos de las personas con identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino.
- Entre 2008 y 2016 la Organización de Estados Americanos (OEA) promulgó ocho resoluciones denominadas *“Derechos humanos, orientación sexual, identidades de género y expresiones de género”*; en las cuales se reiteran las preocupaciones por las vulneraciones de Derechos Humanos de esta población en los Estados miembros y se solicita a estos Estados garantizar la plena garantía y goce de los derechos por parte de la población LGBTI. (OEA, Organización de Estados Americanos, 2008-2016).
- En la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la Organización de Naciones Unidas estableció en su Meta 8.5 la necesidad de contar con condiciones de inserción laboral plenas e incluyentes y en las Metas 10.2 y 10.3 la de potenciar y promover la inclusión social y económica de todas las personas sin discriminación por identidad de género u orientación sexual.

#### 4.3 MARCO LEGAL

En torno a la garantía de derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, en Colombia se han expedido las siguientes leyes:

- Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
- Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Con ocasión del presente proyecto de acuerdo se resaltan las siguientes:

*“Artículo 6: IGUALDAD. Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.”*

*ARTÍCULO 13. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.”*

- Ley 1482 de 2011, llamada ley antidiscriminación, tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
- Ley 1620 de 2013, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación.
- Ley Estatutaria 1751 de 2015, a través de la cual se regula y garantiza el derecho a la salud como un derecho fundamental, establece el acceso en igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, obliga al Estado a adoptar políticas para la igualdad de trato y para evitar la violación de este derecho y determinar el régimen sancionatorio. De igual manera establece que este derecho comporta los principios de universalidad, prohomine, prevalencia de los derechos, libre elección, y la necesidad de acciones afirmativas para grupos vulnerables.
- Ley 1753 de 2015, la cual en su artículo 30 establece que el Gobierno Nacional a través de sus entidades, implementará y hará seguimiento de la Política Pública Nacional para el grupo LGBTI a través del Ministerio del Interior.
- Finalmente, la Ley 1752 de 2015, que tiene como fin sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.

#### 4.4 DECRETOS DEL ORDEN NACIONAL

- Mediante el Decreto 762 de 2018, el Gobierno Nacional adoptó la política pública que tiene por objeto la promoción y garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En este decreto se formularon como objetivos específicos:

1. *“Promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y a una tutela judicial efectiva.”*
2. *“Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGBTI.”*
3. *“Promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.”*

Así mismo, se plantean los siguientes ejes estratégicos:

1. *“Fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales para la atención con enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.”*
  2. *“Promoción del reconocimiento e inclusión de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.”*
  3. *“Respeto, protección y garantía de derechos.”*
- Decreto 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, mediante la cual se definen, para efectos del presente debate, los siguientes principios:

*“Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar el respeto y la garantía del derecho a la igualdad, y procederán a brindar la misma protección y trato a los familiares de las víctimas, sin distinción de etnia, identidad de género, orientación sexual, cultura, edad, origen nacional o familiar, lengua, religión, discapacidad, opinión política o filosófica, condición social o económica, entre otras.*

*Enfoque diferencial. Las autoridades públicas deberán adoptar medidas que reconozcan las particularidades poblacionales, principalmente de los sujetos de especial protección constitucional, es decir, aquellos que por sus características culturales, étnicas, de género, orientación sexual, situación de discapacidad, condición económica, social, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad y vulneración manifiesta y que requieren una atención y protección diferenciada y la implementación de políticas de acción afirmativa, acordes con su situación.”*

#### 4.5 JURISPRUDENCIA

Para la población trans la Corte Constitucional ha generado un lineamiento jurídico que ha marcado precedentes importantes en materia del reconocimiento de derechos. Para ilustrar las consideraciones jurisprudenciales se relacionan alguna sentencia y los derechos reconocidos, las cuales servirán de faro para el análisis y debate del presente proyecto de acuerdo al interior del Concejo de Bogotá:

Según Colombia Diversa, quienes realizan parte del análisis jurisprudencial que se transcribe a continuación, de acuerdo con las sentencias resueltas sobre casos trans es posible destacar que los derechos que reclaman los demandantes son principalmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación, a la intimidad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libre identidad sexual, la salud, la seguridad social y la educación. Los casos provienen desde diversos ámbitos; no obstante, las vulneraciones más recurrentes van dirigidas a la negación de entidades ante el cambio de nombre y cambio del componente “sexo” en el documento de identidad, la negación de procedimientos de reasignaciones sexuales, las exclusiones laborales, las discriminaciones en espacios públicos y la prohibición del acceso a la educación. Como consecuencia ante estas situaciones, la Corte Constitucional determinó, en concordancia con la restitución de los derechos afectados, ordenar a las entidades pertinentes abstenerse de realizar actos discriminatorios, agilizar los debidos procesos, etc., tal como se puede leer en las sentencias: T-063/15, T-804/14, T-086/14, T-562/13 T-771/13, T-552/13, T-918/12, T-977/12, T-876/12, T-314/11, T-062/11, T-152/07, SU-476/97, T-594/93, T-143/2018, T-622/2014, T-476/2014, T-152/2007.

- “Sentencia C-371 de 2000, en la cual la Corte Constitucional establece la definición de las acciones afirmativas como políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, y determinados campos de acción para dichas políticas, en primer lugar, eliminar o reducir las desigualdades que afectan a determinados grupos, y por otra parte, lograr mejor representación de las personas o grupos que han sido discriminados. En la misma sentencia determinó que: “Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables.” (Sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 29 de marzo de 2000.)
- Sentencia C-044 de 2004, sostiene que una de las bases del Estado Social de Derecho es la búsqueda de la igualdad material, es decir real y efectiva entre los administrados, lo cual únicamente

se obtiene al implementar políticas y medidas que benefician en mayor medida a las personas o grupos de personas que históricamente han sido vulnerados de tal manera que la brecha existente en el disfrute de los derechos se elimine o disminuya. (Sentencia C-044 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería, 27 de enero de 2004).

- Sentencia T-562/2013, falló a favor de una estudiante transgénero y consideró necesario que las autoridades académicas en una primera etapa realicen un acompañamiento que le brinde una adecuada adaptación a la estudiante transgénero y en una segunda etapa, que se debe incluir en el proceso a la comunidad educativa, para evitar que se vulneren derechos, y que se presente el matoneo escolar.
- Sentencia T-552 de 2013: ordenó cubrir los procedimientos médicos necesarios para estas transformaciones a dos tutelantes, que el sistema de salud cubra las transformaciones corporales necesarias para afirmar la identidad de género de las personas transgénero, las instituciones de salud todavía les exigen un certificado psiquiátrico para que puedan acceder a estos servicios.
- Sentencia T-48 de 2015, a raíz del caso Sergio Urrego en Colombia una sentencia de la Corte Constitucional obligó a las instituciones educativas a revisar los manuales de convivencia y a crear una serie de protocolos para garantizar la integridad de las personas con diferente orientación sexual. -La sentencia T-562 de 2013 tuteló el derecho de un estudiante transgénero a estudiar con el uniforme correspondiente a su identidad de género.
- Sentencia T-804 de 2014: Respecto del derecho a la educación a las mujeres transgénero. Diferenciación entre orientación sexual e identidad de género. Adicional a lo anterior, es importante resaltar que, a lo largo de los 10 años de implementación de la PPLGBTI, la DDS ha observado con preocupación que las personas transgénero, tanto hombres como mujeres son el sector poblacional que cuenta con menos oportunidades laborales lo cual crea unas condiciones de vulnerabilidad muy profundas. En este sentido también se ha manifestado la Corte Constitucional al concluir que dentro del sector LGBTI es justamente la población transgénero la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos. Las personas transgénero expresan su identidad de una forma que supone una mayor manifestación hacia la sociedad, generalmente a través de transformaciones físicas, lo que ha generado que se encuentren en mayor medida expuestos a prejuicios sociales y actos discriminatorios. (Sentencia T-804 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
- Sentencia T-063 de 2015, a través de la cual se reconoce el derecho a la corrección del sexo en el Registro Civil y demás documentos de identidad de las personas transgénero. En este sentido también se ha manifestado la Corte Constitucional al concluir que dentro del sector LGBTI es justamente la población trans la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos. Las personas transgénero expresan su identidad de una forma que supone una mayor manifestación hacia la sociedad, generalmente a través de transformaciones físicas, lo que ha generado que se encuentren en mayor medida expuestos a prejuicios sociales y actos discriminatorios. (Sentencia T-804 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
- Sentencia T-063 de 2015, mediante la cual se reconoce que las personas transgénero enfrentan graves obstáculos para ejercer el derecho al trabajo debido a los prejuicios sociales sobre su identidad, lo cual conlleva que no tengan las mismas oportunidades que el resto de la población para acceder y permanecer en el mercado laboral y ocasiona graves dificultades para su vida pues se ven abocados a situaciones de pobreza, enfermedad y aislamiento permanente. Aun cuando se logra



alcanzar buen nivel educativo, las oportunidades se ven truncadas por condiciones de discriminación.

- Sentencia T-099 de 2015, según la cual las mujeres transgénero no son destinatarias del servicio militar obligatorio. Aplicación de un enfoque diferencial que tenga en cuenta la protección constitucional de la identidad de género y la orientación sexual frente a prohibición de obligar a prestar el servicio militar a las mujeres transexuales.
- Sentencia T-392 de 2017, “en la que la H. Corte Constitucional tuteló los derechos de la ciudadana, y en la parte motiva retoma la especial protección que se atribuye a las personas transgénero dada la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran habida cuenta de la exclusión y discriminación que han sufrido históricamente.
- Sentencia T-804 de 2019, ordenó el reintegro de un estudiante transgénero a quien se le había negado un cupo en un colegio.”
- Sentencia T 033 de 2022 - en la cual se realiza un análisis del avance en el reconocimiento de derechos de personas No Binarias a nivel mundial y se define como obligación al Gobierno Nacional y a la Registraduría a actualizar la normatividad y generar un escenario para garantizarla actualización del esquema de identificación con el componente de sexo no binario

#### 4.6 NORMATIVA DISTRITAL

La constante discriminación y otras formas de violencia en la ciudad han demandado y requieren de mayores acciones y medidas en el Distrito de Bogotá, a continuación, se relacionan el desarrollo local a la fecha:

- Acuerdo 371 de 2009, “*Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*”, establece en sus artículos 2° Principios - literal b, y 5° Proceso estratégico “*Fortalecimiento institucional en los niveles distritales y locales*”, la necesidad de crear acciones afirmativas e institucionalizarlas en favor de la población objeto del presente proyecto.
- La Política Pública LGBTI – PPLGBTI- de Bogotá fue creada mediante Acuerdo 371 del año 2009 y sus estrategias adoptadas a través del Decreto 062 de 2014.
- El Plan de desarrollo “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*” reconoce las particularidades y características propias de diferentes sectores sociales y poblacionales, por lo que aplica el Enfoque diferencial en su diagnóstico y solución a problemáticas:

*Artículo 6 ... “Enfoque diferencial. Reconoce que existen grupos y personas que han sido históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, orientación sexual, identidad de género, creencia religiosa, ubicación geográfica, discapacidad, situación socioeconómica, o de la intersección de diversos sistemas de discriminación que, como el racismo, la discafofia, el clasismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia y la intolerancia religiosa; impiden el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones. Este tipo de discriminación se sustenta en imaginarios, estereotipos, prejuicios y comportamientos contruidos social y culturalmente que impiden la garantía plena de derechos. Su fin es hacer ajustes a la oferta institucional para garantizar adecuadamente el acceso a los bienes y servicios reconociendo las particularidades y especificidades de los distintos grupos sociales o personas”. (Alcaldía de Bogotá, 2020)*

Se establece también una meta plan que representa un desafío en la construcción de competencias institucionales para la creación de una cultura que reconozca las necesidades de personas LGBTI enfocadas en personas transgénero.

“Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos”.

- Directiva 005 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría Distrital de Planeación: por medio de la cual se dan lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital.
- Documento CONPES D.C. No. 16 del Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital, por medio del cual se actualiza del Plan de Acción de la “Política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital” 2021-2032.

## 5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ:

De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. el Concejo de Bogotá D.C. es competente para:

*“Artículo. - 12°. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

*1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

*(...) 25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.*

## 6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa **no genera un impacto fiscal** que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, teniendo en cuenta que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

## Referencias

- Bernal, J., & Patiño, C. (2020). *Documento de diagnóstico de sobre la situación de discriminación de la población LGBTI en Colombia*. Bogotá: DNP.
- Defensoría del Pueblo. (25 de junio de 2021). *Defensoría del Pueblo*. Obtenido de Defensoría del Pueblo: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10218/Entre-2020-y-2021-asesinaron-a-98-personas-con-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero-diversas-OSIGD-dEFENSOR%C3%8DA.htm#:~:text=Entre%202020%20y%202021%20asesinaron,g%C3%A9nero%20diversa>
- Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual. (2021). *Propuesta de acciones afirmativas para personas trans en Bogotá*. Bogotá: Alcaldía de Bogotá.
- Unidad de Víctimas. (18 de mayo de 2017). *Unidad de Víctimas*. Obtenido de Unidad de Víctimas: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/mas-de-dos-mil-victimas-del-conflicto-son-lgtbi/34826>
- Williams Institute . (2019). *Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia. Resultados de una encuesta nacional*. Los Ángeles: Facultad de Derecho de la Universidad de California.

Atentamente,

**HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO**

Concejala de Bogotá D. C.  
Partido Unión Patriótica

**ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ**

Concejala de Bogotá D. C.  
Partido Colombia Humana

**JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA**

Concejal de Bogotá D. C.  
Partido Colombia Humana

**OSCAR FERNANDO BASTIDAS JACANAMIJOY**

Concejal de Bogotá D. C.  
Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social

**QUENA MARIA RIBADENEIRA MIÑO**

Concejala de Bogotá D. C.  
Partido Polo Democrático Alternativo

**DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA**

Concejala de Bogotá D. C.  
Partido Polo Democrático Alternativo

**ROCÍO DUSSAN PÉREZ**

Concejala de Bogotá D. C.  
Partido Polo Democrático Alternativo

**JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS**

H. Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde

**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**

Concejal de Bogotá  
Partido con toda por Bogotá

**II. TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

**PROYECTO DE ACUERDO NO 090 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

***“Por medio del cual se establecen lineamientos para garantizar el derecho de las personas trans a una vida sin violencias con plena garantía de derechos, mediante la implementación de acciones afirmativas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”***  
**El Concejo de Bogotá D.C.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** El presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para que la Administración Distrital implemente acciones afirmativas para las personas trans de la ciudad, en especial, frente a los derechos más vulnerados a este grupo poblacional.

**Parágrafo.** Con el término “personas trans” se hace referencia a todas las experiencias de vida trans. Esto es: transgénero, transexual, travesti, no binario, y las demás identidades de género diversas.

**ARTÍCULO 2. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA SALUD.** La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la salud de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Gestionar e implementar un programa encaminado a los tránsitos saludables, asistidos y con bienestar para personas trans desde la estructura en salud del sector público y alianzas público privadas.
2. Disponer y/o adecuar baños neutros en las instalaciones de atención en salud que hacen parte de la Red de Servicios de Salud del Distrito.
3. Crear un programa para promover, fortalecer y acompañar la participación y movilización en salud de las personas trans, en aras de la garantía de este derecho, desde procesos de innovación, co-creación, gestión del conocimiento, la memoria y los saberes, investigación basada en experiencias de vida trans, cuidado, autocuidado, socio cuidado, el empoderamiento de los tránsitos y la salud integral en las personas trans.
4. Conformar un equipo de replicadores integrado por personas trans, entre otras, que generen un efecto multiplicador en los centros de salud para la difusión y apropiación de las guías de salud trans.
5. Generar un programa en derechos sexuales y derechos reproductivos para personas trans, que incluya planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), procesos de fertilidad, parto y posparto y todas las demás características que conlleva la salud, la construcción y el ejercicio de la sexualidad en el marco de los derechos.

**ARTÍCULO 3. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.** La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la educación de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Generar oportunidades diferenciales de acceso y permanencia a la Educación Superior mediante la generación de puntos adicionales a personas trans en las convocatorias desarrolladas por la Secretaría de Educación del Distrito, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) y otras ofertas de educación superior que brinde el Distrito.
2. Apoyar cuando así lo solicite, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Bogotá, para la revisión de sus procesos y/o procedimientos de ingreso, acompañamiento, permanencia y bienestar a personas trans, en garantía del Enfoque Diferencial por Identidades de Género.
3. Impulsar un equipo de investigación y docencia interdisciplinario, integrado por personas trans o con conocimiento en temática de género y diversidad sexual, en concertación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que lleve a cabo procesos de investigación sobre problemas sociales que enfrentan las personas trans en Bogotá, aportando conocimiento para el diseño e implementación de políticas públicas en la ciudad.
4. Incluir en los programas de becas educativas del Distrito, una línea para personas trans, para la garantía de asistencia, sostenimiento y permanencia en el sistema de educación superior: técnicos, tecnológicos, pregrados y postgrados.

5. Crear e incluir un programa de inclusión socio laboral en el sistema educativo del Distrito, enfocado en la promoción de entornos educativos inclusivos y sin discriminación, seguimiento a la deserción escolar por razones de orientación sexual e identidad de género, involucrando procesos pedagógicos y de sensibilización con familias, cuidadores, profesores, orientadores escolares, personal administrativo y directivo de establecimientos educativos.
6. Crear e implementar un programa distrital de garantías para la permanencia de estudiantes trans en las instituciones educativas, en todos sus niveles, con acompañamiento psicosocial, ajustes administrativos de reconocimiento de la identidad, y promoción de una cultura educativa del respeto y el reconocimiento por la diversidad.
7. Establecer protocolos sobre violencias basadas en género que incluya la discriminación por orientación sexual e identidad de géneros en las instituciones educativas de la ciudad.
8. Incluir como parte de la implementación de la Ley 1620 de 2013, procesos de formación sobre sistema sexo/género para maestros y maestras de las instituciones públicas de básica y media.
9. Incluir en las escuelas de familias de las instituciones educativas oficiales procesos formativos contra todo tipo de discriminación en cumplimiento de la Ley 1482 de 2011, explicitando la discriminación por orientación sexual e identidades de género.
10. Generar herramientas para los colegios distritales para que puedan hacer acompañamiento académico y psicosocial a los y las estudiantes que decidan hacer tránsitos de género garantizando el bienestar de estas personas.
11. Garantizar en las instituciones educativas oficiales el cambio de nombre en los documentos académicos y administrativos (carnets, listas de asistencia, certificados, diplomas, etc.) cuando así lo soliciten estudiantes y padres de familia o acudientes. Igualmente, se deben generar las condiciones para que se respete el nombre identitario de la o el estudiante sin que sea necesario su cambio legal.
12. Garantizar que los y las docentes trans del Distrito puedan ejercer su derecho a expresar libremente su identidad de género

diversa en los espacios laborales docentes, sin perjuicio de discriminación por parte de sus superiores, compañeros y compañeras docentes, estudiantes, padres de familia y en general de la comunidad educativa y de esta manera fomentar espacios laborales libre de violencias hacia las personas trans docentes

**ARTÍCULO 4. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA VIVIENDA.** La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Hábitat, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la vivienda de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Crear programas para acceder prioritaria y diferencialmente a subsidios de vivienda de interés social y arrendamiento, teniendo en cuenta las configuraciones de familia de las personas trans, así como oportunidades eco materiales que disminuyan el compromiso de endeudamiento, en atención a sus dinámicas de vida y vulnerabilidad permanente.
2. Diseñar e implementar programas de vivienda colectiva y otras tipologías, que atiendan las formas particulares de habitar de las personas trans y garanticen que la vivienda corresponda con las relaciones basadas en la economía solidaria, la autogestión y la participación comunitaria.
3. Diseñar mecanismos alternativos de financiación ajustados a las dinámicas de vida de las personas trans y su vulnerabilidad económica, para facilitar el cierre financiero u otros mecanismos económicos que garanticen el derecho a la vivienda.
4. Diseñar e implementar programas para el fortalecimiento y el apoyo a la difusión de las organizaciones populares de vivienda conformada por la población trans.
5. Diseñar e implementar un programa de hogares de paso o casas refugio, que haga parte de la estrategia de atención integral a casos de violencia o emergencia habitacional.

**ARTÍCULO 5. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LOS DERECHOS A LA VIDA Y SEGURIDAD.** La Administración Distrital, en cabeza de las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia y de la

Mujer, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía de los derechos a la vida y la seguridad de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Conformar un equipo que incluya personas trans en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que atienda territorialmente las situaciones de violencia que enfrentan las personas trans, de tal manera que recepcionen, enruten, hagan seguimiento de las denuncias correspondientes y adelanten procesos de convivencia en las localidades y con los actores involucrados en las situaciones de conflicto que se identifiquen.

2. Transversalizar el enfoque trans para el acompañamiento en las diferentes rutas del Distrito que atienden situaciones para la garantía de derechos, en articulación con la Unidad contra la Discriminación, con el fin de incluir un enfoque diferencial, interinstitucional e intersectorial de respuesta y seguimiento a casos de personas trans, relacionados con la seguridad, convivencia, violencias, abuso sexual correctivo, abusos de la fuerza pública y transfeminicidio, Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), trata de personas, entre otros hechos que atenten contra la integridad física, psicológica, económica y sexual de las personas trans.

3. Atender con enfoque diferencial a las personas trans en el marco de la implementación de la Estrategia de Atención a Víctimas de Violencia(s) en Razón a su Orientación Sexual e Identidad de Género Casa Refugio LGBTI, la Ruta de Atención Interna de las Víctimas de Trata de Personas (VTP) y la Ruta de Atención y Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

4. Identificar y atender diferencialmente a personas trans en el marco de la implementación de acciones frente a casos de abusos de autoridad.

**ARTÍCULO 6. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO AL TRABAJO.** La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco de sus competencias, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho al trabajo de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Generar un sistema de cuotas y cupos diferenciales para la vinculación socio laboral de personas trans en las entidades del Distrito, a través de órdenes de prestación de servicios, plantas temporales, cargos directivos y provisionalidad; teniendo en cuenta los sistemas de equivalencias; las experiencias y saberes empíricos; y el reconocimiento de las identidades trans en los procesos de selección, nombramiento, precontractuales y contractuales.

2. Fortalecer los programas para la tramitación de los cambios de nombre, sexo y/o género en los documentos de identidad y libreta militar de las personas trans que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica en articulación con las entidades públicas del orden nacional competentes.

3. Fortalecer el desarrollo y sostenibilidad de micro, pequeñas y medianas empresas de personas trans o que las incluyan de manera significativa, así como de emprendimientos, proyectos productivos, de economía popular, y de generación de ingresos en procura de su seguridad económica, estabilidad y vida digna.

4. Realizar una caracterización socio laboral de personas trans en términos de sus barreras y sus necesidades.

5. Formar en habilidades para el trabajo (blandas, transversales, y/o laborales) que amplíen las posibilidades de inserción laboral de las personas trans, en articulación con la escuela de desarrollo de capacidades para la inclusión socio laboral trans para el desarrollo de procesos de convocatoria y selección de potenciales beneficiarios a los programas de formación.

6. Realizar y fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial a las personas trans que son vinculadas laboralmente para evitar la deserción laboral y fortalecer capacidades a través de la gestión público privada

7. Crear una estrategia de promoción y difusión de la normatividad para la formalización laboral desde la perspectiva trans para el ecosistema empresarial de la ciudad.

**ARTÍCULO 7. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN.** La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC), en el marco de sus competencias, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía del derecho a la participación de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Crear un programa de incentivos, becas y estímulos económicos para el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria y artística de personas trans, constituidas y no constituidas jurídicamente, cuyas iniciativas y procesos aporten a la inclusión de las personas trans en Bogotá, la transformación de imaginarios y representaciones sociales; la incidencia política; la participación social; la producción, circulación, investigación y movilización de expresiones artísticas y culturales.

2. Los Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías Locales acogerán los lineamientos técnicos elaborados por la Secretaría Distrital de Planeación desde la Dirección de Diversidad Sexual para la formulación de proyectos de inversión local, en donde se incluye población LGBTI y se deberá atender especialmente a personas trans.

3. Crear procesos de incidencia política, formación y fortalecimiento de nuevos liderazgos de personas trans que contribuyan a su postulación y elección en espacios políticos

**ARTÍCULO 8. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LOS DERECHOS CULTURALES.** La Administración Distrital, en cabeza del Sector de Cultura, Recreación y Deporte, implementará acciones afirmativas para el respeto y la garantía de los derechos culturales de las personas trans de la ciudad con base en los siguientes lineamientos:

1. Fortalecer la escuela de Artes y Oficios trans, a partir de alianzas público-privadas y/o comunitarias para garantizar en el diseño e implementación su sostenibilidad.

2. Implementar procesos de cualificación y/o formación con personas trans en arte, cultura, patrimonio, recreación y/o deporte.

3. Crear la línea de fomento para el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria y artística de personas trans, cuyas iniciativas y procesos, aporten a la inclusión de las personas trans en Bogotá, que potencia la creación, desarrollo y circulación de las expresiones artísticas, patrimoniales y culturales.

4. Fomentar y promover el respeto por las identidades y experiencias de vida trans y transgénero en las prácticas deportivas, amateur y profesionales, generando procesos de sensibilización en las distintas categorías y en las diversas disciplinas deportivas, buscando la inclusión de personas trans a las distintas ligas deportivas del distrito. Aumentar el indicador de personas trans que practican un deporte en el distrito

**ARTÍCULO 9. SEGUIMIENTO.** La Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual de la Política Pública LGBTI (MIDS), su unidad técnica trans (MIDS UTA TRANS), el Consejo Consultivo LGBT y las organizaciones de la sociedad civil que representan a estos sectores, establecerán la batería de indicadores para medir el avance y hacer seguimiento a la implementación de los lineamientos definidos en este Acuerdo.

**ARTÍCULO 10. INFORMES.** La Administración Distrital desde la Secretaría Distrital de Planeación y la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual (MIDS), presentará al Concejo de Bogotá informe anual de balance de cumplimiento del presente acuerdo y del Acuerdo 379 de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas - LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, el primer día hábil de junio de cada año, en el marco del mes de la diversidad sexual en el Distrito.

**Artículo 10. VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**



**PROYECTO DE ACUERDO NO 091 DE 2025****PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE DAN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA NUTRICIONAL A LA PRIMERA INFANCIA EN SUS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA Y A MADRES GESTANTES”*****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO DEL PROYECTO**

Lograr lineamientos para la creación y puesta en marcha de un programa especial de asistencia nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 días de vida y a las madres gestantes, conforme a las estrategias y políticas nacionales e internacionales y al Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Fortaleciendo el desarrollo y crecimiento de los infantes de los sectores más vulnerables, desde su concepción hasta los dos años de edad.

**2. ANTECEDENTES**

En Colombia, el 25% de la población (13 millones de personas) está en situación de inseguridad alimentaria. De este número, 1,6 millones están en inseguridad alimentaria severa y 11,4 millones en inseguridad alimentaria moderada. Así mismo, el 15% de los hogares en Colombia experimentan brechas importantes en el consumo de alimentos - consumo limítrofe o pobre - lo que significa que no logran asegurar un consumo aceptable de los diferentes grupos alimentarios.

Otros datos relevantes es que el 33% de la población logra tener un consumo aceptable y un 52% logra un consumo aceptable mediante un alto uso de estrategias de afrontamiento como consumir alimentos menos preferidos, reducir el tamaño de las porciones y reducir el número de comidas al día.

Para el caso de Bogotá, según el informe 2023 del Programa Mundial de Alimentos, el 13% (1.100.000 personas) se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa y alrededor de 80.000 personas padecen inseguridad alimentaria severa. Para el caso de población infantil, una mala alimentación afecta gravemente la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Dos de sus principales manifestaciones son el retraso en el crecimiento y la emaciación.

Una vez nacido el menor, el estado nutricional de la madre sigue siendo un factor durante la lactancia. Existen otros factores que también influyen en el desarrollo del menor, como los recursos de su familia para ofrecerle una alimentación y atención adecuadas y su acceso a servicios médicos, agua salubre y saneamiento. Por lo anterior es igual de importante atender la nutrición materna, no solo para mejorar las perspectivas de vida de las mujeres, sino también las de la siguiente generación.

La atención para las gestantes, las niñas y los niños debe ser un acto de ejercer el derecho de los infantes y no una iniciativa que dependa de las voluntades de los mandatarios de turno, que de paso ayude en la eliminación

de la segregación o la disminución de la brecha que la producen. En especial en la primera infancia en donde existe una diferencia sustancial en el proceso de crianza y de educación inicial de los niños y niñas, dependiendo de su nivel cultural y socioeconómico.

De acuerdo con la FAO (2023), con datos del DANE, el 28,1 % de los hogares no accede a las tres comidas diarias.<sup>31</sup>

Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) en Colombia murieron 237 niños por desnutrición con corte a octubre de 2023. Mientras el aumento de la pobreza extrema asciende a 6,9 millones de personas, alertó la red de Bancos de Alimentos de Colombia (ONG Abaco).<sup>32</sup>

Según esta ONG, "hay 130.000 personas nuevas que viven con un promedio mensual de 198.000 pesos (unos 46 dólares) y no les alcanza para acceder a una canasta básica de alimentos". Declaración dada en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Alimentación.

La desnutrición en Colombia en los menores de cinco años causó la muerte de 377 niños, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). "Más de uno al día", siendo la cifra más alta de la última década.

Además, más de medio millón de menores de cinco años se encuentran actualmente con desnutrición, lo que provoca que "su cuerpo no crece, su cerebro no crece y esto es irreversible", señaló el director de Abaco, Juan Carlos Buitrago.

"Está demostrado que estos niños tendrán 14 % menos de coeficiente intelectual y 54 % menos de ingresos en la vida adulta porque serán personas menos inteligentes a causa de los problemas alimentarios", señaló Buitrago.

Además, y según Buitrago, el 35 % de los colombianos viven por debajo de la línea de pobreza con ingresos per cápita de 396.000 pesos mensuales (casi 92 dólares), mientras que actualmente comer en Colombia se sitúa alrededor de los 617.000 pesos mensuales (145 dólares).

El director de Abaco señaló las cinco principales causas de la crisis de seguridad alimentaria, como los desastres naturales, la desigualdad (es el séptimo país más desigual del mundo) o la inflación, que aumentó un 27,8 % en el 2022.

---

<sup>31</sup><https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-inseguridad-alimentaria-esta-vinculada-a-la-pobreza-y-no-a-la-falta-de-produccion-3651928>

<sup>32</sup>[https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-alimentaci%C3%B3n\\_m%C3%A1s-de-230-ni%C3%B1os-han-muerto-en-colombia-por-desnutrici%C3%B3n-en-2023--alerta-ong/48889586#:~:text=Bogotá%202013%20oct%20\(EFE\).Alimentos%20de%20Colombia%20\(Abaco\).](https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-alimentaci%C3%B3n_m%C3%A1s-de-230-ni%C3%B1os-han-muerto-en-colombia-por-desnutrici%C3%B3n-en-2023--alerta-ong/48889586#:~:text=Bogotá%202013%20oct%20(EFE).Alimentos%20de%20Colombia%20(Abaco).)

Además, el desplazamiento en el país de personas del sector rural por culpa de la violencia y el hecho de que Colombia sea el país de América Latina que más migrantes recibe provocan un aumento de la población y empeora la situación alimentaria.

De acuerdo con el informe publicado por Focos de Hambre, cerca de 7,3 millones de Colombianos sufren de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia alimentaria<sup>33</sup>.

La pandemia de COVID-19 amplificó las disparidades existentes y sus efectos económicos seguirán sintiéndose en los hogares vulnerables (DNP, 2023).

La combinación de COVID, conflictos y cambio climático llevaron a millones de niños y niñas a la desnutrición.

“El progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes de la infancia.”, ha afirmado Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de Unicef. “El número de niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas del abuso, sufren ansiedad, viven en la pobreza y se ven obligados a contraer matrimonio ha aumentado. Al mismo tiempo, su acceso a la educación, la socialización y algunos servicios esenciales como la salud, la nutrición y la protección ha disminuido. Las señales de que los niños sufrirán las peores consecuencias de la pandemia durante años son inconfundibles”<sup>34</sup>

Según documento de la Unicef “*informe mundial: Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress*” en diversos países se han logrado intervenciones exitosas para combatir la desnutrición de los menores de 5 años, dentro de las cuales están: mejorar la nutrición de las mujeres, especialmente antes, durante y después del embarazo; la lactancia materna temprana y exclusiva durante los primeros 6 meses; la alimentación complementaria a tiempo, segura, y de buena calidad de los 6 a los 24 meses; y una ingesta adecuada de micronutrientes.

Las malas condiciones pueden afectar al estado nutricional debido a diarreas e infecciones parasitarias. Recientemente se ha determinado que un trastorno intestinal subclínico conocido como enteropatía ambiental es uno de los principales mediadores de la asociación entre los componentes WASH, el retraso en el crecimiento y la anemia (Humphrey 2009). Por lo tanto, centrarse únicamente en los resultados de enfermedades clínicas puede llevar a subestimar el impacto de las intervenciones WASH. De esta manera, los programas WASH deberán implementarse con marcos temporales que permitan evaluar los resultados de la nutrición para introducir cambios o relacionarlos con la incidencia o prevalencia de la diarrea.

Su principal objetivo es tener un impacto más profundo en la salud de los niños/as para mejorar su bienestar en sus primeros 1000 días de vida. La prevención del retraso en el crecimiento es, probablemente, el principal efecto esperado de esta nueva perspectiva, a través de la reducción de la EED y demás causas mediadoras de la relación WASH- retraso en el crecimiento.

---

<sup>33</sup> <https://www.bluradio.com/nacion/crisis-alimentaria-en-colombia-agudizara-en-2022-onu>

<sup>34</sup> <https://www.Unicef.org/es/comunicados-prensa/progreso-ha-retrocedido-indicadores-importantes-infancia-un-ano-despues-pandemia>

Por ello es tan importante alcanzar el acceso a agua y saneamiento de calidad para todos para el año 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 6). Será un elemento fundamental para terminar con la malnutrición (Objetivo de Desarrollo Sostenible 2) y prevenir la mortalidad neonatal e infantil. Así como alcanzar la cobertura sanitaria universal (Objetivo 3). Además, conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje (Objetivo 4) sólo será posible si existe una correcta nutrición al inicio de la vida y si el correcto desarrollo físico y cognitivo de la infancia está asegurado.

Es vital una mayor inversión en agua, saneamiento e higiene, así como en nutrición para luchar de manera efectiva contra las causas de desnutrición.

En Colombia la “*tasa de mortalidad por desnutrición registra un aumento en primera infancia (0 a 5 años) al pasar de 6,5 en el 2013 a 9,0 en 2022*” (DANE, 2023, p. 37).

La desnutrición continúa afectando a millones de niños. Su presencia es visible en el retraso en el crecimiento de aquellos que no reciben una nutrición adecuada durante los primeros 1.000 días. Estos niños pueden que soporten la carga del retraso en el crecimiento durante el resto de sus vidas y es posible que nunca alcancen el desarrollo pleno de sus capacidades físicas e intelectuales<sup>35</sup>.

Según la OMS, los países miembros de dicha organización han endosado metas globales para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño y están comprometidos con la monitorización de los avances. Las metas son vitales para identificar áreas prioritarias y propiciar los cambios a nivel mundial<sup>36</sup>. Dentro de esas metas a 2025 están:

#### METAS MUNDIALES DE NUTRICIÓN REVISADAS PARA 2030 (EN COMPARACIÓN CON 2012 COMO BASE DE REFERENCIA)

	Meta para 2025	Meta para 2030
Retraso del crecimiento	Reducción del 40% en el número de niños menores de 5 años que padecen retraso del crecimiento.	Reducción del 50% en el número de niños menores de 5 años que padecen retraso del crecimiento.
Anemia	Reducción del 50% en las tasas de anemia en mujeres en edad reproductiva.	Reducción del 50% en las tasas de anemia en mujeres en edad reproductiva.
Bajo peso al nacer	30% de reducción en el bajo peso al nacer.	30% de reducción en el bajo peso al nacer.
Sobrepeso infantil	Lograr que no aumente el sobrepeso infantil.	Reducir y mantener el sobrepeso infantil por debajo del 3%.
Lactancia materna	Aumentar el índice de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida hasta al menos el 50%.	Aumentar el índice de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida hasta al menos el 70%.
Emaciación	Reducir y mantener la emaciación infantil por debajo del 5%.	Reducir y mantener la emaciación infantil por debajo del 3%.

FUENTE: OMS y UNICEF. 2018. *The extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition targets to 2030*. Documento de debate.

<sup>35</sup> <https://www.unicef.org/colombia/informes/el-estado-mundial-de-la-infancia-2019-ni%C3%B1os-alimentos-y-nutrici%C3%B3n>

<sup>36</sup> OMS. Metas mundiales de nutrición 2025: Serie de documentos normativos.

Unicef hace un llamado a los gobiernos y empresas para que inviertan más en políticas que brinden a los papás, y a todas las madres, el tiempo y apoyo que necesitan para cuidar a sus bebés.

**En todo el mundo solo 15 países cuentan con las tres políticas nacionales esenciales para ayudar a familias con niños pequeños (Unicef)<sup>37</sup>.**

**Dichas políticas son: contar con dos años de educación preescolar gratuita, permisos de lactancia retribuidos durante los primeros seis meses de vida de un niño, seis meses de licencia de maternidad retribuida y cuatro semanas de licencia de paternidad retribuida constituyen una base fundamental para el óptimo desarrollo de la primera infancia.**

En nuestro país se estableció la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “*De Cero a Siempre*” (Ley 1804 de 2016), mediante la cual el país define el enfoque, los objetivos, los mecanismos institucionales y los principios de financiación de las acciones dirigidas a esta población.

En concreto, y atendiendo a la Ley 1804 (Art. 22 y 23), los gobernadores y alcaldes tienen el mandato constitucional y legal de organizar su administración y presupuesto, y coordinar intersectorialmente la acción de sus secretarías y entidades descentralizadas, con miras a atender integralmente a los niños y niñas menores de seis años. Garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

Los estudios de suplementos con macronutrientes generalmente confirman la importancia de los primeros 24 meses para el desarrollo intelectual. La administración temprana de suplementos tiene beneficios a largo plazo en las remuneraciones, pero no se produjo ningún beneficio con la administración de suplementos después de 36 meses.

Asimismo, en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 - Plan Nacional de Desarrollo, “*Colombia, potencia mundial de la vida*”-, se estableció dentro del eje de “*Derecho Humano a la Alimentación*” la meta 2: Eliminar el hambre en la primera infancia, para pasar de 8,0 (2021) a 3,37 al finalizar el cuatrienio 2022-2026, a partir de una “*Gobernanza multinivel para las políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA)*”, el diseño de “*el Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada, que adoptará el programa Hambre Cero como estrategia de superación de la inseguridad alimentaria en el país*”, así como la “*Intervención de la población con situaciones de malnutrición*” con especial énfasis en “*ampliar la oferta de las modalidades de prevención y atención de la desnutrición con*

<sup>37</sup> Informe UNICEF. 2017 La primera infancia importa para cada niño

<sup>37</sup>

<https://www.Unicef.org/guatemala/media/151/file/Apoyando%20el%20desarrollo%20de%20la%20primera%20infancia.pdf>

*énfasis en la población gestante y la primera infancia”, para que haya mayor “identificación, captación, atención, seguimiento, recuperación y acompañamiento de casos con riesgo o desnutrición, y fomento en la creación de entornos saludables a nivel familiar” (DNP, 2023, p. 133).*

Como antecedente es necesario mencionar que esta iniciativa se presentó en la vigencia constitucional del 2024:

No. Proyecto	Fecha radicación Autor	COMISIÓN	TÍTULO PROYECTO	PONENTES Hs.Cs. y Comentarios de la Administración
687/2024	08/11/2024	Gobierno	“Por medio del cual se crea el programa especial de asistencia nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 días de vida “Ventana de Oportunidad”	H.C. Juan Daniel Oviedo Arango - PONENCIA POSITIVA CON MODIFICACIONES H.C. JUAN JAVIER BAENA MERLANO (Coordinador) PONENCIA POSITIVA.

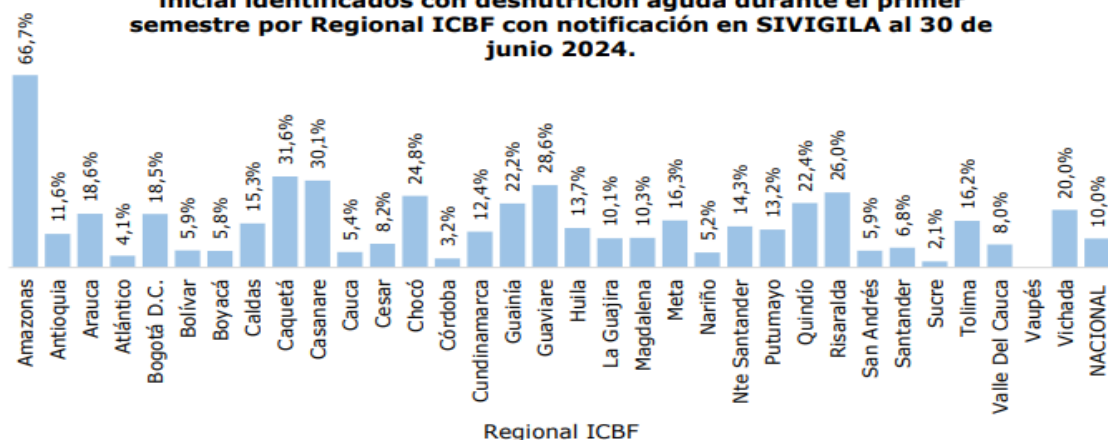
En esta oportunidad los concejales ponentes propusieron modificaciones al texto que se adoptaron, enriqueciendo así el articulado del presente proyecto.

3. JUSTIFICACIÓN

Actualmente en Bogotá habitan aproximadamente 2.200.000 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad, que representa un 28,6 % de la población total en la ciudad. De éstos, 719.705 niños y niñas se encuentran entre los 0 a 5 años de edad que representan un 32,7 % de la población infantil y un 9,38% de la población total de Bogotá. (Secretaria Distrital de Planeación)

De acuerdo con los datos reportados en el sistema de seguimiento nutricional Instituto Colombiano de Bienestar - ICBF durante 2024, la proporción de casos de desnutrición aguda se ha mantenido en 0.5% para los dos trimestres evaluados, con 5.275 casos durante el primer trimestre y 5.941 para el segundo. Sin embargo, el comportamiento por grupo de edad muestra que los menores de seis meses tienen las prevalencias más altas con respecto a los demás. Varios son los determinantes de la desnutrición infantil, entre las principales causas de la desnutrición se encuentran el consumo insuficiente en cantidad y calidad de alimentos, por ejemplo, la ausencia o inadecuada lactancia materna y las malas prácticas en alimentación complementaria. Estos pueden ser los factores críticos en el grupo de edad en donde mayores prevalencias se observan, además de las atenciones en salud y la disponibilidad de agua segura para el consumo humano. Así mismo, es indispensable movilizar la activación efectiva de la ruta, dado que, los menores de seis meses con desnutrición aguda deben recibir tratamiento intrahospitalario.

**Gráfico 6. Porcentaje de usuarios de modalidades de educación inicial identificados con desnutrición aguda durante el primer semestre por Regional ICBF con notificación en SIVIGILA al 30 de junio 2024.**



Fuente: Sistema de Información Misional Cuéntame. Fecha de corte: junio 30 de 2024

Los niños y niñas que sufren desnutrición aguda tienen mayor riesgo de muerte, ya sea por la misma desnutrición o, como sucede más frecuentemente, por complicaciones de otras enfermedades, particularmente infecciosas, especialmente por la inmunosupresión. Por otra parte, cuando un niño que sufre de desnutrición aguda no es recuperado oportuna y completamente y, además, si es recuperado tiene repeticiones de episodios de desnutrición aguda, puede desarrollar desnutrición crónica o agravarla.

Por lo anterior, la importancia de la prevención de todas las formas de malnutrición y se consigue garantizando una nutrición materna adecuada antes y durante el embarazo y la lactancia; una lactancia materna óptima en los dos primeros años de vida; alimentos nutritivos, variados e inocuos en la primera infancia; y un entorno saludable, que incluya el acceso a servicios básicos de salud, agua, higiene y saneamiento, y la posibilidad de llevar a cabo una actividad física segura. Para reducir la malnutrición infantil se necesitan medidas coordinadas entre los sectores intersectoriales que garantizan la atención eficiente y oportuna.

La existencia de desnutrición infantil en Bogotá puede originarse por varias razones: por las condiciones sociales de una familia, su nivel de ingresos o por desconocimiento de la importancia de la nutrición en los primeros años de vida de los niños y las niñas o sencillamente por la pobreza. De ahí parte nuestra propuesta de apoyar **“La asistencia nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 días de vida y a madres gestantes”** que deben tener todos los niños y niñas, desde su concepción hasta los dos primeros años de vida, en donde si no tienen la nutrición adecuada, tendrán daños irreversibles en la estructura ósea y en el crecimiento y desarrollo del cerebro (lo explica Bernardo Kliksberg, asesor principal del Director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para América Latina y el Caribe).

Estos primeros años de vida para los niños y niñas (desde la concepción), son la base del ser humano, en donde se definirá su salud, su desarrollo cognitivo y hasta su felicidad. Además, es el momento en el que en los infantes se desarrolla su sistema inmunológico, metabólico, tiene el mayor crecimiento y su cerebro crece más que el resto de su vida (<http://www.abcdelbebe.com>).



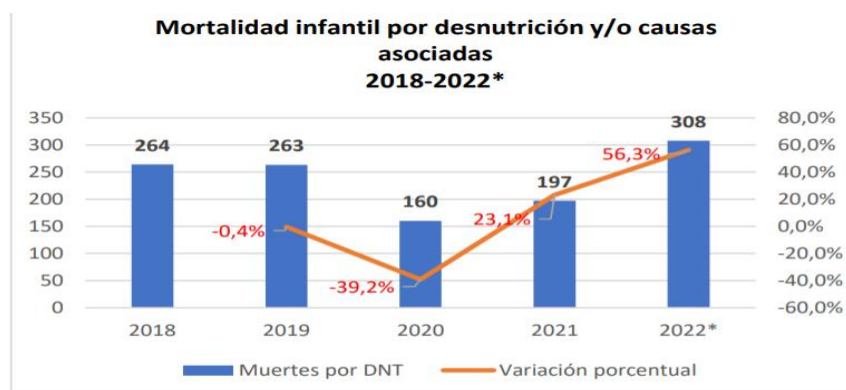
Colombia ha adoptado los patrones antropométricos, el peso y la talla para la determinación de la situación nutricional infantil y adolescente teniendo como referencia el indicador nutricional de IMC (índice de masa corporal) (MPS, 2010, Resolución 2121 de 2010, Ministerio de Salud y Protección Social - Por la cual se adoptan los Patrones de Crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2006 y 2007 para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad y se dictan otras disposiciones).

Los esfuerzos que se realicen desde las políticas de salud pública en favor de los niños y niñas, en especial en el periodo de sus primeros años (desde su concepción), son fundamentales para su desarrollo y normal crecimiento, y serán determinantes para una sociedad que debe ver en la prevención una herramienta para darle sostenibilidad al modelo de salud, que se ve abocado a crisis por la prevalencia de enfermedades en la comunidad que en buena medida se podrían evitar con acciones de prevención, como bien lo manifiesta la Ley 1438 de 2011 (Enero 19) *"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"* en su artículo 2 de la *"Orientación del Sistema General de Seguridad Social en Salud"* y en donde manifiesta que *"el Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud de la población"* (Subrayado fuera del texto).

Por otra parte se justifican estas acciones desde los Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Artículo 3, de la Ley 1438 de 2011), dentro de ellos, la universalidad, solidaridad, la Igualdad, la obligatoriedad, prevalencia de derechos, el enfoque diferencial, la equidad, la calidad, la eficiencia, la participación social, la progresividad, la prevención que define el enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a la evaluación de los procedimientos y la prestación de los servicios de salud.

Es importante anotar que debemos seguir trabajando para que no tengamos muertes en Bogotá por desnutrición. Asimismo, teniendo presente que según la Defensoría del pueblo las cifras han aumentado de manera significativa, tal como se indica a continuación:

### Desnutrición en Bogotá

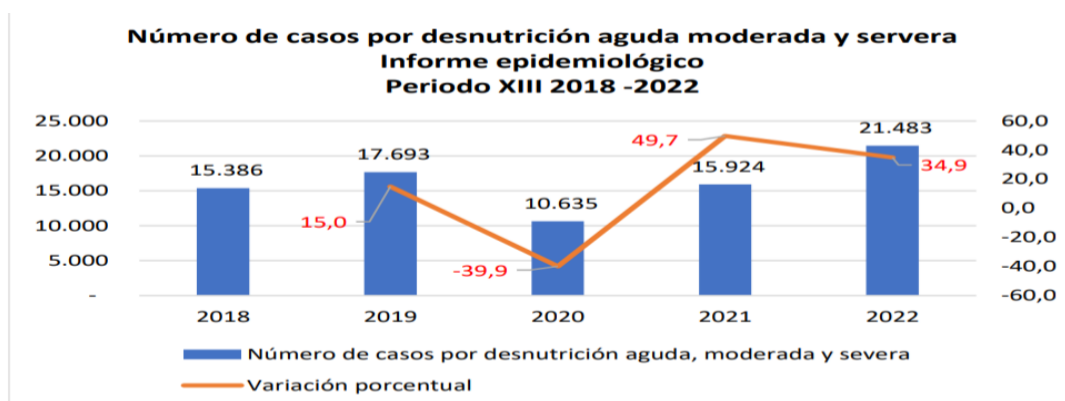


le 2022

1 aguda  
resentó

Fuente: Elaboración DDIJV con base a los datos del Instituto Nacional de Salud. Obtenido de: <https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Paginas/Info-Evento.aspx>





**Fuente:** Elaboración DDIJV con base a los datos del Instituto Nacional de Salud. Obtenido de: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/DESNUTRICION%20AGUDA%20P%20XIII%202022.pdf>

La desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años aumentó de 6,3% (2019) a 7,5% en el 2020. La desnutrición aguda aumentó de 3,4% en el 2019 a 3,7% en el 2020. El número de atenciones a habitantes en calle descendió en casi un 50% (de 86.304 a 42.902).

Este diagnóstico nos lleva a concluir que para la Administración actual es de vital importancia seguir manteniendo la tendencia en cero (0) para la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años y esto hace parte de nuestro objetivo con este Proyecto de Acuerdo que presentamos.

Es importante anotar que esta iniciativa la proponemos para todos los sectores vulnerables de los estratos sociales en la ciudad ya que existe la POBREZA OCULTA (afecta a las personas de estratos 3, 4 y 5, que tienen bienes, pero no cuentan con los ingresos para suplir sus necesidades. Las localidades en donde la Secretaría de Integración Social evidenció esta condición son Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero)<sup>38</sup>.

Según César Sánchez, doctor en economía social por la Universidad de Valencia, España; algunas de las características de esta problemática son los bajos ingresos, poca participación social, desempleo y, en unos casos, la vergüenza de aceptar que se está en condición de vulnerabilidad y necesita ayuda, pese a que posee una vivienda en un estrato alto.

De igual manera, este Proyecto de Acuerdo plantea la necesidad de incorporar la Estrategia Mundial de Nutrición Materna-infantil que ha determinado la Unicef para el periodo 2020-2030, el cual incluye el trabajo mancomunado en el sistema alimentario con los sistemas de:

- Protección social
- Salud
- Agua y saneamiento
- Educativo

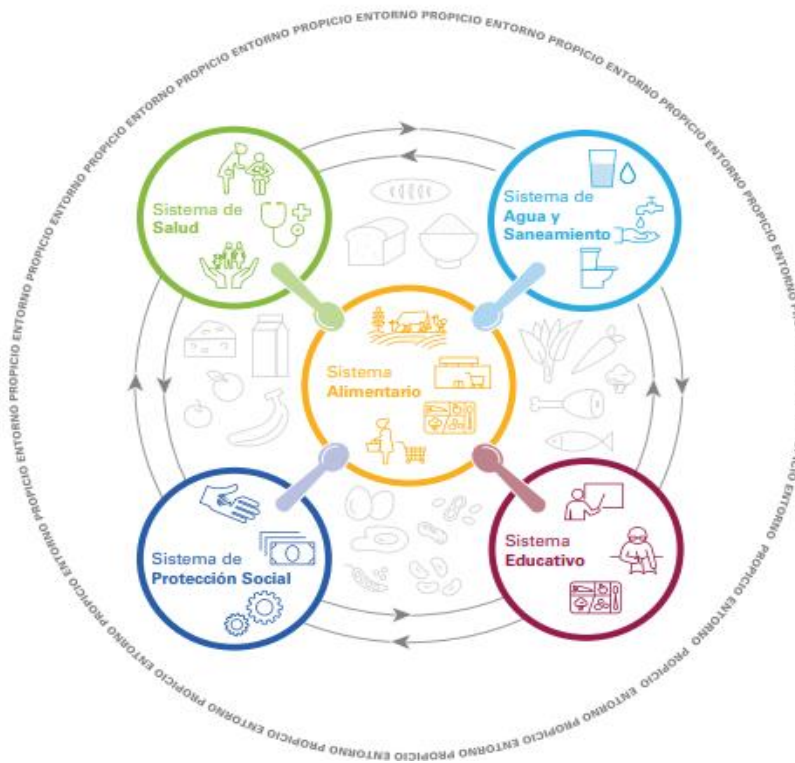
<sup>38</sup> <https://www.eltiempo.com/bogota/que-es-la-pobreza-oculta-y-a-quienes-afecta-396138>

Es decir, en Bogotá para lograr incorporar la estrategia que plantea Unicef se debe propender por la armonización interinstitucional con las secretarías de Salud, Integración Social, Educación, entre otras. En donde la Secretaría de Salud sería la cabeza de esta estrategia.

## MARCO CONCEPTUAL DE LOS DETERMINANTES DE LA NUTRICIÓN MATERNA-INFANTIL 2020-2030 UNICEF



## ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL POR UNICEF 2020-2030



### **MENSAJES CLAVES QUE DA UNICEF EN SU INFORME DEL ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2019<sup>39</sup>.**

- El hambre oculta es perjudicial tanto para los niños como para las mujeres. En los niños, la carencia de hierro reduce la capacidad de aprendizaje, mientras que, en las mujeres, la anemia por carencia de hierro aumenta el riesgo de muerte durante o poco después del parto.
- Al menos uno de cada dos niños menores de cinco años en el mundo sufre de hambre oculta, es decir, falta de vitaminas y otros nutrientes esenciales.
- La triple carga de la malnutrición –la desnutrición, el hambre oculta y el sobrepeso– amenaza la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños, los jóvenes, las economías y las naciones.
- A nivel mundial, al menos uno de cada tres niños menores de cinco años no crece de manera adecuada porque sufre una o más de las tres formas más visibles de malnutrición: retraso en el crecimiento, emaciación y sobrepeso.
- Las dietas deficientes provocan malnutrición en la primera infancia: el 44% de los niños de 6 a 23 meses de edad no consume frutas ni verduras y el 59% no consume huevos, leche, pescado ni carne.

<sup>39</sup> Informe Estado Mundial de Infancia de Unicef 2019. <https://www.Unicef.org/media/62486/file/Estado-mundial-de-la-infancia-2019.pdf>

- Sólo 1 de cada 5 niños de entre 6 y 23 meses de edad procedentes de los hogares más pobres y de las zonas rurales recibe la dieta mínima recomendada para un crecimiento saludable y el desarrollo adecuado del cerebro.
- Mejorar la nutrición infantil requiere que los sistemas alimentarios proporcionen alimentos nutritivos, seguros, asequibles y sostenibles para todos los niños.
- La nutrición infantil debe ocupar un lugar central en los sistemas alimentarios nacionales: satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los niños es crucial para lograr el desarrollo sostenible.

## LA MALNUTRICIÓN INFANTIL EN LA ACTUALIDAD

La desnutrición afecta gravemente la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños. Dos de sus principales manifestaciones son el retraso en el crecimiento y la emaciación. El concepto “retraso en el crecimiento” se usa para describir a los infantes que tienen una estatura demasiado reducida para su edad. Sin embargo, el retraso en el crecimiento es mucho más que la estatura, ya que en todas las comunidades hay niñas y niños más bajos y más altos. Se trata más bien de un claro indicio de que los infantes de una comunidad no se están desarrollando adecuadamente, ni física ni mentalmente, **en particular en los 1.000 primeros días**. El retraso en el crecimiento se describe no solo como el “mejor indicador general” del nivel de bienestar, sino también como un “reflejo fiel” de las desigualdades sociales.

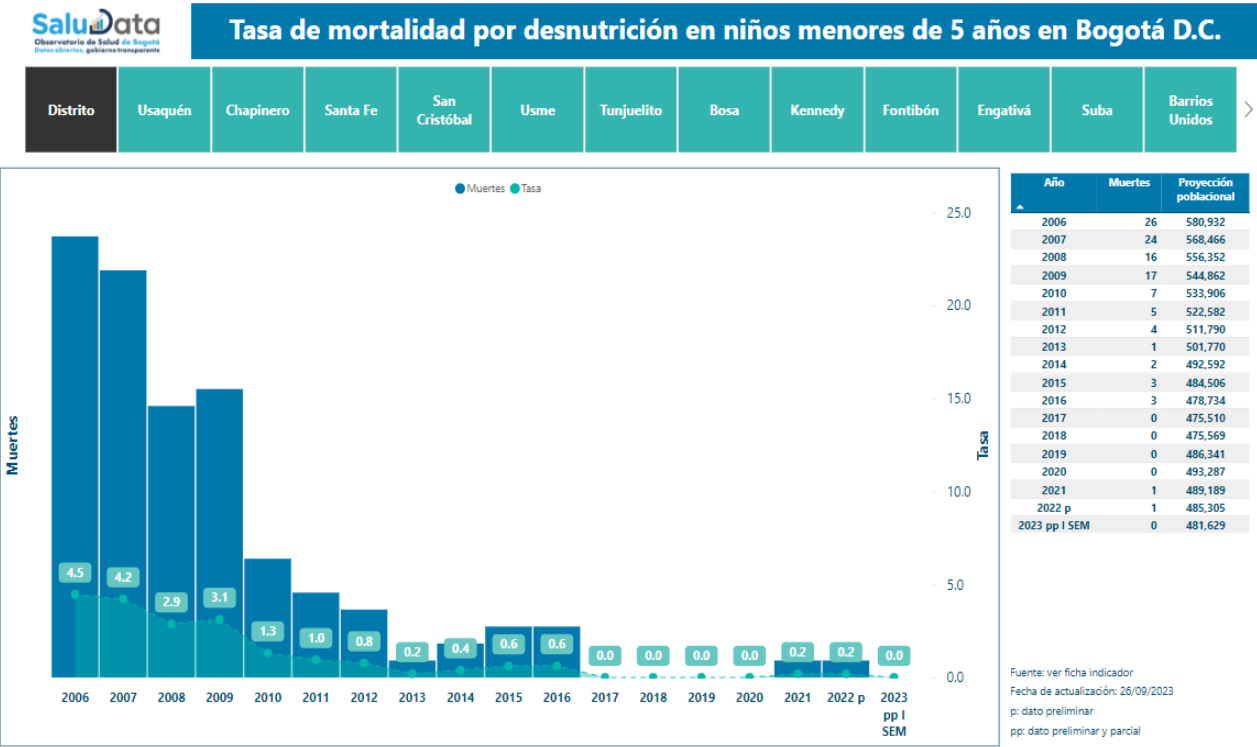


A partir de los 6 meses, los menores se benefician especialmente de los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos, que les aportan nutrientes esenciales y vitamina A, hierro, zinc y calcio, tan necesarios entre los 6 y los 23 meses de edad. Los alimentos de origen animal favorecen el

crecimiento, la actividad física y el rendimiento cognitivo. Además, tienen un alto contenido de diversos micronutrientes esenciales que son muy adecuados para los estómagos, más pequeños, de los niños. El retraso en el crecimiento durante la primera infancia se relaciona también con el bajo consumo de alimentos de origen animal; pero en las zonas rurales de bajos ingresos, estos alimentos son caros (en especial los huevos y los productos lácteos), y por tanto su consumo es menor. En todo el mundo, sólo dos de cada cinco menores reciben alimentos de origen animal.

Según datos del Observatorio de Nutrición Infantil, en lo corrido del 2022, **253 niños y niñas menores de cinco años han muerto por desnutrición**. Uno de los principales problemas en el país es la inseguridad alimentaria que se vive y que afecta, de forma contundente, a los niños y niñas de Colombia.

TASA MORTALIDAD NIÑOS MENORES 5 AÑOS EN BOGOTÁ



El Informe mundial sobre las crisis alimentarias (GRFC) 2024 confirma la enormidad del desafío que supone alcanzar el objetivo de acabar con el hambre para 2030. En 2023, casi 282 millones de personas (el 21,5 por ciento de la población analizada) en 59 países y territorios se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda que requerían asistencia alimentaria y de subsistencia urgente. Este aumento de 24 millones de personas desde 2022, se explica por la ampliación de la cobertura del análisis, así como por el deterioro de la inseguridad alimentaria aguda en algunos países, que supera las mejoras en otros.

La implementación del programa dirigido a las niñas, niños y madres gestantes contribuyera al desarrollo integral de la Primera Infancia y al bienestar de las familias en Bogotá, la construcción de una sociedad más equitativa y próspera.

#### 4. SUSTENTO JURÍDICO

Dentro del marco jurídico que soporta el presente proyecto se pueden mencionar los siguientes:

Desde el Marco Internacional y asumiendo las recomendaciones expuestas en el concepto de la Administración (Secretaría Distrital de Integración Social, del 12 de abril de 2016) se considera el siguiente:

- *“Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo de San Salvador, sólo en la medida en que los individuos dispones, acceden, consumen y alcanzan una utilización efectiva de los alimentos, pueden participar en igual de condiciones en los progresos económicos, sociales, culturales y políticos y pueden ejercer sus derechos civiles y políticos y sus deberes económicos y sociales”* (subrayado fuera del texto).

Desde el marco Constitucional, resaltamos los Artículos 13, 43, 44 y 334 sobre los derechos fundamentales de los niños:

- **“ARTÍCULO 13.** *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”* (subrayado fuera del texto)

- **“ARTÍCULO 43.** *La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.*

*El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”*

- **“ARTÍCULO 44.** *Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los*

*demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.*

*La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.*

*Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”*

- **“ARTÍCULO 334.** *Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 2011, desarrollado por la Ley 1695 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:*

*El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”*

Sobre las Leyes, normas y documentos que soportan y justifican las acciones en favor de los niños se mencionan las siguientes:

- **Ley 7 de 1979.** *"Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones".*

(...)

**“Artículo 1.** *La presente Ley tiene por objeto.*

- a. Formular principios fundamentales para la protección de la niñez;*
- b. Establecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar;*
- c. Reorganizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”*

*En consecuencia, a partir de su vigencia, todas las actividades vinculadas a la protección de la niñez y de la familia se regirán por las disposiciones de esta ley.*

**Artículo 2.** *La niñez constituye parte fundamental de toda política para el progreso social y el Estado debe brindar a los niños y a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en todas las esferas de la vida social y una formación integral y multifacética.*

**Artículo 3.** *Todo niño tiene derecho a participar de los programas del Estado y a la formación básica que se brinda a los colombianos, sin distinciones de raza, color de piel, sexo, religión, condición social o procedencia. Del mismo modo tiene derecho a ser educado en espíritu de paz y fraternidad universal.*

**Artículo 4.** *Todos los niños desde la concepción en matrimonio, o fuera de él, tienen derecho a los cuidados y asistencias especiales del estado. El Gobierno procurará la eliminación de toda forma de discriminación en el régimen jurídico de la familia y toda distinción inferiorizante entre los hijos.*

**Artículo 5.** *Todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad.*

*A esta garantía corresponde el deber del Estado de dar todas las oportunidades para asegurar una progenitura responsable.*

**Artículo 6.** *Todo niño tiene derecho a la educación, la asistencia y bienestar sociales. Corresponde al Estado asegurar el suministro de la Escuela, la nutrición escolar, la protección infantil, y en particular para los menores impedidos a quienes se deben cuidados especiales.*

**Artículo 7.** *Todo niño tiene derecho a la asistencia médica, al acceso a la cultura y al deporte, y vivir bajo un techo familiar. Así mismo tiene derecho el niño enfermo a su rehabilitación y a estar entre los primeros que reciban socorro en caso de desastre.*

**Artículo 8.** *Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En defecto de éstos y a falta de persona responsable, corresponde al Estado asumir la educación de los menores de acuerdo con su edad y aptitudes.*

**Artículo 9.** *El Estado debe velar por que la educación preescolar esté orientada a promover y estimular en los niños menores de 7 años el desarrollo psicomotor, la percepción sensible, su integración social y el aprestamiento para actividades escolares. En las zonas rurales y en las áreas marginadas de las ciudades, los programas en tal sentido deberán asociarse con el complemento alimenticio para la seguridad del menor.*

**Artículo 10.** *El Estado velará porque en el juzgamiento de hechos e infracciones imputables a menores, se tengan como fundamentos principales la prevención del delito y la corrección de la conducta, en busca de una atención integral que permita su rehabilitación y reincorporación a la vida social.*

**Artículo 11.** *El Estado impulsará la presencia dinámica de la comunidad en toda actividad donde estén de por medio los intereses de los niños.”*

- **Ley 12 de 1991.** CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”.

**“Artículo 24**

*1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.*

*2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:*



*a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;*

*b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;*

*c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;*

*d) Asegurar atención sanitaria prenatal y post-natal apropiada a las madres;*

*e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;*

*f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.*

*3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.*

*4. Los Estados partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”*

- **Ley 100 de 1993.** *"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".*

**“ARTÍCULO. 166.-Atención materno infantil.** *El plan obligatorio de salud para las mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control prenatal, la atención del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones relacionadas directamente con la lactancia.*

*El plan obligatorio de salud para los menores de un año cubrirá la educación, información y fomento de la salud, el fomento de la lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la prevención de la enfermedad, incluyendo inmunizaciones, la atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencia, incluidos los medicamentos esenciales; y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en la presente ley y sus reglamentos.*

*Además del plan obligatorio de salud, las mujeres en estado de embarazo y las madres de los niños menores de un año del régimen subsidiado recibirán un subsidio alimentario en la forma como lo determinen los planes y programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con cargo a éste.*

*PARAGRAFO. 1º-Para los efectos de la presente ley, entiéndase por subsidio alimentario la subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se entregan a la mujer gestante y a la madre del menor de un año y que permiten una dieta adecuada.*

*PARAGRAFO. 2º-El Gobierno Nacional organizará un programa especial de información y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural y a las adolescentes. Para el efecto se destinarán el 2% de los recursos anuales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 10% de los recursos a que se refiere el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 60 de 1993 y el porcentaje de la subcuenta de promoción del fondo de solidaridad y garantía que defina el Gobierno Nacional previa consideración del consejo nacional de seguridad social en salud. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de ejecución del programa. La parte del programa que se financie con los recursos del ICBF se ejecutará por este mismo instituto.”*

- **Ley 789 de 2002.** *“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.”*
- **Ley 1122 de 2007.** *“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”*
- **Ley 1098 de 2008.** *“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.”*

*“Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (...)”*

*Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.*

*La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.*

*Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia. (...)*

*Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. (...)*

**Artículo 41. Obligaciones del Estado.** *El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:*

*1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios. (...)*

*10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.  
(...)*

*15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes. (...)*

*31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.”*

- **Ley 1361 de 2009.** por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia.

*“Artículo 4. Derechos. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el ejercicio pleno de los siguientes derechos. (...)*

*17. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas.”*

- **Ley 1438 de 2011.** *“Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.*
- **Ley 1804 del 2 de agosto de 2016** *“Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones”.* Esta ha sido apoyada por las diferentes bancadas políticas y por los entes internacionales como Unicef, quien ha manifestado el apoyo a todas las acciones que *“buscan convertir en una política de Estado la estrategia de Cero a Siempre, para promover el desarrollo integral de niños y niñas en su primera infancia”.* Tal como es el caso de esta iniciativa que se presenta a la Corporación.

Según la Unicef, *“este programa busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños de cero a seis años, y para que se convierta en política de Estado”, “Consideramos que esta iniciativa corresponde al llamado de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Estado Colombiano en 1991, pues reconoce la necesidad de asegurar un desarrollo integral para todos los niños y las niñas en su primera infancia, bajo un enfoque diferencial y de derechos, que les permita su pleno desarrollo sin importar su contexto social”*, afirmó el representante de Unicef Colombia, Roberto De Bernardi.

Con base al artículo 2, de la mencionada Ley, la política de “*cero a siempre*” representa la postura y comprensión del Estado sobre la primera infancia el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.

Esta política “*se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición.*”

Esta misma Ley en el literal (e) del artículo 4 define la Ruta Integral de Atenciones (RIA) como “*la herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en el territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de las niñas y los niños desde la gestación, con la oferta de servicios disponible y acorde con características de las niñas y los niños en sus respectivos contextos. Como herramienta de gestión intersectorial la RIA convoca a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio.*”

Para efectos del seguimiento y garantizar el cumplimiento de lo estipulado en este Acuerdo, se articulará para que las entidades responsables implementen la Ruta Integral de Atenciones (RIA). Aquella deberá usarse para el seguimiento de los niños y de las madres gestantes.

- **Resolución 2121 de 2010.** “*Por la cual se adoptan los Patrones de Crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2006 y 2007 para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad y se dictan otras disposiciones.*”
- **Conpes 102 de 2006.** “*Red de protección social contra la extrema pobreza.*”
- **Conpes 109 de 2007.** Política pública de primera infancia “*Colombia por la primera infancia*”
- **Conpes 113 de 2007.** “*Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional*” (PSAN).
- **Conpes 27 de 2023** “*Política Pública de Primera Infancia, Infancia y adolescencia 2023 – 2033*”

**“2.3.1 Desnutrición** Una de las realizaciones de la primera infancia, infancia y adolescencia está relacionada con el goce del nivel más alto posible de salud y óptimas condiciones nutricionales. No obstante, los indicadores asociados a desnutrición y ausencia de seguridad alimentaria empeoraron al finalizar la década, en parte como consecuencia de la situación económica y social generada por el COVID-19. La prevalencia de desnutrición crónica y la prevalencia de desnutrición global experimentaron un incremento entre 2019 y 2020. El promedio histórico de la prevalencia de desnutrición crónica para el último quinquenio de la década fue de 12.86, lo que supone un incremento de casi 3 puntos en 2020 con respecto a este. Por su parte, el promedio histórico de la

*prevalencia de desnutrición global fue de 6,44, lo cual indica que en 2020 se presentó un incremento de 1 punto. No obstante, en 2021 señaló un leve descenso en la prevalencia de desnutrición crónica y global. Adicionalmente, indicadores como la prevalencia de bajo peso al nacer y la tasa de muerte por desnutrición aumentaron de 2020 a 2021, en 1,3 y 0,2 puntos respectivamente.”*  
(...)

*“Esta situación también se evidenció en los ejercicios de participación donde se reportaban problemáticas como aumento en la inseguridad alimentaria y nutricional y la persistencia de muertes en niñas, niños por causas evitables como la desnutrición aguda.”*

- **Objetivos de Desarrollo Sostenible Naciones Unidas.** Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Dentro de ellos, se destacan:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

- **Acuerdo 761 de 2020:** “*Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI*”.
  - **“Artículo 12. Metas Trazadoras.** *Las metas trazadoras del Plan Distrital de Desarrollo serán aquellas cuyo logro puede atribuirse a varios programas y metas, las cuales implican la alineación de esfuerzos entre los gobiernos distrital y nacional y el contexto macroeconómico. Metas 9,10,12*
  - Meta 9. A 2024 Llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica.*
  - Meta 10. A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal).*
  - Meta 12. A 2024 disminuir en 20% la Razón de Mortalidad Materna.*
  - **Artículo 15. Definición de Programas:** *Los Programas del Plan Distrital de Desarrollo se definen a continuación, agrupados según el propósito:*
    - Propósito 1:** *Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política. (...)*

**Programa 6.** *Sistema Distrital de Cuidado. Conjunto de servicios, regulaciones, políticas, y acciones técnicas e institucionales, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las personas y el funcionamiento de la sociedad y enmarcado en los estándares existentes de derechos humanos en materia de cuidado. (...)*

**Programa 10.** *Salud para la vida y el bienestar. Reducir la mortalidad materna promocionando la salud materna, perinatal y de aquellas poblaciones que cuentan con condiciones diferenciales o de vulnerabilidad. Se formula bajo criterios de inclusión, respetando cada contexto social y cultural, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada población y apuntando a una atención con acciones promocionales y preventivas más seguras, eficientes y equitativas. De la misma manera la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Salud adelantará acciones de articulación y gestión intersectorial con el gobierno nacional para promover la ruta de atención integral de salud en la lactancia y el cuidado de la mujer gestante.*

- **Artículo 60. Protección de la primera infancia y adolescencia.** *El presente Plan en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 incorpora dentro de los cinco (5) propósitos y los logros de ciudad la protección a los derechos de la primera infancia y la adolescencia y define los siguientes Programas: 1. Salud y bienestar para niñas y niños, 7. Prevención y atención de maternidad temprana.”*

- **Plan de Gobierno “Bogotá Camina Segura”**

Este proyecto de acuerdo está en consonancia con el Objetivo 3 “*Bogotá Confía en su Potencial*”; Programa 16: “*Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano*”

En ese sentido, la propuesta normativa se encuentra acorde con la Plan de Desarrollo presentado por la administración distrital aprobado por medio del Acuerdo 927 del año 2024 expedido por el Concejo de Bogotá.

## **5. COMPETENCIA DEL CONCEJO**

El Concejo de Bogotá es competente para dictar normas relacionadas con el objeto del proyecto de acuerdo, según las disposiciones constitucionales mencionadas que obligan al Estado a garantizar la salud de los niños, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud.

Asimismo, el Decreto Ley 1421 de 1993 en su Artículo 12, Numeral 1, 10 y 25 le concede al Concejo atribuciones para dictar normas.

*“Artículo 12: Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)*

10. *Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas. (....)*

25. *Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.”*

## **6. IMPACTO FISCAL**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el análisis del impacto fiscal en cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, así mismo, deberá estar incluido expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámites respectivas.

Sin embargo, es relevante mencionar, que, para el caso concreto, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

*“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesionó seriamente la autonomía del Legislativo”*

Con fundamento en los argumentos expuestos, ponemos a consideración del Honorable Concejo de la Ciudad la presente iniciativa.

Cordialmente,

**ROCÍO DUSSÁN PÉREZ**  
Concejal Bogotá D.C.

*Elaboró: Jacqueline Ramírez  
Revisó: Camilo Andrés Sotelo Ch.*

**PROYECTO DE ACUERDO NO 091 DE 2025****PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE DAN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA NUTRICIONAL A LA PRIMERA INFANCIA EN SUS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA Y A MADRES GESTANTES”*****EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el numeral 1, 10 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y,

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1. Objeto.** Establézcanse los lineamientos para la creación y puesta en marcha de un programa especial de asistencia nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 días de vida y a las madres gestantes, conforme a las estrategias y políticas nacionales e internacionales y al Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Fortaleciendo el desarrollo y crecimiento de los infantes de los sectores más vulnerables, desde su concepción hasta los dos años de edad.

**ARTÍCULO 2. Implementación.** La Administración Distrital, en cabeza de las secretarías de Planeación, Salud, Integración Social, Educación, Hábitat y la Mujer aunarán esfuerzos para implementar articuladamente el programa mencionado.

**Parágrafo 1:** La Administración Distrital implementará el programa teniendo en cuenta la caracterización de las madres gestantes y de acuerdo con los requerimientos técnicos y científicos del periodo de gestación.

**Parágrafo 2:** El Programa se ejecutará con quien ostente la patria potestad del menor.

**Parágrafo 3:** Para el seguimiento a la implementación del programa las entidades responsables aplicarán la Ruta Integral de Atenciones (RIA), de acuerdo con el literal (e) del artículo 4 de la Ley 1804 de 2016 y el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia emitido por el ICBF.

**ARTÍCULO 3. Procedimientos.** Las entidades encargadas establecerán los procedimientos de ejecución, seguimiento y control del Programa.

**Parágrafo 1.** La empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá brindará un servicio óptimo en los hogares objeto del programa.

**ARTÍCULO 4. Formación y capacitación.** Las entidades encargadas estimularán e impulsarán programas de formación, capacitación e información con el fin de dar a conocer a las madres, padres y cuidadores la importancia del desarrollo integral de los niños y niñas durante los primeros 1000 días de vida.



**Parágrafo 1. Formación y capacitación.** Se realizará mediante las modalidades instruccionales de atención para el desarrollo y el cuidado infantil establecidos por las entidades competentes.

**Parágrafo 2. Fortalecimiento de acciones en seguimiento nutricional.** En el marco de las acciones adelantadas en el acompañamiento a el proceso de seguimiento nutricional, se debe fortalecer y contribuir al logro progresivo del derecho humano a la alimentación adecuada como eventos de interés en salud pública, priorizando la desnutrición aguda en menores de dos años.

**Parágrafo 3.** Contar con un sistema de Información de Vigilancia Alimentario y Nutricional – SISVAN actualizado, que permita anticipar riesgos de manera efectiva.

**ARTÍCULO 5.** Este programa se articulará de manera intersectorial con programas similares en ejecución y con las estrategias del Plan Distrital de Desarrollo vigente.

**ARTÍCULO 6. Vigencia.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

### **PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D. C., a los \_\_\_ días del mes de \_ de dos mil veinte cinco (2025).

*Elaboró: Jacqueline Ramírez*  
*Revisó: Camilo Andrés Sotelo Ch.*

**PROYECTO DE ACUERDO NO 092 DE 2025****PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA “EXPO RESTREPO” COMO UN EVENTO INSIGNIA DEL SECTOR CUERO, CALZADO, MARROQUINERÍA Y AFINES EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”****1. OBJETO**

El presente Acuerdo tiene por objeto institucionalizar la “Expo Restrepo” como un evento anual de interés Distrital, orientado a la promoción y fortalecimiento del sector cuero, calzado, marroquinería y afines, representativo del barrio Restrepo ubicado en la localidad de Antonio Nariño. Este evento se realizará anualmente en el Parque de la 93 durante el mes de noviembre, consolidándose como un espacio para la visibilización, comercialización e impulso del desarrollo económico y cultural de este sector tradicional.

**2. JUSTIFICACIÓN****2.1 Contexto del sector del cuero, calzado y marroquinería.**

El sector del cuero, calzado y marroquinería engloba la actividad industrial relacionada con el tratamiento y transformación del cuero, así como la manufactura de una amplia variedad de productos elaborados a partir de este insumo, incluyendo la producción de calzado en cuero y otros materiales. Este sector abarca un conjunto diverso de actividades que van desde la obtención y procesamiento del cuero, pasando por el diseño y fabricación de productos de marroquinería y calzado, hasta su comercialización y distribución en los diferentes mercados.

En términos económicos, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector refleja su alta volatilidad, característica propia de una industria que depende en gran medida de la fluctuación de la demanda por los productos que ofrece. Esta demanda está estrechamente vinculada a factores como el nivel de ingresos, por no ser un bien básico, así como las tendencias de moda y los gustos cambiantes de los consumidores. Adicionalmente, el sector se ve afectado por factores externos, como la competencia de productos importados de bajo costo y la presencia de productos de contrabando, que impactan tanto en los precios como en la competitividad de la producción nacional.

La naturaleza de esta volatilidad exige una constante adaptación a las dinámicas del mercado, lo que representa tanto un reto como una oportunidad para las empresas del sector. La capacidad de innovar en diseño, mejorar los procesos productivos y diversificar los mercados de exportación son factores clave para mitigar los efectos de estas fluctuaciones y fomentar el crecimiento sostenible de la industria.

2.2. Valor agregado de la industria manufacturera del cuero.

Según datos del DANE<sup>40</sup>, en el tercer trimestre de 2024, el valor agregado de las industrias manufactureras registró una disminución del 1,3% en su serie original, en comparación con el mismo periodo de 2023. Esta tendencia se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): la fabricación de productos textiles, la confección de prendas de vestir, el curtido y recurtido de cueros, la fabricación de calzado, la producción de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y productos similares, así como la fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, y el adobo y teñido de pieles, que en conjunto disminuyeron un 1,5%.

Tabla 4. Industrias manufactureras  
Tasas de crecimiento en volumen<sup>1</sup>  
Tercer trimestre 2024<sup>Pr</sup>

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2024 <sup>Pr</sup> -III / 2023 <sup>Pr</sup> -III	2024 <sup>Pr</sup> / 2023 <sup>Pr</sup>	2024 <sup>Pr</sup> -III / 2024 <sup>Pr</sup> -II
Elaboración de productos alimenticios <sup>2</sup>	0,3	-2,4	2,7
Fabricación de productos textiles <sup>3</sup>	-1,5	-5,5	-1,2
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles <sup>4</sup>	-1,1	-0,6	-3,0
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles <sup>5</sup>	-3,3	-3,5	-1,0
Fabricación de productos metalúrgicos básicos <sup>6</sup>	0,6	-1,6	-2,0
Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras	-0,3	-1,6	-2,3
<b>Industrias manufactureras</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,2</b>

Fuente: DANE, PIB\_T

<sup>Pr</sup> preliminar

<sup>1</sup>Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

<sup>2</sup>Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco.

<sup>3</sup>Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles.

<sup>4</sup>Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales.

<sup>5</sup>Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos.

<sup>6</sup>

Asimismo, según el DANE en su Encuesta Mensual de Comercio (EMC)<sup>41</sup>, para el periodo de enero a septiembre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, las mayores contribuciones negativas a las ventas se presentó en las empresas dedicadas a la venta de prendas de vestir y sus accesorios; calzado y

<sup>40</sup> <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2024.pdf>

<sup>41</sup> <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc>

artículos sucedáneos al cuero en establecimientos especializados con una variación negativa de 11,4%, puntos porcentuales, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

Tabla 5. Variación porcentual y contribución año corrido de las ventas reales del comercio minorista según actividad económica  
Total nacional  
Enero - septiembre 2024 / enero - septiembre 2023<sup>Pr</sup>

Actividades económicas	Enero - septiembre 2024 / enero - septiembre 2023	
	Variación %	Contribución PP
Total comercio minorista y vehículos	-0,6	-0,6
Total comercio minorista y vehículos (excepto grupo CIIU 473*)	-0,4	
4711 -472. No especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y especializados en la venta de alimentos.	0,3	0,1
4719. No especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco.	8,8	0,7
4771 - 4772. Prendas de vestir y sus accesorios; Calzado y artículos sucedáneos al cuero en establecimientos especializados.	-11,4	-0,6
4530. Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	-9,7	-0,4
4731. Comercio al por menor de combustible para automotores.	-1,0	-0,2
4511. Vehículos automotores nuevos	-0,7	-0,1
475. Otros enseres domésticos en establecimientos especializados.	-1,5	-0,1
474. Equipos de informática y comunicaciones en establecimientos especializados.	-7,9	-0,1
476. Artículos culturales y de entretenimiento en establecimientos especializados.	-7,5	-0,1
4732. Comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores.	-10,2	0,0
4774. Otros productos nuevos en establecimientos especializados.	-0,4	0,0
4773. Productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador	1,7	0,1
4541. Motocicletas y de sus partes, piezas y sus accesorios.	9,3	0,1

Fuente: DANE – EMC  
Pr: preliminar  
PP: puntos porcentuales

3.3. Panorama y Desafíos del Sector Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia: Impacto Económico y Competitividad

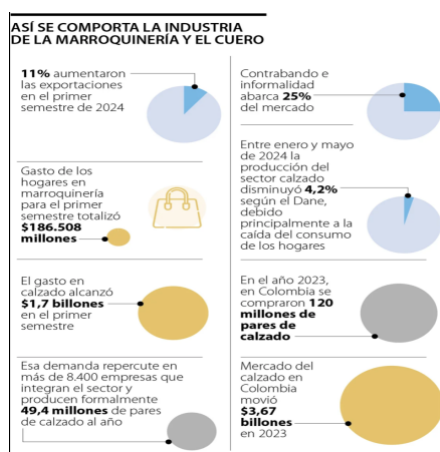
El sector del cuero, calzado y marroquinería en Colombia constituye un motor clave para la economía nacional, con un impacto significativo en la generación de empleo, el comercio interno y la competitividad internacional. En la actualidad, más de **8.400 empresas** formales integran esta industria, con una producción anual de **49,4 millones de pares de calzado**. Además, genera alrededor de **130.000 empleos directos**, aunque esta cifra ha disminuido desde 2017, cuando se reportaban **170.000 puestos de trabajo**.

En términos de consumo, en 2023, los colombianos compraron más de **120 millones de pares de zapatos**, lo que equivale a un promedio de dos pares por persona. Durante el primer semestre de 2024, el gasto en calzado ascendió a **\$1,7 billones**, mientras que el de marroquinería alcanzó los **\$186.508 millones**. Estos datos reflejan la importancia del sector en la dinámica económica de los hogares colombianos.

A pesar de estas cifras positivas, el sector enfrenta importantes retos estructurales. Entre enero y mayo de 2024, la producción de calzado disminuyó un **4,2%**, afectada por la caída del consumo de los hogares y el ingreso de calzado de contrabando, el cual abarca el **25% del mercado**. Esta competencia desleal, proveniente en su mayoría de China, genera un entorno de alta informalidad y precios reducidos que afectan la sostenibilidad de los productores locales.

La importancia del sector se extiende más allá de las cifras; contribuye al desarrollo de regiones como Bogotá, Cundinamarca, Santander y Antioquia, que lideran la producción en el país. Sin embargo, estas regiones han registrado caídas significativas en sus indicadores: Bogotá, por ejemplo, disminuyó su producción en un **11,2%**.<sup>42</sup>

A nivel internacional, el sector ha mostrado resiliencia, con un aumento del **11%** en las exportaciones de calzado durante 2024. Este desempeño refleja los esfuerzos por fortalecer la competitividad global y aprovechar el potencial de la industria, consolidándola como un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Colombia.<sup>43</sup>



**Fuente:** Cámara de Comercio de Bogotá.

<sup>42</sup> <https://www.portafolio.co/negocios/industrias/la-informalidad-es-el-principal-problema-del-sector-acicam-608903>

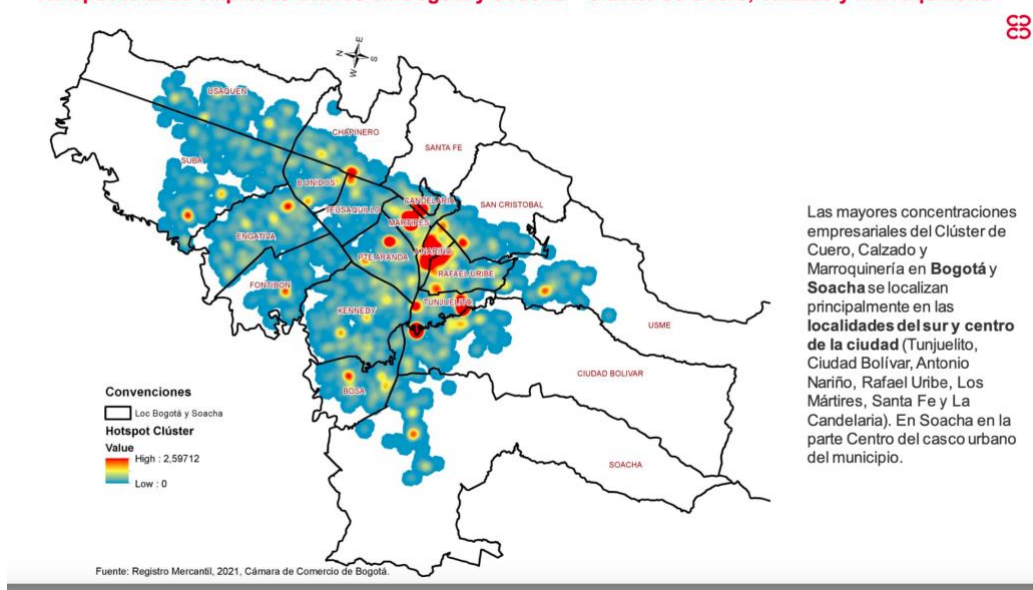
<sup>43</sup> <https://www.larepublica.co/empresas/cada-ano-se-calcula-que-un-colombiano-compra-en-promedio-dos-pares-de-zapatos-3909844>

### 3.4. Relevancia del Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca.

En mayo de 2022, la Cámara de Comercio de Bogotá, realizó un estudio en el que estableció los mapas del clúster de cuero, calzado y marroquinería en Bogotá y Cundinamarca<sup>44</sup>. El documento revela una dinámica empresarial robusta en el sector con un total de 4,962 empresas activas en Bogotá y Soacha. Esta concentración empresarial se caracteriza por una marcada presencia en las localidades del sur y centro de la ciudad, destacando zonas como Tunjuelito, Ciudad Bolívar, **Antonio Nariño**, Rafael Uribe, Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria.

El barrio Restrepo, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, emerge como un punto estratégico en este ecosistema empresarial concentrando la mayor producción de cuero, calzado y marroquinería de la ciudad. Específicamente, las áreas de Restrepo Occidental y Restrepo son identificadas como hotspots de actividad económica, concentrando un número significativo de empresas dedicadas al procesamiento y transformación del cuero, así como a la producción de calzado y artículos de marroquinería.

Hotspot total de empresas activas en Bogotá y Soacha – Clúster de Cuero, calzado y marroquinería



A nivel territorial, el estudio registra 5,374 empresas activas en las localidades de Bogotá y municipios de Cundinamarca, complementadas por 411 empresas adicionales en otros municipios. **Esta distribución refleja la importancia del sector como motor económico regional, con el barrio Restrepo posicionándose como un núcleo fundamental de esta industria.**

<sup>44</sup> <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/items/bacb5cee-0b74-41af-8223-f1bf31eef1e3>

La concentración empresarial en esta zona no es casual, sino resultado de una dinámica histórica de especialización y desarrollo económico local, donde la tradición del trabajo con cuero se ha consolidado como un elemento distintivo del tejido productivo bogotano.

### **3.5. Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería en la Localidad de Antonio Nariño: Barrio Restrepo.**

La actividad comercial predominante en la localidad de Antonio Nariño es el comercio al por menor de una amplia variedad de productos. En particular, el barrio Restrepo se destaca por la comercialización de prendas de vestir, cuero, calzado, marroquinería y sus derivados. Esta zona alberga una notable concentración de establecimientos comerciales, microempresas familiares y pequeñas empresas, muchas de las cuales están dedicadas principalmente a la producción de estos artículos. Aunque existe poca información oficial sobre el comportamiento económico del sector, el informe de caracterización territorial *"Restrepo Social e Incluyente"*<sup>45</sup>, elaborado por la Secretaría de Integración Social, y el Plan Local de Gestión de Riesgo 2023<sup>46</sup>, desarrollado por el IDIGER, evaluaron las actividades económicas de la zona destacando lo siguiente:

El sector más relevante es el de prendas de vestir, cuero y calzado, que concentra aproximadamente el 40% de las empresas comerciales del barrio Restrepo. En menor medida, también se destacan los comercios de autopartes, accesorios y artículos de lujo para vehículos, especialmente en los barrios Restrepo y La Fragueta. Asimismo, se observa una importante presencia de establecimientos dedicados a la venta de alimentos, bebidas y tabaco, distribuidos por toda la localidad, así como de productos de consumo doméstico, textiles y artículos de cuero y calzado en tiendas especializadas, principalmente en los barrios Restrepo y Policarpa.

En cuanto a la actividad industrial, en 2004 se registraron en la localidad 1.143 industrias, la mayoría de ellas microempresas. Las principales actividades industriales de la zona están relacionadas con el curtido y preparado de cueros, la fabricación de calzado, la producción de artículos de viaje como maletas y bolsos, así como productos de talabartería y guarnicionería. Estas actividades están especialmente concentradas en el sector La Valvanera del barrio Restrepo. La fabricación de prendas de vestir, a excepción de las de piel, ocupa el segundo lugar en la industria local.

---

45

[https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1\\_entidad/gsi/15\\_antonio\\_narino\\_lectura\\_de\\_realidades\\_restrepo\\_social.pdf](https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/15_antonio_narino_lectura_de_realidades_restrepo_social.pdf)

46

<https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1442764/Identificaci%C3%B3n+y+priorizaci%C3%B3n+.pdf/d0dc38d4-596b-4011-b11e-7e332b652f61>

La distribución de la actividad económica en la localidad es la siguiente: el 58,3% corresponde al comercio, el 12,5% a la industria, el 27,3% a los servicios, y el 9% restante a otras actividades. En la UPZ Restrepo, destacan especialmente la metalmecánica, la industria del cuero y el comercio.

El comercio en Antonio Nariño se caracteriza por una notable presencia de la venta de ropa (29,7%), seguido del calzado (22,7%), adornos y joyas (9,9%), material para la construcción y ferretería (5%), papelería (3,9%), repuestos (1%) y otros productos (27,8%). De este comercio, el 60,4% se realiza al detal, el 1,8% al por mayor y el 37,8% en ambas modalidades.

En términos de tamaño empresarial, la localidad se caracteriza principalmente por la presencia de microempresas, que representan el 92% del total de las empresas registradas. De las 4.527 empresas establecidas en Antonio Nariño, la mayoría se encuentra cerca de los sectores tradicionales de los barrios Restrepo, Restrepo Occidental, Ciudad Jardín Sur, San Antonio de Padua, Valvanera y Santander Sur.

En el sector industrial, la mayoría de las empresas se concentran en actividades de curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado, producción de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, así como productos de talabartería y guarnicionería. El barrio La Valvanera alberga aproximadamente el 23% de estas empresas.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, los tres principales sectores generadores de empleo en la localidad son la venta de calzado, la venta de ropa y los restaurantes, que en conjunto suman 2.951 trabajadores, lo que representa el 34% del total de los trabajadores informales en la zona. Es importante señalar que la informalidad laboral no es una opción voluntaria, sino una respuesta a la incapacidad del sector formal para absorber la creciente demanda de empleo.

Del total de empresas en Antonio Nariño, el 79% son de personas naturales y el 21% de personas jurídicas. Además, se han identificado 2.880 posibles empresas que podrían integrarse a las cadenas productivas de cuero y calzado, productos alimenticios, textil y confección, construcción e ingeniería civil.

En síntesis, la institucionalización de la “**Expo Restrepo**” constituye una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo local del sector del cuero, calzado y marroquinería, un eje productivo tradicional de Bogotá y la región. Este evento puede convertirse en una plataforma clave para fortalecer la competitividad de las empresas locales, impulsar la formalización y visibilizar el talento y la innovación de los empresarios del barrio Restrepo, epicentro histórico de esta industria. Además, fomenta la generación de redes de negocio, la atracción de nuevos mercados y la valorización del patrimonio cultural asociado a esta actividad económica.

Como instrumento de desarrollo territorial, la Expo Restrepo puede contribuir a mitigar desafíos estructurales del sector, como la informalidad y la competencia desleal, mientras posiciona a la localidad de Antonio Nariño como un referente nacional e internacional en la producción de cuero y marroquinería. Por tanto, institucionalizar este espacio es un paso crucial para dinamizar la economía local, proteger los empleos



generados por este sector y promover la sostenibilidad y resiliencia de un oficio que define la identidad productiva de Bogotá.

### 3. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA

**ARTÍCULO 1.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Subrayado fuera de texto)

**ARTÍCULO 2o.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

**ARTÍCULO 25.** El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

**ARTÍCULO 333.** La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

#### LEYES

**LEY 590 DE 2000:** *“Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa”*

*Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:*

- a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos;*
- b) Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes;*
- c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas;*
- d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales;*
- e) Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas;*
- f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas;*
- g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas;*
- h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales,*
- i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes;*
- j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas.*

**LEY 1014 DE 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”.**

*Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene por objeto:*

- a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley;*

*b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; (...)*

*d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo.*

**LEY 2069 DE 2020:** “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.”

**Artículo 1°. Objeto.** *La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.*

*Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo con las realidades socioeconómicas de cada región.*

## **DOCUMENTOS CONPES:**

**CONPES 4011 de 2020:** *Política Nacional de Emprendimiento.* Mediante este documento CONPES se busca aunar esfuerzos para crear una política pública que conecte la política social para la generación de ingresos con la política de desarrollo empresarial para la generación de riqueza, con el fin de reactivar el crecimiento económico y aumentar la productividad del país.

**CONPES D.C. 25 de 2023:** “*Política Pública de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico*”. Mediante este documento CONPES D.C., se busca promover el aumento de la productividad de las unidades productivas por medio de la potencialización y aprovechamiento de los beneficios de las aglomeraciones económicas, de manera que se amplíe la generación de empleo y de ingresos para las personas y, en ese sentido, el desarrollo económico de los ciudadanos.

## **5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**

El Cabildo Distrital es competente para estudiar la presente iniciativa con base en las normas que a continuación se citan:

## **CONSTITUCIÓN POLÍTICA**

**“ARTÍCULO 313.** *Corresponde a los concejos:*

*1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (...)”*

## **DECRETO LEY 1421 de 1993**

El Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con los artículos 6 y 12:

**“ARTÍCULO 6: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y VEEDURÍA CIUDADANA.** *Las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local.*

*De conformidad con lo que disponga la ley, el Concejo dictará las normas necesarias para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria y estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación administrativas. (subrayado fuera de texto original) (...)*

**ARTÍCULO 12: ATRIBUCIONES.** *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

*1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)”*

## **ACUERDO No. 741 DE 2019**

**“ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES.** *El Concejo de Bogotá, D.C., ejerce las atribuciones, funciones y competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico para Bogotá, D.C., las leyes especiales, así como las conferidas a las Asambleas Departamentales en lo que fuere compatible con su régimen especial. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.*

## **6. IMPACTO FISCAL**

De conformidad con el Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el Proyecto de Acuerdo en estudio no tiene un impacto fiscal que requiera una modificación al marco fiscal de mediano plazo. Los gastos derivados de esta iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades competentes.

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

En el caso específico, es importante tener en cuenta la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, que subraya que el impacto fiscal de las normas no debe ser un obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa de la siguiente manera:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

En cumplimiento de esta norma, consideramos que los recursos necesarios para implementar esta iniciativa ya están contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital “*Bogotá Camina Segura*”, adoptado mediante el Acuerdo 927 de 2024, específicamente en su objetivo estratégico 3: “Bogotá confía en su potencial”, a través de los programas 3.20 “Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente” y 3.19 “Desarrollo empresarial, productividad y empleo”.

Además, dentro de las políticas sectoriales vigentes, se encuentra la *Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico*, regulada por el Decreto 064 de 2011. Esta política pública busca promover el crecimiento económico y la competitividad de Bogotá, así como el desarrollo de alternativas productivas, el fortalecimiento empresarial, la generación de ingresos y oportunidades de empleo, y la

promoción de las capacidades y potencialidades de las personas. Bajo su eje temático “Sectores Líderes y Apuestas Productivas”, la Secretaría de Desarrollo Económico asignará los recursos necesarios para dar cumplimiento a esta política pública con una perspectiva de largo plazo hasta el año 2038.

**SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE**

Concejal de Bogotá  
Partido Político MIRA

**FABIÁN ANDRÉS PUENTES**

Concejal de Bogotá  
Partido Político MIRA

**PROYECTO DE ACUERDO NO 092 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**  
**PROYECTO DE ACUERDO N° DE 2025**

**“Por medio del cual se institucionaliza la “Expo Restrepo” como un evento insignia del sector cuero, calzado, marroquinería y afines del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.”**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 313 y 322 de la Constitución Política y el numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los artículos 5 y 338 de la Ley 1341 de 2009

**A C U E R D A:**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** El presente Acuerdo tiene por objeto Institucionalizar la “Expo Restrepo” como un evento insignia del sector cuero, calzado, marroquinería y afines en el Distrito Capital, el cual se realizará anualmente en el Parque de la 93 durante el mes de noviembre.

**ARTÍCULO 2. OBJETIVOS.** La feria “Expo Restrepo” tendrá como objetivos:

1. Promover el desarrollo económico de los empresarios del sector cuero, calzado, marroquinería y afines, con énfasis en su visibilización y fortalecimiento.
2. Generar espacios de comercialización e innovación para los productos de este sector estratégico.
3. Difundir la riqueza cultural y artesanal asociada a estas actividades, fortaleciendo su tradición y posicionamiento a nivel distrital y nacional.

**ARTÍCULO 3. COORDINACIÓN.** La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico será la entidad responsable de la coordinación, planificación y promoción de la “Expo Restrepo”, como un evento insignia del sector cuero, calzado, marroquinería y afines.

Esta labor se realizará en articulación con:

1. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
2. La Secretaría de Gobierno
3. La Alcaldía Local de Antonio Nariño
4. Las asociaciones de comerciantes y emprendedores de la localidad de Antonio Nariño, en especial del barrio Restrepo
5. Demás instituciones públicas y privadas que promuevan el desarrollo económico del sector

**ARTÍCULO 4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.** La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en conjunto con las entidades participantes, deberá presentar un informe anual al Concejo de Bogotá sobre los resultados, impactos, beneficios para los comerciantes y retos del evento “Expo Restrepo”, con el fin de garantizar su sostenibilidad y mejora continua.

**ARTÍCULO 5. FINANCIACIÓN.** La administración distrital asignará los recursos necesarios para la realización de la “Expo Restrepo” en el marco del presupuesto general del Distrito Capital, sin perjuicio de la posibilidad de gestionar alianzas público-privadas y recursos de cooperación nacional e internacional.

**ARTÍCULO 6. VIGENCIA:** El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

**PROYECTO DE ACUERDO NO 093 DE 2025****PRIMER DEBATE**

**“POR EL CUAL SE EXALTA LA TRAYECTORIA DE JAIME GARZÓN Y SU IMPACTO EN LA CULTURA DE LA CIUDAD, CON EL FIN DE APORTAR AL DEBER QUE TIENE EL DISTRITO CAPITAL PARA LA RECUPERACIÓN, EL FORTALECIMIENTO, LA PROMOCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto rendir homenaje a Jaime Garzón, Bogotano quien en vida y mediante su trabajo impactó en la cultura, la política y la identidad capitalina. Igualmente, se pretende aportar al deber de memoria que tiene el Estado por cuanto Jaime Garzón fue asesinado y este hecho fue declarado un crimen de lesa humanidad, por lo que es necesario desde el Concejo de Bogotá D.C. conservar el recuerdo de forma tangible de este ilustre ciudadano y establecer medidas que aporten a la memoria del país desde una dimensión colectiva para evitar que en el futuro estos hechos vuelvan a reproducirse.

**II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.****CONSTITUCIÓN POLÍTICA**

**ARTICULO 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...).

**ARTICULO 20.** Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación (...)

**ARTICULO 70.** El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

**ARTICULO 73.** La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.



**LEY 975 DE 2005**, *Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.*

**ARTÍCULO 8. DERECHO A LA REPARACIÓN.** El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

(...)

**Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica**, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

**ARTÍCULO 56. DEBER DE MEMORIA.** El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.

**LEY 1448 DE 2011**, *Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.*

**ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL.** Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley.

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y **simbólica**. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

**ARTÍCULO 143. DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO.** El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado

que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan **avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria** como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

**ACUERDO DISTRITAL 370 DE 2009**, *Por medio del cual se establecen en el Distrito Capital, los lineamientos y criterios para la formulación de la Política Pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.*

**ARTÍCULO 2. De la política pública.** La política pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tiene como objeto diseñar e implementar un modelo de atención integral que les garantice el restablecimiento de sus derechos, como elemento fundamental para el proceso de reconciliación nacional.

**ACUERDO 784 DE 2020**, *Por el cual se establecen medidas para la recuperación, el fortalecimiento y la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan en otras disposiciones.*

**ARTÍCULO 6.- Recorridos y apropiación colectiva de los ejes de la memoria y la paz en Bogotá.** La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en coordinación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, diseñarán una estrategia de recorridos guiados a los ejes de la memoria y la paz de Bogotá, en donde se informe a la ciudadanía sobre el valor histórico y la importancia de dichos lugares en la construcción colectiva de una cultura de paz y reconciliación.

**Parágrafo.** Respecto de estos mismos lugares, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá generará una herramienta de georreferenciación por medios físicos y virtuales que permita el amplio acceso de la ciudadanía a información sobre el vínculo de estos lugares con hechos históricos de relevancia para la construcción colectiva de memoria y una cultura de paz y reconciliación.

**DECRETO 462 DE 2011**, *"Por el cual se ordena la implementación del Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, y se dictan otras disposiciones"*

**Artículo 10°. DERECHO A LA VERDAD Y MEMORIA HISTÓRICA.** Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos, las circunstancias y los motivos que llevaron a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, y la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Al efecto, la Administración Distrital propiciará las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en

ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad y a la paz de los que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.

**Parágrafo.** En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política.

## JURISPRUDENCIA.

El siguiente argumento es tomado del proyecto de Acuerdo Distrital No. 222 DE 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA MEMORIA DE DIEGO FELIPE BECERRA LIZARAZO Q.E.P.D. Y SE DICTAN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS”:

*“Es importante resaltar que, el derecho a la memoria es parte integrante de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y se constituye en un requisito fundamental para lograr la reconciliación en la sociedad. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos. En la sentencia T - 418 de 2015 afirmó categóricamente que:*

*“Las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte. En este sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.*

*Como también en la sentencia T-564 de 2016 consideró que:*

*“La dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos (...)”*

El llamado derecho a la memoria también es descrito por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-653 de 2012:

*“El derecho a la memoria ha sido estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclarando su alcance. En su jurisprudencia –como en el caso de los 19 Comerciantes– ha ordenado a los Estados adoptar medidas para la preservación de la memoria de las víctimas como parte de la reparación y también ha ordenado medidas para la preservación de la memoria histórica. La Corte Interamericana ha distinguido esas dos dimensiones del derecho: por un lado, aquella cuya la finalidad es contribuir a resarcir a los individuos afectados con la violación de los derechos humanos y, por otro, la que **busca la no repetición de tales violaciones**. Hay, entonces, un aspecto individual y otro colectivo de este derecho. Esta diferencia quedó establecida claramente, por ejemplo, en el caso Anzualdo Castro vs. Perú, en el que consideró que la construcción del Museo de la Memoria, si bien era significativa en la edificación de la memoria histórica y como medida de no repetición, no lo era como medida individual de satisfacción y se ordenaron otras de carácter individual. **En su dimensión colectiva, el ejercicio de la confrontación con el pasado debe estar llamado a superar memorias generales irracionales que justifican actos contrarios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario**. Debe contribuir a salvar tópicos como “algo habrán hecho” o “fue legítimo en medio de esta guerra”, en los cuales las víctimas terminan siendo culpables de su propia desgracia o, en el mejor de los casos, efectos colaterales que se justifican en el contexto del conflicto. Por otro lado, la memoria de la víctima debe servir para evitar, parafraseando a Theodor Adorno, que los muertos hayan de ser también timados en lo único que nuestra inconciencia les puede regalar: la memoria. Ante los graves hechos generados por la violación de derechos humanos, una parte de la reparación debe consistir en que a las víctimas se les reconozca como tal; en su individualidad no deben pasar a la posteridad como perpetradores sino como receptores de graves ofensas, personas inocentes que perdieron su vida, sus familias, sus tierras o sus proyectos de vida por cuenta del injusto trato de otros.”* (resaltado fuera del original)

### III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

Es importante recordar a Jaime Garzón como un miembro de la sociedad Bogotana que ha impactado la vida de sus habitantes e invitado a reflexionar sobre los problemas del país. Si bien la obra de Garzón se aprecia en todo el territorio nacional, indiscutiblemente en Bogotá se sitúa su mayor legado, al ser esta la ciudad donde nació, se educó, ejerció la docencia, el derecho, participó en política durante la campaña a la Alcaldía de Andrés Pastrana Arango, fue alcalde menor de Sumapaz (Escobar Roldan, 2014), cargo del cual fue destituido pero posteriormente reintegrado por orden del Consejo de Estado que determinó que Garzón sí había cumplido con su deber y que por lo tanto su despido no era justo («GARZÓN, AL GOBIERNO POR UN DÍA», 1999). También participó en el proceso de traducción a lenguas indígenas de la Constitución Política de 1991 bajo la presidencia de Cesar Gaviria, desarrollo su trabajo como periodista, así como humorista político para programas de televisión. Finalmente, es en esta ciudad donde desafortunadamente es asesinado, y llorado por su familiares y ciudadanos que masivamente acompañaron su féretro.

La influencia de Jaime Garzón se encuentra vigente en Bogotá luego de 24 años de su partida. Desde los múltiples murales que recuerdan su imagen en varios puntos de la ciudad, la estatua que se levanta en el lugar donde fue asesinado, colegios que llevan su nombre e incluso hasta en la gastronomía capitalina existe un plato llamado el “arroz Garzón” (del cual él mismo fue autor) en el restaurante El Patio, ubicado en el tradicional barrio bogotano de La Macarena («Al interior del restaurante favorito de Jaime Garzón», 2014).

Dentro del Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, podemos encontrar los siguientes aspectos relacionados con la construcción y conservación de la memoria local que contribuyan a la reconciliación y la comprensión sobre el conflicto armado en Bogotá: **El programa 13. “Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde**

**todos puedan volver a empezar”**, buscará fortalecer el esclarecimiento, la construcción de memoria histórica y la reflexión sobre las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH ocurridos en la ciudad en el marco del conflicto. Igualmente, este Plan Distrital de Desarrollo contiene dentro de sus **metas de producto, la numero 128**, que busca “Desarrollar 81 procesos de investigación memoria y verdad como aporte a la reconciliación en Bogotá”. Consecuentemente, este Proyecto de Acuerdo ayudaría a desarrollar uno de los programas y una de las metas del vigente Plan Distrital de Desarrollo.

#### IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En cuanto a la competencia que tiene el Concejo de Bogotá para aprobar esta iniciativa, esta se ampara en el Decreto Ley 1421 de 1993, que establece al Concejo de Bogotá como la suprema autoridad del Distrito Capital y habilitado para dictar este tipo de normas:

##### **Decreto Ley 1421 de 1993**

**ARTICULO 3o. OBJETO.** *El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.*

*Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.*

**Artículo 12:** *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

*1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

**Acuerdo 741 de 2019** “Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital”.

**“Artículo 65. Iniciativa.** *Los proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los Concejales individualmente, a través de las Bancadas, de manera integrada con otros Concejales o bancadas y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas.*

#### V. IMPACTO FISCAL

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, señala respecto al impacto fiscal de las normas:

**“ARTÍCULO 7. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS.** *En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente*

*a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”*

Sobre el cumplimiento de esta norma, varios fallos de la Corte Constitucional, como la sentencia C-307 de 2004, reiterada por la sentencia C-502 de 2007, señalan:

*“Las normas contenidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un importante instrumento de racionalización de la actividad legislativa, con el fin de que ella se realice con conocimiento de causa de los costos fiscales que genera cada una de las leyes aprobadas por el Congreso de la República. También permiten que las leyes dictadas estén en armonía con la situación económica del país y con la política económica trazada por las autoridades correspondientes. Ello contribuye ciertamente a generar orden en las finanzas públicas, lo cual repercute favorablemente en la estabilidad macroeconómica del país. De la misma manera, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado art. 7° ha de tener una incidencia favorable en la aplicación efectiva de las leyes, ya que la aprobación de las mismas solamente se producirá después de conocerse su impacto fiscal previsible y las posibilidades de financiarlo. Ello indica que la aprobación de las leyes no estará acompañada de la permanente incertidumbre acerca de la posibilidad de cumplirlas o de desarrollar la política pública en ellas plasmada. (...) Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos que se generen por lo dispuesto en el presente acuerdo en lo referente a la instalación de un mosaico en las instalaciones del Concejo de Bogotá D.C., se asumirán con cargo al presupuesto del Fondo Cuenta del Concejo. Sobre las otras disposiciones, las mismas no genera gasto ni genera costos fiscales adicionales para el Distrito en la medida que se pretenden articular los esfuerzos de las diferentes instituciones involucradas en la defensa y promoción de la memoria histórica de la capital.

## **VI. CONCLUSIÓN**

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

**DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA**

Concejal de Bogotá D.C.

Autor

**PROYECTO DE ACUERDO NO 093 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**“Por el cual se exalta la trayectoria de Jaime Garzón y su impacto en la cultura de la ciudad, con el fin de aportar al deber que tiene el Distrito Capital para la recuperación, el fortalecimiento, la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1.- OBJETO.** El presente Acuerdo tiene como objeto rendir homenaje a Jaime Garzón dictando medidas para destacar su impacto cultural en la identidad de la ciudad y aportar al deber de memoria que tiene el Estado para la construcción de memoria histórica.

**ARTÍCULO 2.- RECORRIDOS GUIADOS.** La Administración Distrital incluirá en sus recorridos guiados a los ejes de la memoria y la paz de Bogotá, realizados en el marco del Acuerdo 748 de 2020, uno o varios recorridos que muestren los lugares emblemáticos donde Jaime Garzón impactó en la cultura y la identidad bogotana.

**Parágrafo:** Estos recorridos deberán incluir como mínimo una visita al Sumapaz, la Universidad Nacional, la estatua de Jaime Garzón en el barrio Quinta Paredes y al Concejo de Bogotá en donde se explicará a los visitantes el papel que tiene esta corporación para aportar al derecho a la verdad y memoria histórica de las víctimas.

**ARTÍCULO 3.- INSTALACIÓN MOSAICO.** En el Concejo de Bogotá se instalará un mosaico en homenaje a Jaime Garzón en la pared de alguno de los costados de la plazoleta Jorge Eliecer Gaitán.

**Parágrafo:** Los gastos que se generen por la instalación de esta obra, se asumirán con cargo al presupuesto del Fondo Cuenta del Concejo.

**ARTÍCULO 4.- VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**BIBLIOGRAFIA**



Escobar Roldan, M. (2014). Jaime, un alcalde descarriado. *El Tiempo*. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14376759>

GARZÓN, AL GOBIERNO POR UN DÍA. (1999). *El Tiempo*. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-916598>

Al interior del restaurante favorito de Jaime Garzón. (2014). Kienyke.Com. Disponible en: <https://www.kienyke.com/historias/al-interior-del-restaurante-favorito-de-jaime-garzon-0>

**PROYECTO DE ACUERDO NO 094 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**“POR EL CUAL SE REGULA DE MANERA PROPORCIONAL Y JUSTA EL VALOR A PAGAR DE LOS INTERESES CAUSADOS POR LAS SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD (C-29) EN BOGOTÁ”**

## **1. OBJETO DEL PROYECTO**

Establecer acciones concretas desde la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría de Hacienda Distrital, para que los conductores de vehículos en la ciudad de Bogotá tengan la posibilidad de acceder a alivios y descuentos de obligaciones no tributarias como lo son los comparendos por la infracción C-29 “Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida”.

Para esto es preciso que se tenga en cuenta al momento de configurar el monto a pagar la mayor o menor diferencia entre la velocidad máxima permitida y la identificada por el mecanismo de fotodetección.

Este Acuerdo busca que la ciudadanía objeto de imposición de comparendos realice el pago de la sanción y/o intereses por la comisión de la infracción C-29 “Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida” establecida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2022 de forma proporcional a si se acerca o aleja de la máxima permitida.

En donde se puede establecer que, a mayor número de kilómetros de velocidad por encima de ese límite, mayor será el monto a pagar y viceversa sin exceder el límite de las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional.

## **2. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.**

De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. es competente para:

*“ARTÍCULO- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.**

*25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.  
(Negrilla fuera de texto)*

La Sentencia C-066 de 2018, MP Cristina Pardo Schlesinger. Sobre este particular, en Sentencia C-322 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), la Corte precisó que:

*“En las materias sujetas a iniciativa privativa o exclusiva del Gobierno Nacional, **el aval opera como una forma de activación del proceso legislativo o como una manifestación especial de consentimiento respecto de un asunto que se inició sin su previa aquiescencia**, sin que, por su propia naturaleza, tenga la posibilidad de excluir el carácter autónomo del ejercicio deliberativo del Congreso, en lo que respecta a la configuración de las materias sujetas a su aprobación, en donde caben las adiciones, supresiones o modificaciones que se estimen pertinentes, con la única carga, no sujeta a un control específico del ejecutivo*

*para su aprobación, de no alterar de forma sustancial la iniciativa, esto es, de dar trámite a una regulación radicalmente distinta a la propuesta. De esta manera, la iniciativa abre el espacio de deliberación y aprobación congresional, en materias específicas y claramente delimitadas por la Constitución, sin alterar la esencia de la autonomía parlamentaria y con una única limitante relativa a la custodia de la estructura sustancial del proyecto, cuya verificación no se sujeta a la capacidad decisoria del ejecutivo, sino, eventualmente, a un examen de constitucionalidad a través de los mecanismos ordinarios previstos en la Carta.” También se puede consultar la Sentencia C-838 de 2008, MP Marco Gerardo Monroy Cabra. (Negrilla y subrayado fuera de texto)<sup>47</sup>*

3. ANTECEDENTES

Proyecto de Acuerdo	Trámite
702 de 2024	<p>El proyecto de acuerdo fue radicado el 3 de octubre de 2024 y remitido a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el día 7 de octubre de 2024.</p> <p>Los concejales Sandra Consuelo Forero y Marco Fidel Acosta rindieron ponencia positiva con modificaciones.</p> <p>Archivado de conformidad con el artículo 79 del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 17 del Acuerdo 837 de 2022, por no discutirse en las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2024.</p>

4. SUSTENTO JURÍDICO

4.1 MARCO CONSTITUCIONAL

**Artículo 24.** Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

**Artículo 83.** Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

**Artículo 208.** Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros.

Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren convenientes.

<sup>47</sup> <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-510-19.htm>

Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público.

**Artículo 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

## 4.2 NORMATIVIDAD NACIONAL

### Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre)

- **Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios.** Modificado por el art. 1, Ley 1383 de 2010.

Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.

Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.

Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

- **Artículo 2°. Definiciones.** Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta.

Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de toda la población.

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.

**Adelantamiento:** Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.

**Agente de tránsito:** Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.

**Alcoholemia:** Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre.

**Alcoholometría:** Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.

**Alcoholuria:** Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la orina.

**Alcohosensor:** Sistema para determinar alcohol en aire exhalado.

**Año del modelo:** Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho para consumo.

**Aprendiz:** Persona que recibe de un instructor, técnicas de conducción de vehículos automotores y motocicletas.

**Automóvil antiguo:** Automotor que haya cumplido 35 años y que conserve sus especificaciones y características originales de fábrica, presentación y funcionamiento.

**Automóvil clásico:** Automotor que haya cumplido 50 años y que además de conservar sus especificaciones y características originales de fábrica, presentación y funcionamiento, corresponda a marcas, series y modelos catalogados internacionalmente como tales.

**Autopista:** Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por carril.

**Bahía de estacionamiento:** Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento de vehículos.

**Barrera para control vehicular:** Dispositivo dotado de punzones pinchallantas para uso en retenes y puesto de control de las fuerzas militares, la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y transporte.

**Berma:** Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia.

**Bicicleta:** Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales.

**Bocacalle:** Embocadura de una calle en una intersección.

**Bus:** Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características especiales vigentes.

**Buseta:** Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros.

**Cabina:** Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al conductor.

**Calzada:** Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.

**Carreteable:** Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos.

**Camión:** Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga.

**Camioneta picó:** Vehículo automotor destinado al transporte de personas en la cabina y de carga en el platón.

**Camión tractor:** Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o remolques, equipado con acople adecuado para tal fin.

**Capacidad de pasajeros:** Es el número de personas autorizado para ser transportados en un vehículo.

**Capacidad de carga:** Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos.

**Carretera:** vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de seguridad y comodidad.

**Carril:** Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

**Carrocería:** Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al transporte de personas o de carga.

**Casco:** Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las normas Icontec 4533 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o la norma que la modifique o sustituya.

**Centro de diagnóstico automotor:** Ente estatal o privado destinado al examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico conforme a las normas ambientales.

**Centro de enseñanza para conductores:** Establecimiento docente de naturaleza pública, privada o mixtos que tenga como actividad permanente la capacitación de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y motocicletas.

**Centro de enseñanza para formación de instructores:** Establecimiento docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tenga como actividad permanente la formación de instructores en técnicas de conducción de vehículos automotores y motocicletas.

**Centro integral de atención:** Establecimiento donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados que a través del cobro de las tarifas por los servicios allí prestados, garantizarán su autosostenibilidad.

**Chasis:** Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del vehículo mediante un bastidor.

**Chatarrización:** Desintegración total de un vehículo automotor.

**Choque o colisión:** Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un vehículo y un objeto fijo.

**Ciclista:** Conductor de bicicleta o triciclo.

**Ciclovía:** Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos y peatones.

**Ciclorruta:** Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

**Cilindrada:** Capacidad volumétrica total de los cilindros de un motor.

**Cinturón de seguridad:** Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, desaceleración súbita o volcamiento.

**Clase de vehículo:** Denominación dada a un automotor de conformidad con su destinación, configuración y especificaciones técnicas.

**Columna motorizada:** Son todos los vehículos autopropulsados o tractados que hacen parte de un mismo grupo de desplazamiento militar, bajo el mando de un comandante que los dirige o coordina.

**Combinación de vehículos:** Conjunto acoplado de dos (2) o más unidades vehiculares.

**Comparendo:** Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

**Conductor:** Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo.

**Conjunto óptico:** Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, pilotos de freno y reverso.

**Croquis:** Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente.

**Cruce e intersección:** Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran.

**Cuatrimoto:** Vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes mecánicos de motocicleta, para transporte de personas o mercancías con capacidad de carga de hasta setecientos setenta (770) kilogramos.

**Cuneta:** Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar las aguas superficiales.

**Discapacitado:** Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades físicas o mentales.

**Embriaguez:** Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo.

**Equipo de prevención y seguridad:** Conjunto de elementos necesarios para la atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo.

**Espaciamento:** Distancia entre dos (2) vehículos consecutivos que se mide del extremo trasero de un vehículo al delantero del otro.

**Estacionamiento:** Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito.

**Glorieta:** Intersección donde no hay cruces directos sino maniobras de entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central.

**Grúa:** Automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para levantar y remolcar otro vehículo.

**Homologación:** Es la confrontación de las especificaciones técnico-mecánicas, ambientales, de pesos, dimensiones, comodidad y seguridad con las normas legales vigentes para su respectiva aprobación.

**Infracción:** Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material.

**Instructor:** Persona que imparte enseñanza teórica o práctica para la conducción de vehículos.

**Inmovilización:** Suspensión temporal de la circulación de un vehículo.

**Licencia de conducción:** Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.

**Licencia de tránsito:** Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.

**Línea de vehículo:** Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas.

**Luces de emergencia:** Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia.

**Luces de estacionamiento:** Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea.

**Luces exploradoras o antiniebla:** Dispositivos de alumbrado especial que facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en condiciones adversas de visibilidad.

**Maquinaria rodante de construcción o minería:** Vehículo automotor destinado exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, construcción y conservación de obras, que por sus características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.

**Marcas viales:** Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito.

**Matrícula:** Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor ante un organismo de tránsito en ella se consignan las características, tanto internas como externas del vehículo, así como los datos e identificación del propietario.

**Microbús:** Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19 pasajeros.

**Modelo del vehículo:** Referencia o código que asigna la fábrica o ensambladora a una determinada serie de vehículos.

**Motocarro:** Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.

**Motocicleta:** Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante.

**Mototriciclo:** Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y capacidad para el conductor y un acompañante del tipo SideCar y recreativo.

**Multa:** Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes.

**Nivel de emisión de gases contaminantes:** Cantidad descargada de gases contaminantes por parte de un vehículo automotor. Es establecida por la autoridad ambiental competente.

**Norma de emisión de ruido:** Valor máximo permisible de intensidad sonora que puede emitir un vehículo automotor. Es establecido por las autoridades ambientales.

**Número de serie:** Número de identificación que cada fabricante le asigna a un vehículo.

**Organismos de tránsito:** Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.

**Pasajero:** Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.

**Paso a nivel:** Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía férrea.

Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía.

Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales con destino al cruce de peatones.

Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

Parada momentánea: Detención de un vehículo, sin apagar el motor, para recoger o dejar personas o cosas, sin interrumpir el normal funcionamiento del tránsito.

Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.

Pequeños remolques: Vehículo no motorizado con capacidad hasta de una tonelada, halado por un automotor y dotado de su sistema de luces reflectivas y frenos.

Peso bruto vehicular: Peso de un vehículo provisto de combustible, equipo auxiliar habitual y el máximo de carga.

Placa: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica externa y privativamente un vehículo.

Prelación: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras vías u otros vehículos.

Rebasamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo sobrepasa a otro que lo antecedía en el mismo carril de una calzada.

Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

Remolque: Vehículo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual no le transmite peso. Dotado con su sistema de frenos y luces reflectivas.

Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación.

Retención: Inmovilización de un vehículo por orden de autoridad competente.

Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía.

Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas.

Semirremolques: Vehículo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual se apoya y le transmite parte de su peso. Dotado con un sistema de frenos y luces reflectivas.

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.

Señales luminosas de peligro: Señales visibles en la noche que emiten su propia luz, en colores visibles como el rojo, amarillo o blanco.

Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía.

Sobrecarga: Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.

Sobrecupo: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.

STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto de infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua prestación del servicio público de transporte de pasajeros en un área específica.

Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros.

Taxímetro: Dispositivo instalado en un taxi para liquidar el costo del servicio público a una tarifa oficialmente autorizada.

Tipo de carrocería: Conjunto de características que definen la carrocería de un vehículo.



Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto específico durante un periodo determinado.

Transformación de vehículo: Procedimiento físico y mecánico mediante el cual un vehículo automotor puede ser modificado con el fin de cumplir una función diferente o mejorar su funcionamiento, higiene o seguridad.

Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público.

Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico.

Triciclo: Vehículo no motorizado de tres (3) ruedas, accionado con el esfuerzo del conductor por medio de pedales,

Unidad tractora: Vehículo automotor destinado a arrastrar un remolque, un semirremolque, o una combinación de ellos.

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público.

Vehículo agrícola: Vehículo automotor provisto de una configuración especial, destinado exclusivamente a labores agrícolas.

Vehículo de emergencia: Vehículo automotor debidamente identificado e iluminado, autorizado para transitar a velocidades mayores que las reglamentadas con objeto de movilizar personas afectadas en salud, prevenir o atender desastres o calamidades, o actividades policiales, debidamente registrado como tal con las normas y características que exige la actividad para la cual se matricule.

Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas.

Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje.

Vehículo de servicio oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de entidades públicas.

Vehículo de servicio diplomático o consular: Vehículo automotor destinado al servicio de funcionarios diplomáticos o consulares.

Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un animal.

Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraestructura especial para acceso de pasajeros. **Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-568 de 2003**

Vehículo escolar: Vehículo automotor destinado al transporte de estudiantes, debidamente registrado como tal y con las normas y características especiales que le exigen las normas de transporte público.

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales.

Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista.

Vía de metro o metrovía: Es aquella de exclusiva destinación para las líneas de metro, independientemente de su configuración y que hacen parte integral de su infraestructura de operación.

Vía férrea: Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos casos será éste el que tenga la prelación.

Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.

Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias.

Vía ordinaria: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales.

Vía troncal: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo. **Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-568 de 2003**

Zona escolar: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se extiende cincuenta (50) metros al frente y a los lados del límite del establecimiento.

Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por autoridad competente en zonas adyacentes a instalaciones militares o de policía, teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo pueden estacionar los vehículos autorizados.

- **Artículo 3°. Autoridades de tránsito.** Modificado por el art. 2, Ley 1383 de 2010.

Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:

El Ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte.

**PARÁGRAFO 1°.** Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.

**PARÁGRAFO 2°.** El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.

**PARÁGRAFO 3°.** Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

**PARÁGRAFO 4°.** La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.

**PARÁGRAFO 5°.** Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de Autoridad de Tránsito.

Norma Anterior

- **Artículo 6°. Organismos de tránsito.** Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción:

a) Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito;

b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito;

c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos;

d) Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales;

e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito.

**PARÁGRAFO 1.** En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.

**PARÁGRAFO 2.** Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.

**PARÁGRAFO 3.** Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o

modificaciones al código de tránsito. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-568 de 2003

Los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código.

No obstante, los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas jurisdicciones que los compongan.

- **Artículo 7°. Cumplimiento régimen normativo.** Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas.

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio.

Actuarán en su respectiva jurisdicción, salvo que por una necesidad del servicio, un municipio o departamento a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra entidad territorial.

El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios.

Cualquier autoridad de tránsito, entiéndase agentes o inspectores, están facultados para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación, aun en las carreteras nacionales de su jurisdicción y en especial cuando la Policía Nacional, no tiene personal dispuesto en dicha jurisdicción.

**PARAGRAFO 1.** La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.

**PARÁGRAFO 2.** La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115. de 1994.

**PARÁGRAFO 3.** El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, podrá asistir técnicamente a las Instituciones de Educación Superior, que promuevan dentro de sus ofertas académicas. La Formación y Especialización en Seguridad Vial que las autoridades territoriales requieren para sus autoridades de tránsito.

**PARÁGRAFO 4.** Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial.

**PARÁGRAFO 5.** La contratación con privados para la implementación de ayudas tecnológicas por parte de las autoridades de tránsito deberá realizarse conforme las reglas que para tal efecto dicten las normas de contratación estatal. La remuneración a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones no podrá superar en ningún caso el 10% del recaudo.

**Artículo 131. Multas.** Modificado por el art. 21, Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

- A.1. No transitar por la derecha de la vía.
- A.2. Agarrarse de otro vehículo en circulación.
- A.3. Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.
- A.4. Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.
- A.5. No respetar las señales de tránsito.
- A.6. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos.
- A.7. Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso.
- A.8. Transitar por zonas prohibidas.
- A.9. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.
- A.10. Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.
- A.11. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.
- A.12. Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.

B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes (smlDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

- B.1. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.
- B.2. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.
- B.3. Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
- B.4. Con placas adulteradas.
- B.5. Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
- B.6. Con placas falsas.

En estos casos los vehículos serán inmovilizados.

- B.7. No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado.
- B.8. No pagar el peaje en los sitios establecidos.
- B.9. Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.
- B.10. Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia.
- B.11. Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad.

- B.12. No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres.
- B.13. No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito.
- B.14. Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código.
- B.15. Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado.
- B.16. Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros.
- B.17. Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros.
- B.18. Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el presente código.
- B.19. Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.
- B.20. Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte.
- B.21. Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en quebradas.
- B.22. Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero.
- B.23. Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento.
- C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
  - C.1. Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo.
  - C.2. Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.
  - C.3. Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.
  - C.4 Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro reglamentarias.
  - C.5. No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.
  - C.6. No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.
  - C.7. Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril.
  - C.8. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este código.
  - C.9. No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella.
  - C.10. Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas.
  - C.11. No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente.
  - C.12 Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido.
  - C.13 Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física.
  - C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.
  - C.15 Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación.
  - C.16 Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios, además el vehículo será inmovilizado.

C.17 Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente.

C.18 Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o este no esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado.

C.19 Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.

C.20. Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además, el vehículo será inmovilizado.

C.21. No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación.

C.22. Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación.

C.23. Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello.

C.24. Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.

C.25. Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos.

C.26. Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril.

C.27. Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado.

C.28 Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos.

**C.29. Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.**

C.30. No atender una señal de ceda el paso.

C.31. No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.

C.32. No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas.

C.33. Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques.

C.34. Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este código.

C.35. No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes, además el vehículo será inmovilizado.

C.36. Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.

C.37. Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátase de furgón o plataforma de estacas.

C.38. Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.

C.39. Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este Código.

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

D.1. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.

D.2. Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado.

D.3. Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.4. No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.5. Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.6. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.7. Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.8. Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces.

D.9. No permitir el paso de los vehículos de emergencia.

D.10. Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.

D.11. Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la sanción solidariamente al propietario.

D.12. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.

D.13. En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado.

D.14. Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones.

D.15. Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al propietario. Además el vehículo será inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor que sean debidamente autorizados por el agente de tránsito.

E.1. Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo.

E.2. Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público.

E.3. Eliminado por el art. 4, Ley 1696 de 2013. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

E.4. Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados, etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.

F. Adicionado por el art. 4, Ley 1696 de 2013.

- **Artículo 134. Jurisdicción y competencia.** Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico.

**PARÁGRAFO.** Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su competencia.

- **Artículo 135. Procedimiento.** Modificado por el art. 22, Ley 1383 de 2010. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción

**Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-530 de 2003, bajo el entendido de que este aparte también es aplicable a los conductores de vehículos de servicio público.**

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente de tránsito firmado por un testigo solamente procede la tacha de falsedad.

El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste.

**PARÁGRAFO 1.** La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.

**PARÁGRAFO 2.** Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.

**Artículo 136. Reducción de la sanción.** Modificado por el art. 24, Ley 1383 de 2010, Modificado por el art. 205, Decreto Nacional 019 de 2012. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión



de la infracción, podrá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados. **Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante**

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código. **Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-530 de 2003, en el entendido que las garantías allí reguladas también son aplicables a los conductores de vehículos particulares.**

Los organismos de tránsito podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas. Los recursos generados por el cobro de las contravenciones podrán ser distribuidos entre el organismo de tránsito que ejecuta el recaudo, el organismo de tránsito donde se cometió la infracción y por el tercero particular o público en quien éste delegue el recaudo previo descuento del diez por ciento (10%) que se destinará específicamente por el organismo de tránsito que conoció la infracción para campañas de educación vial y peatonal. El pago de la multa podrá efectuarse en cualquier lugar del país

1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro de Enseñanza Automovilística o un Centro integral de atención debidamente registrados ante el RUNT. Si el curso se realiza ante un Centro de Enseñanza Automovilística o en Centro integral de atención, o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

(Modificado por el Art. 118 del Decreto 2106 de 2019)

2. Cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito, en un Centro de Enseñanza Automovilística, o un Centro integral de atención debidamente registrados ante el RUNT. Si el curso se realiza ante un Centro de Enseñanza Automovilística, o Centro integral de atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al Organismo de Tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

(Modificado por el Art. 118 del Decreto 2106 de 2019)

Ver Resolución Min. Transporte 4230 de 2010

**PARÁGRAFO 1.** En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.

**PARÁGRAFO 2.** Los cursos a los infractores de las normas de tránsito podrán ser también virtuales, para lo cual quien lo dicta deberá garantizar la autenticación biométrica del ciudadano en la forma en que determine el Ministerio de Transporte, a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT y por el Sistema de Control y Vigilancia de la Superintendencia de Transporte, que permita la identificación del infractor de forma segura, así como el registro y su permanencia en el curso, en los términos señalados por el Ministerio de Transporte.

Los cursos realizados por los organismos de tránsito, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística registrados ante en sistema del Registro Nacional de Tránsito -RUNT para dicha labor, no podrán ser en número/día más de la capacidad física instalada, certificada por medio del registro, gestión de calidad o acreditación, en las condiciones señaladas por el Ministerio de Transporte.

En todo caso, para la prestación del curso virtual y/o presencial, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística, deberán cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y funcionamiento previstos en la ley, según reglamentación del Ministerio de Transporte.

A los organismos de tránsito no se les exigirá convenio para prestar los cursos.  
(Parágrafo, adicionado por el Art. 23 de la Ley 2050 de 2020)

**PARÁGRAFO TRANSITORIO.** El Ministerio de Transporte continuará realizando las habilitaciones, hasta que se cuente con el desarrollo en el sistema RUNT, para que dichos organismos realicen el registro de manera directa, plazo que no podrá ser mayor a 6 meses contados a partir de la expedición del presente decreto ley prorrogables por 3 meses más.

Para todos los efectos legales, el registro en el RUNT hará las veces de habilitación

#### 4.3 NORMATIVIDAD DISTRITAL

- Acuerdo 927 de 2024 “*Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*”

(...) **Artículo 8. Programas del objetivo estratégico “Bogotá avanza en seguridad”.** Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá avanza en seguridad”:

**8.6. Programa 6. Movilidad segura e inclusiva.** La Administración distrital propone un plan interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de Transporte Público de Bogotá, dirigido a mitigar los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia, mediante la articulación regional, distrital y local, coordinando acciones de control a la problemática que afecta la seguridad ciudadana en el Sistema. Así mismo, para la problemática de congestión y seguridad vial, se tendrán acciones de regulación y gestión de tránsito articuladas entre el sector movilidad y la Policía Nacional, así como el fortalecimiento del Centro de Gestión de Tránsito (CGT). De igual manera, se realizarán operativos de control, señalización y fotodetección, apoyo tecnológico para la prevención y control de la velocidad, entre otros, en diferentes puntos de la ciudad y sitios estratégicos en articulación con la ciudad región. Por otra parte, la Administración Distrital garantizará que las cámaras de fotodetección cuenten con la adecuada señalización para informar la existencia del dispositivo, con el fin de mejorar la visibilidad de estos y en concordancia con la normatividad nacional vigente que las regula. De igual forma, la Administración realizará acciones de prevención y control en portales y estaciones del componente troncal y zonal del Sistema Integral de Transporte Público para mitigar el fenómeno de la evasión, por un lado, mediante el uso de herramientas tecnológicas para monitorearla y controlarla y, por otro, fomentando acciones pedagógicas e implementando acciones conjuntas con todas las entidades distritales que dentro de su misionalidad y competencia se encarguen de intervenir y atender a la población de vendedores informales, para reducir las ventas

informales en Transmilenio como medida de atención y gestión de riesgo. También se realizará la promoción de comportamientos seguros y de cuidado para reducir el riesgo de perder la vida y sufrir lesiones graves en la vía.

(...)

**Artículo 35. Estudios técnicos sobre cámaras de fotodetección.** La Administración Distrital realizará los estudios técnicos de impacto en la siniestralidad de cada una de las cámaras de fotodetección ubicadas en la ciudad de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma Nacional.

(...)

**Artículo 39. Complementos en zonas de fotodetección.** Sobre las vías en las que existan mecanismos de fotodetección se instalarán dispositivos tecnológicos o señalización adicional o cualquier clase de elemento preventivo que permita alertar a los conductores sobre la existencia del control electrónico, según sea el caso y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la evaluación de criterios técnicos y tecnológicos.

**Parágrafo.** La Secretaría Distrital de Movilidad, evaluará los elementos preventivos a instalar para el cumplimiento del presente artículo.

(...)

**Artículo 265. Metas de producto.** Las metas de producto del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 se encuentran en el documento anexo “Metas de producto” el cual hace parte integral del presente plan y corresponden con la siguiente numeración:

Número de meta: 54

Programa: Movilidad segura e inclusiva

Meta: Realizar un (1) estudio técnico en corredores principales, para evaluar los límites de velocidad en la ciudad

#### 4.4 RESOLUCIONES

- Resolución 20223040045295 de 2022 Ministerio de Transporte “*Por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte*”
- Resolución 3027 de 2010 Ministerio de Transporte “*Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones*”
- La Resolución conjunta 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial “*Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones*”

#### 4.5 SENTENCIAS

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala, Radicado número: 11001-03-24-000-2010-00119-00.

- Corte Constitucional, Sentencia C – 633 de 2014.
- Corte Constitucional, Sentencia C – 066 de 2018
- Corte Constitucional, Sentencia C – 838 de 2008

## 5. JUSTIFICACIÓN

La presente iniciativa surge a partir de las quejas reiteradas de los ciudadanos de Bogotá, en donde manifiestan su inconformidad con la imposición de comparendos por la infracción C-29 que corresponde a conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.

### 5.1 Evolución normativa de los límites de velocidad en Colombia

Y para analizar esto, es preciso revisar la evolución normativa reciente de los límites de velocidad en Colombia.

En primer lugar, la **Ley 769 de 2002** “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” determinó en su artículo 106 original lo siguiente:

*“Artículo 106. LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS PÚBLICO. En vías urbanas las velocidades máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas”*

Sin embargo, seis años después con la **Ley 1239 de 2008** se modificaron los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002, quedando de la siguiente manera:

**Artículo 1°.** El artículo 106 del Código Nacional de Tránsito quedará así:

*"Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora.*

*El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar, será de sesenta (60) kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora".*

Posteriormente, se expidió la **Ley 2251 de 2022** con la cual se dictaron normas para el diseño e implementación de la Política de Seguridad Vial con enfoque de sistema seguro, conocida como Ley Julián Esteban.

Y el capítulo VI “Velocidad”, en el artículo 12 nuevamente modifica el artículo 106 de la Ley 769 de 2002, estableciendo que en las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo y que en ningún caso podrá sobrepasar los cincuenta (50) kilómetros por hora.

Adicionalmente, señala que la velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora.

Este artículo en su párrafo 2 reza que de manera excepcional y considerando lo establecido en el estudio técnico, diseño de la infraestructura y lo que fije la “Metodología para establecer la velocidad límite en las vías colombianas” que emita

el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, teniendo en cuenta el contexto, el tipo de vía, características de la infraestructura, funcionalidad, y otros elementos que coadyuven con la movilidad eficiente y la protección de los actores viales, en el marco del enfoque seguro, que propendan por una movilidad eficiente y la protección de todos los actores viales. Los tramos viales en los que se presenten condiciones idóneas de infraestructura y seguridad vial, las entidades territoriales, estarán facultadas, en el marco de su jurisdicción territorial de establecer límites de velocidad superiores a los establecidos en este artículo.

Ahora bien, un tema que está ligado con los límites de velocidad es la imposición de comparendos y para ello es preciso mencionar la **Ley 769 de 2002** (*Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre*), que en su artículo 131 denominado Multas, determinó que los infractores de las normas de tránsito como lo es el “*conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida*”, será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Por otra parte, la **Ley 1843 de 2017**, la cual reguló la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones consagró en su artículo 8 el procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:

El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público. En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo.

Una vez allegada a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial donde se detectó la infracción con ayudas tecnológicas se le enviará al propietario del vehículo la orden de comparendo y sus soportes en la que ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir del recibo del comparendo en la última dirección registrada por el propietario del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito.

Si bien el parágrafo 1 del artículo 8 establecía que el propietario del vehículo sería solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en dicho artículo, se permitiría que se ejerciera su derecho a la defensa. Sin embargo, este parágrafo fue declarado inexecutable por la Sentencia C-038 de 2020.

Sentencia cuya interpretación y aplicación fue modificada por la sentencia C321-2022 (con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar), donde explica que <sup>48</sup>“*de la función social de la propiedad se deriva una obligación de cuidado y vigilancia en cabeza los propietarios de vehículos y precisa que el solo hecho de imponer un comparendo no implica la imposición automática de la sanción al propietario, pues, en todo caso, debe adelantarse un proceso en que debe probarse la responsabilidad del propietario.*”

De otra parte, se expidió la **Ley 2161 de 2021** por la cual se establecieron medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se modificó la Ley 769 de 2002 y se dictaron otras disposiciones. En su artículo 10 estableció las medidas antievasión, así:

<sup>48</sup> <https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?ABC-de-la-Sentencia-C-321-de-2022-sobre-las-obligaciones-de-los-propietarios-de-los-veh%C3%ADculos-y-su-protecci%C3%B3n-del-derecho-al-debido-proceso-cuando-se-imponen-comparendos-9465>

*“Artículo 10. Medidas Antievasión. Los propietarios de los vehículos automotores deberán velar porque los vehículos de su prioridad circulen:*

- a) Habiendo adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.*
- b) Habiendo realizado la revisión tecnomecánica en los plazos previstos por la ley*
- c) Por lugares y en horarios que estén permitidos*
- d) Sin exceder los límites de velocidad permitidos*
- e) Respetando la luz roja del semáforo.*

*La violación de las anteriores obligaciones implicará la imposición de las sanciones previstas en el Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito modificado por la Ley 1383 de 2010 para dichos comportamientos, previo el cumplimiento estricto del procedimiento administrativo contravencional de tránsito.”*

## **5.2 Alivios Tributarios en el Plan Distrital de Desarrollo**

El tema de los alivios tributarios es algo que no es ajeno a Bogotá, el mismo Plan Distrital de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024) en sus artículos 316-317-318 estableció lo siguiente:

**Artículo 316. Alivios tributarios para obligaciones tributarias susceptibles de discusión.** Reglamentado por el art. 1, Acuerdo Distrital 236 de 2024. Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de los tributos distritales, que a la fecha de publicación del presente acuerdo tengan obligaciones tributarias en mora y respecto de las cuales no se haya proferido liquidación oficial o que, habiéndose proferido no se encuentren en firme, podrán descontar el ochenta por ciento (80%) de los intereses y sanciones causados, siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, paguen el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago.

*Tratándose de sanciones por no envío de información, el responsable podrá descontar el ochenta por ciento (80%) del valor adeudado siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, pague el veinte por ciento (20%) de la sanción liquidada a esa fecha. Tratándose de sanciones propuestas o determinadas por la Administración Tributaria Distrital que no se encuentren en firme, deberá acreditarse el pago del veinte por ciento (20%) señalado en el respectivo acto administrativo.*

**Parágrafo 1.** Con el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se extingue la obligación tributaria y se entiende que el contribuyente desiste de la discusión del acto administrativo ante la Administración Tributaria y ante la jurisdicción contencioso administrativa.

**Parágrafo 2.** Tratándose de obligaciones omisas o inexactas sin acto administrativo de liquidación, deberán presentar la respectiva declaración o corrección en los términos señalados en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que posteriormente pueda adelantar la Administración tributaria.

*La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a esta exención.*

**Artículo 317. Alivios tributarios para obligaciones en firme.** Reglamentado por el art. 1, Decreto Distrital 236 de 2024. Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de los tributos distritales, que a la fecha de publicación de este Acuerdo, tengan obligaciones tributarias en firme

y que hayan entrado en mora durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020, fecha en que se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del COVID 19 y el 30 de junio de 2022, fecha en la que finalizó la emergencia sanitaria podrán descontar el ochenta por ciento (80%) de los intereses y sanciones causados, siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, paguen el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago.

Se incluyen dentro de este artículo las obligaciones tributarias de los impuestos predial unificado y sobre vehículos automotores que se hayan causado durante las vigencias fiscales 2020, 2021 y 2022. Tratándose de sanciones por no envío de información, el responsable podrá descontar el 80% del valor adeudado siempre que, a más tardar el 13 de diciembre de 2024, pague el veinte por ciento (20%) de la sanción actualizada cuando haya lugar a ello.

**Parágrafo 1.** Los deudores que, a la fecha de publicación de este Acuerdo, tengan acuerdo de pago suscrito vigente, respecto de obligaciones tributarias que hayan entrado en mora durante el periodo señalado en este artículo, podrán acceder a la misma exoneración, siempre y cuando paguen el ciento por ciento (100%) del capital correspondiente al saldo insoluto de la deuda y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago hasta el 13 de diciembre de 2024.

**Parágrafo 2.** Los deudores de obligaciones tributarias que hayan entrado en mora durante el periodo señalado en este artículo, podrán acceder a la misma exoneración, siempre y cuando soliciten una facilidad de pago con el cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto por la Dirección Distrital de Cobre de la Secretaría Distrital de Hacienda a más tardar el 15 de octubre de 2024 y paguen el ciento por ciento (100%) del capital correspondiente al saldo insoluto de la deuda y el veinte por ciento (20%) de los intereses y sanciones causados a la fecha de pago en los términos y condiciones dispuestos en la respectiva facilidad de pago. Para este fin, la Dirección Distrital de Cobre deberá suscribir la facilidad de pago a más tardar el 13 de diciembre de 2024. La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a esta exención.

**Artículo 318. Alivios para deudores de obligaciones no tributarias.** [Reglamentado por el art. 1, Acuerdo Distrital 236 de 2024.](#) Los deudores del Distrito Capital por conceptos de obligaciones no tributarias a favor de las entidades del sector central, los establecimientos públicos y las alcaldías locales, que hayan entrado en mora hasta el 30 de junio de 2022 fecha en la que finalizó la emergencia sanitaria, podrán descontar el ochenta por ciento 80% de los intereses causados, siempre que a más tardar el 13 de diciembre de 2024, paguen el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el veinte por ciento (20%) de los intereses causados a la fecha de pago.

**Parágrafo 1.** Los deudores que a la fecha de publicación de este Acuerdo tengan acuerdo de pago suscrito vigente respecto de obligaciones no tributarias que hayan entrado en mora durante el periodo señalado en este artículo, podrán acceder a la misma exoneración, siempre y cuando paguen el ciento por ciento (100%) del capital correspondiente al saldo insoluto de la deuda y el veinte por ciento (20%) de los intereses causados a la fecha de pago hasta el 13 de diciembre de 2024.

**Parágrafo 2. Excepciones.** No se concederá el beneficio establecido en el presente artículo a los siguientes deudores:

1. Las personas naturales o jurídicas que hayan sido objeto de multas derivadas de incumplimientos contractuales en Bogotá, Distrito Capital.

2. Las personas naturales que hayan sido sancionadas por conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los términos dispuestos en el artículo 5° de la Ley 1696 de 2013.

3. Los prestadores de servicios de salud y los establecimientos abiertos al público que hayan sido objeto de las siguientes medidas sanitarias contenidas en los artículos 576 y 577 de la Ley 9 de 1979 por parte de la Secretaría Distrital de Salud:

- a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial.
- b) La suspensión parcial o total de trabajos o de servicios.
- c) El decomiso de objetos y productos.
- d) La destrucción o desnaturalización de artículos o productos.
- e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos.
- f) El cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo.

La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a esta exención.

De lo anterior y para el caso que nos ocupa debemos analizar el artículo 318 el cual tiene que ver con obligaciones no tributarias (aplicable a las sanciones por fotodetección entre otras) pero que se queda corta al no generar un alivio sobre el capital que al final de cuentas es lo que afecta de manera grave el bolsillo de los bogotanos.

Es entonces la oportunidad de equilibrar y ajustar las sanciones dándoles un componente subjetivo para que sea justa la sanción, y esta dependa del grado de incumplimiento de la norma. Son múltiples los factores que pueden llevar no solo al error de las cámaras en cuanto a temas de calibración, mantenimiento y tolerancia, sino que a su vez son diversos los vehículos como las motocicletas cuyo control exacto de la velocidad no es tan sencillo como lo es por ejemplo para un carro.

### 5.3 Caso de gradualidad de la sanción en Estados Unidos (Estado de la Florida)

Dejando a un lado el hecho de que en muchos países (Alemania, Francia, Portugal) o el mismo Estados Unidos manejan el sistema de carné o licencia de conducción por puntos en donde o se descuentan o se acumulan según el tipo de infracción y sus consecuencias. Es importante traer a colación y como un precedente importante el caso del Estado de la Florida en Norte América, pues allí cuando se comete una infracción por exceso de velocidad, la persona tiene claro que su sanción será de acuerdo con la velocidad a la que iba. Así las cosas, las consecuencias de su actuación tienen un componente pecuniario y uno subjetivo que depende de la velocidad en la que iba la persona.

Entonces, según lo dispone el capítulo 18 del Estatuto de Florida, así se manejan las sanciones pecuniarias por velocidad:

“(…) (b) For moving violations involving unlawful speed, the fines are as follows:

**For speed exceeding the limit by:**

- 1-5 mph..... Warning
- 6-9 mph.....\$25
- 10-14 mph.....\$100
- 15-19 mph.....\$150
- 20-29 mph.....\$175
- 30 mph and above.....\$250 (…)”



Lo primero que debemos precisar es que 1 milla equivale a 1.6 kilómetros, y que el dólar a la fecha (02-10-2024) por TRM está a \$4.194, por lo que el anterior cuadro si lo extrapolamos literalmente al contexto de Colombia sería así:

Las consecuencias económicas de la violación a los límites de velocidad es la siguiente:

- Entre 1.6 km/h y 8 km/h solo se dará una advertencia.
- Entre 9.6 km/h y 14.4 km/h se pagarán \$104.850 pesos
- Entre 16 km/h y 22.5 km/h se pagarán \$419.400 pesos
- Entre 24.1 km/h y 30.5 km/h se pagarán \$629.100 pesos
- Entre 32.1 km/h y 46.6 km/h se pagarán \$733.950 pesos
- De 48 km/h en adelante se pagarán \$1.048.000 pesos.

Algo a tener en cuenta es que mientras el salario mínimo en Colombia es de \$1.300.000 pesos, en el Estado de la Florida su equivalente en pesos es de \$8.723.520. Lo anterior es el resultado de un ejercicio en donde se tenga en cuenta el salario mínimo por hora (13 USD) multiplicado por 8 horas y ese resultado por 20 días hábiles del mes.

Como se puede ver existe una desproporción absoluta en pretender que un ciudadano pague por la infracción C-29 de exceso de velocidad \$572.600, casi la mitad de un salario mínimo en Colombia, mientras que la sanción más grave desde el punto de vista económico en Estados Unidos es de 1/8 parte de lo que se ganan las personas. Es evidente que mientras que en otros países la finalidad de las sanciones es persuasiva y disuasoria en Bogotá pareciera que su finalidad es afectar de manera grave los bolsillos de las personas.

De lo anterior es que se colige la necesidad de crear herramientas (alivios y/o descuentos) que permitan que las personas paguen lo que deben y las sanciones que les sean aplicadas de acuerdo con el grado de infracción de la norma. No es justo que pague lo mismo una persona que excedió el límite máximo de velocidad en 1 o 5 kilómetros por hora a otra que lo hizo a 30 más por encima, pues el grado de imprudencia y la falta al deber de cuidado no es el mismo.

#### **5.4 Seguridad vial, velocidades e infraestructura.**

En este punto es necesario decir que Bogotá cuenta con el Decreto 813 de 2017 que adoptó el “*Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026*” cuyo objeto es “*reducir la accidentalidad vial en el Distrito Capital, focalizando las acciones hacia la disminución de la mortalidad y la morbilidad, especialmente de los usuarios vulnerables, así como promover la movilidad segura como prioridad en el sistema de movilidad.*”

Ahora bien, para efectos del análisis del caso debemos partir por tener claros ciertos conceptos:

##### **5.4.1 Tipos de vía**

Según el artículo 155 del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, tenemos diferentes tipos de calles según su perfil, el cual depende de los metros mínimos y máximos de ancho de la vía.

Por ejemplo, tenemos Calles Tipo A-0 que tienen un ancho mínimo de 90 metros y un máximo de 100, otras como la A-1 que tienen un ancho mínimo de 54 metros y un máximo de 66 y así sucesivamente van disminuyendo hasta llegar a la clasificación L-10 con un ancho mínimo de 4 metros y un máximo de 6.

##### **5.4.2 Soportes de los límites de velocidad**

Según la Secretaría de Movilidad, y de conformidad con el Plan Distrital de Seguridad Vial se tiene dentro de sus principales acciones la consolidación del Programa de Gestión de la Velocidad.

Y que en este se incluía la evaluación de los límites de velocidad según la función y características operativas de la vía, incluyendo las condiciones del entorno, para así establecer límites de velocidad apropiados y coherentes.

Y además que para definir esos límites se debía:

1. Clasificar las vías según sus especificaciones, características operacionales y las condiciones de su entorno.
2. Definir un límite de velocidad razonable y coherente para la vía según sus características.
3. Reglamentar el límite de velocidad definido e instalar la señalización correspondiente.
4. Implementar medidas que ayuden a los conductores a acatar los límites de velocidad (medidas para el cumplimiento).

Incluso que se tenían en cuenta elementos de diseño que determinan la velocidad de una vía como son el ancho de carril, la existencia de semáforos y su operación, el diseño de las intersecciones, la distancia entre intersecciones, la segregación de los usuarios de la vía, el estacionamiento, la existencia de separador central, el diseño de los paraderos de buses, los sentidos viales, la alineación, el número de carriles por sentido, entre otros.

#### **5.4.3 Límites de velocidad en ciudades de Latinoamérica**

- **Montevideo, Uruguay**

Avenida José Batlle y Ordoñez: Que no es considerada como una autopista, es una vía muy semejante a la carrera séptima y allí el límite de velocidad es de 60 km/h.

Rambla de Montevideo: Vía de dos carriles al interior de Montevideo y su límite es de 75 km/h.

- **Lima, Perú**

Avenida Javier Prado: Vía principal interna dentro de la ciudad de Lima. Características semejantes a las de la Autopista Sur y su límite de velocidad es de 60 km/h

Avenida Central Panamericana: Autopista al interior de Lima. Allí el límite de velocidad en varios de los puntos de esta vía es de 80 km/h.

- **Ciudad de México, México**

Avenida Cuauhtémoc. Vía principal interna, cuyas características viales son iguales o muy semejantes a la Calle 26. Allí el límite de velocidad es de 80 km/h.

- **Medellín**

En esta ciudad existen límites máximos hasta de 80 km/h, entre las que encontramos:

- La Avenida Regional donde el límite es 80 km/h y es muy semejante a la Autopista Norte

- Autopista Sur donde el límite es 80 km/h y que se parece a la Avenida Boyacá
- Avenida El Poblado cuyo límite es 60 km/h y que la podríamos comparar con la Avenida Las Américas
- Avenida Oriental donde el límite es 60 km/h y es muy parecida a la Calle 80.

Miremos por ejemplo la Avenida Regional de Medellín donde se puede andar a 80 km/h donde la Secretaría de Movilidad de Medellín me indicó que el Operador UNE aportó las razones técnicas del por qué soportaban esos 80 km/h.

Y en el 2023 se realizó el análisis de la velocidad empleando la *“Metodología para establecer la velocidad límite en vías colombianas”*, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Y el resultado de ese estudio es que se puede andar hasta a 80 km/h.

#### 5.4.4 Corredores viales

A continuación, tenemos los 14 principales corredores viales de la ciudad con límite de velocidad de 50 km/h:

1. Autopista Norte
2. Autopista Sur
3. NQS
4. Avenida Boyacá
5. Avenida Ciudad de Cali
6. Avenida Primero de Mayo
7. Avenida Caracas
8. Avenida Las Américas
9. Avenida Suba
10. Calle 26 (Avenida El Dorado)
11. Calle 80
12. Carrera Séptima
13. Carrera 68
14. Avenida Centenario (Calle 13).

#### 5.4.5 Progresividad de reducción de la velocidad en vía

Ahora es preciso un recuento de los cambios que frente a la gestión de velocidad se ha implementado en Bogotá de manera gradual desde el año 2018, iniciando con 5 corredores arteriales principales con límite máximo de velocidad de 50 km/h (En los corredores de la Avenida Carrera 68, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Calle 80 y Avenida de Las Américas).

Posteriormente en el año 2019 se implementaron 5 corredores más con límite máximo de velocidad 50 km/h (En los corredores de la Avenida NQS, Avenida Primero de Mayo, Avenida Suba, Avenida Villavicencio y Avenida Calle 13).

Para la vigencia 2020 (Pandemia Covid 19) se expidió el Decreto Distrital 126 del 10 de mayo de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones”, se estableció en el año 2020 el límite máximo de velocidad en las vías del Distrito Capital en cincuenta kilómetros por hora (50 km/h) para la circulación de todos los vehículos con las excepciones correspondientes.

Ya en el 2021, mediante Decreto Distrital 073 del 16 de marzo de 2021 “Por medio del cual se toman medidas para la regulación y control del tránsito en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones” en donde se definió de forma permanente que el límite máximo de velocidad en las vías del Distrito Capital es cincuenta kilómetros por hora (50 km/h) con algunas excepciones dentro de las cuales se encontraba:

“d) Los siguientes corredores o tramos de corredor: Calle 26, Autopista Norte, Carrera 7a entre calles 93 y 95, y Autopista Sur entre la carrera 74G y el límite con el Municipio de Soacha, los cuales tendrán temporalmente un límite de 60 km/h, mientras se surte el procedimiento de cambio de señalización, sujeto a la autorización de las autoridades competentes frente al control con sistemas de detección electrónica de infracciones de tránsito.”

Ya en noviembre de 2022 se empezó a aplicar el límite máximo de velocidad en los cuatro corredores en los que se podía circular a 60km/h: Autopista Norte, Calle 26, Carrera 7.ª y Autopista Sur entre la carrera 74G y Soacha.

#### 5.4.6 Siniestros

Para poder abordar este punto debemos primero entender qué es un accidente o siniestro vial, porque el término depende de a quién le preguntemos.

Según el Código Nacional de Tránsito se entiende por **accidente de tránsito**:

*“evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho”*

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad utiliza el término de **siniestro vial** conforme al Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026, según me informa, porque así lo determina la OMS definiéndolo de la siguiente manera:

*“hechos de tránsito que se pudieron haber evitado y prevenido en el marco de la co-responsabilidad y la autorregulación.”*

Dejando esta diferencia a un lado, el Ministerio de Transporte mediante Resolución 11268 de 2012 clasifica los accidentes de tránsito así:

##### Gravedad

- Con Muertos
- Con Heridos
- Solo daños

##### Clase de Accidente

- Choque
- Atropello
- Volcamiento
- Caída ocupante
- Incendio

#### 5.4.7 Velocidad promedio

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, el promedio de velocidad durante los días hábiles de la semana en el horario de las 6:00 am a las 9:00 pm durante el 2023 fue de **25.5 km/h**.

En el 2024 la velocidad fue de **26.3 km/h**.

#### 5.4.8 Infraestructura tecnológica

##### 5.4.8.1 ¿Qué son los SAST?

Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito.

##### 5.4.8.2 Tipos

- Cámaras fijas del Centro de Gestión del Tránsito - CGT. (Semiautomáticas)
- Cámaras de fotodetección (Automáticas)
- Cámaras móviles. (Pueden ser operadas en 8 puntos autorizados por la ANSV para cámaras fijas, pero en donde no hay infraestructura, cumplen las mismas funciones que las fijas. La SDM cuenta con 4 cámaras móviles)

##### 5.4.8.3 Clases de infracción que detectan

**Cámaras fijas del Centro de Gestión del Tránsito - CGT**, encontramos entre otras:

**C02:** Estacionar un vehículo en sitios prohibidos

**C35:** No realizar la revisión técnico-mecánico

**D02:** Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

**C03:** Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.

**C14:** Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

**C19:** Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.

Las **cámaras de fotodetección** al igual que las CGT (Centro de Gestión del Tránsito) detectan los vehículos que no realizaron la revisión técnico mecánica, el conducir sin portar los seguros de ley, transitar por sitios u horas restringidos y, además:

**D04:** No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo y

**C29:** Conducir un vehículo a la velocidad máxima permitida.

**Cámaras móviles**, detectarían las mismas que las cámaras de fotodetección.

##### 5.4.8.4 Puntos habilitados

Hay que hacer la aclaración que la Secretaría de Movilidad cuenta con **129 ubicaciones** aprobadas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para la toma de evidencias de presuntas infracciones de tránsito, de las cuales:

37 ubicaciones son para cámaras fijas (dispositivos semiautomáticos) del Centro de Gestión de Tránsito (CGT) de la SDM  
92 ubicaciones para cámaras de fotodetección (dispositivos automáticos)

5.4.8.5 Instaladas

Con corte a 13 de diciembre de 2024 se contaba con **42 cámaras automáticas de fotodetección instaladas.**

5.4.8.5 Puntos en operación

Con corte a 13 de diciembre de 2024, 26 cámaras se encontraban en normal funcionamiento.

5.4.8.6 Fuera de servicio

Con corte a 13 de diciembre de 2024, 4 cámaras estaban en proceso de configuración en la plataforma y 12 aunque en funcionamiento tenían novedades de enlace en comunicaciones.

5.4.8.7 Localidades

De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Movilidad al derecho de petición radicado 202430017672121 del 26 de diciembre de 2024, las cámaras de fotodetección están distribuidas de la siguiente manera por localidad:

Localidad	Cantidad
Antonio Nariño	1
Barrios Unidos	4
Bosa	3
Chapinero	2
Engativá	7
Kennedy	7
Puente Aranda	2
San Cristóbal	1
Suba	10
Usaquén	4

5.4.8.8 Mantenimiento

La Secretaría Distrital de Movilidad tiene suscrito el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 2237 de 2021 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P ETB, mediante el cual se realizan actualmente las actividades de mantenimientos preventivos (con una periodicidad de 3 meses) y mantenimientos correctivos según se requiera para lo cual se destina una cuadrilla compuesta por un técnico electricista, electrónico o electromecánico, un auxiliar técnico y un conductor.

5.4.8.9 Margen de tolerancia

Otro de los temas que es de más interés de la ciudadanía y en que nuevamente hay muchas dudas y por sobre todo quejas es lo relacionado con el margen de tolerancia de las cámaras de fotodetección.

En respuesta a un derecho de petición del 19 de septiembre le pregunté a la Secretaría Distrital de Movilidad si existía un margen de tolerancia frente a la imposición de fotomultas por la infracción C29, es decir por exceder los límites de velocidad y esta responde:

*(...) las cámaras se parametrizan con una tolerancia superior al valor de la incertidumbre expandida, actualmente se tiene en 5 Km/h lo que es un valor adecuado teniendo en cuenta el nivel de confianza y los valores de incertidumbre. **Es decir, la plataforma tiene la configuración de no generar evidencias dentro de la tolerancia que se estipula (5 Km/h) (...)***

Es decir, con lo que dice la Secretaría de Movilidad se entendería que dentro ese margen de 5 km pues no habría la posibilidad de multar a un ciudadano. Lo curioso y que es parte vital de esta iniciativa es que a renglón seguido de esa indican:

*(...) es claro que por disposición legal quienes sobrepasen los cincuenta (50) kilómetros por hora en las vías urbanas, o quienes sobrepasen los treinta (30) kilómetros por hora en zonas escolares y en zonas residenciales **podrán ser sujetos de la infracción de tránsito correspondiente (...)***

Eso quiere entonces decir que pese a ese margen de tolerancia a 51 o 52 km/h, y aun sabiendo que puede estar dentro del margen de error del dispositivo se impondrá fotocomparendo.

Veamos por ejemplo una tabla que es parte de una respuesta a un derecho de petición que radiqué ante la Secretaría de Movilidad, y cuya respuesta en radicado 202530000026891 relaciona los comparendos impuestos por rangos de velocidad.

**Tabla 1:** Comparendos impuestos por cámaras salvavidas.

Año	50-55 km/h	56-60 km/h	61-65 km/h	66-70 km/h	71 km/h o más
2021	1	51033	19780	8907	6374
2022	0	202216	79124	37722	29063
2023	1	348575	139385	64768	51323
2024*	0	279465	110493	51589	37648

**Fuente:** Base de Datos SIMUR - Sistema Contravencional FENIX \* Corte 30 de noviembre de 2024.

De esta tabla es claro que la mayoría de los comparendos impuestos por cámaras de fotodetección se encuentran dentro del rango de los 56 a 60 kilómetros por hora.

**5.4.8.10 Calibración**

La Resolución 20203040011245 de 20 de agosto de 2020, indica en el artículo 10 “Calibración. Se requiere que los SAST vinculados a medición de velocidad estén calibrados”.

Solo los SAST que cuenten con medición de la velocidad y radar deben calibrarse, por lo cual, los dispositivos de detección de presuntas infracciones de tránsito que tiene la ciudad de Bogotá deben ser calibrados, puntualmente los que realicen medición de velocidad (cámaras de fotodetección).

Para el caso puntual de las cámaras de fotodetección, el fabricante de las mismas indica que la segunda calibración sea realizada en un periodo no mayor a 48 meses de la primera y posterior a esta, cada 12 meses.

El problema es que revisando las fechas de las calibraciones identificamos que algunas de ellas tienen como última fecha el año 2027. Lo que no es claro pues las fechas de estas no deberían estar a futuro siendo una fecha cierta en la que ya debió haber sucedido.

Prueba de lo anterior es la respuesta mediante oficio radicado N° 202442101602241 de fecha 28 de febrero de 2024 en la cual se anexó el siguiente cuadro.

ID	DIRECCIÓN EXACTA CÁMARA	Cámara instalada	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ÚLTIMO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DEI-007/CAM-01	AV BOYACÁ - CL 52 (S-N)	SP091900115	26/03/2020	09/11/2023
DEI-007/CAM-02	AV BOYACÁ - CL 53 (N-S)	SP111900167	26/03/2020	09/11/2023
DEI-009/CAM-01	AV BOYACÁ - CL 131 (N-S)	SP111900155	26/03/2020	23/05/2023
DEI-009/CAM-02	AV BOYACÁ - CL 131 (S-N)	SP111900158	26/03/2020	21/12/2023
DEI-010/CAM-01	AU. NORTE - CL 95 (N-S) C. RAP	SP230400588	26/03/2020	23/05/2027
DEI-010/CAM-02	AU. NORTE - CL 95 (N-S) C. LEN	SP111900138	26/03/2020	21/12/2023
DEI-010/CAM-03	AU. NORTE - CL 97 (S-N) C. RAP	SP111900154	26/03/2020	04/12/2023
DEI-010/CAM-04	AU. NORTE - CL 97 (S-N) C. LEN	SP111900180	26/03/2020	04/12/2023
DEI-011/CAM-01	AV CIUDAD DE CALI - CL 15A (S-N)	SP111900162	26/03/2020	21/12/2023
DEI-011/CAM-02	AV CIUDAD DE CALI - CL 15A (N-S)	SP111900170	26/03/2020	21/12/2023
DEI-012/CAM-01	AV NQS - CL 22 (N-S)	SP111900146	26/03/2020	04/12/2023
DEI-012/CAM-02	AV NQS - CL 22 (S-N)	SP111900176	26/03/2020	04/12/2023
DEI-014/CAM-02	AV 1 DE MAYO - CL 45 SUR (N-S)	SP111900140	26/03/2020	21/12/2023
DEI-016/CAM-03	AV NQS - CL 58A (N-S)	SP111900159	26/03/2020	21/12/2023
DEI-017/CAM-01	AU. NORTE - CL 102 A (N-S) C. LEN	SP111900144	26/03/2020	21/12/2023
DEI-017/CAM-02	AU. NORTE - CL 102 A (N-S) C. RAP	SP101900129	26/03/2020	04/12/2023
DEI-019/CAM-02	AV NQS - AV CL 73 (S-N)	SP111900139	26/03/2020	04/12/2023
DEI-021/CAM-01	AV CARACAS - CL 59A (S-N)	SP101900134	26/03/2020	04/12/2023
DEI-021/CAM-02	AV CARACAS - CL 59A (N-S)	SP111900148	26/03/2020	21/12/2023
DEI-024/CAM-01	AV AMÉRICAS - CR 78 (O-E)	SP230400589	16/03/2021	23/05/2027
DEI-025/CAM-01	AU. NORTE - CL 183 (N-S)	SP230400585	16/03/2021	23/05/2027
DEI-025/CAM-02	AU. NORTE - CL 183 (N-S)	SP230400584	16/03/2021	23/05/2027
DEI-025/CAM-03	AU. NORTE - CL 183A (S-N)	SP230400587	16/03/2021	23/05/2027
DEI-025/CAM-04	AU. NORTE - CL 183A (S-N)	SP230400586	16/03/2021	23/05/2027
DEI-026/CAM-01	AV VILLAVICENCIO - CR 32 (O-E)	SP230400583	26/03/2020	23/05/2027
DEI-026/CAM-02	AV VILLAVICENCIO - CR 28 (E-O)	SP111900181	26/03/2020	21/12/2023
DEI-027/CAM-02	AV CR 10 - CL 19 (N-S)	SP111900174	26/03/2020	21/12/2023
DEI-028/CAM-01	AV CR 7 - CL 93A (N-S)	SP101900131	26/03/2020	04/12/2023
DEI-028/CAM-02	AV CR 7 - CL 93A (S-N)	SP111900163	26/03/2020	04/12/2023
DEI-029/CAM-03	AU. NORTE - CL 109 (S-N) C. RAP	SP111900171	26/03/2020	23/05/2023
DEI-030/CAM-01	AV BOYACÁ - CL 168 (N-S)	SP111900157	26/03/2020	09/11/2023
DEI-030/CAM-02	AV BOYACÁ - CL 167 (S-N)	SP111900156	26/03/2020	23/05/2023
DEI-033/CAM-01	AV CL 80 - CR 114 (O-E)	SP111900141	26/03/2020	21/12/2023
DEI-033/CAM-02	AV CL 80 - CR 114 (E-O)	SP111900149	26/03/2020	21/12/2023
DEI-038/CAM-01	AU. SUR - CR 75D (O-E)	SP101900120	26/03/2020	04/12/2023
DEI-038/CAM-02	AU. SUR - CR 75A (E-O)	SP101900133	26/03/2020	04/12/2023
DEI-040/CAM-01	CL 63 SUR - CR 97B (O-E)	SP230400582	26/03/2020	23/05/2027

#### 5.4.9 Comparendos



En este punto se expondrán las cifras que evidencian la cantidad de fotocomparendos que se han impuesto desde la fecha en que instalaron las mal llamadas “cámaras salvavidas”.

#### 5.4.9.1 Comparendos 2020-2024

- **Total por vigencias de 2020 a 2024 de todas las infracciones**

Desde el momento en que se implementaron las cámaras de fotodetección en mayo de 2020 y noviembre de 2024 se han impuesto **2.006.617** fotocomparendos por todo tipo de infracción.

- **C35** Tecnicomecánica
- **D02** SOAT
- **D04** Cruzar semáforo en rojo
- **C29** Exceso de velocidad

De esa cifra, el **93%** corresponde a infracciones por exceso de velocidad (C29), lo que equivale a **1.862.058**

- **Solo en 2024**

Entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de noviembre de 2024 se han impuesto **522.946** comparendos de los cuales **481.322** fueron por **exceso de velocidad**, es decir el 92%.

Es decir que si multiplicamos esos **481.322 comparendos que teníamos al mes de noviembre de 2024 por el valor de la infracción C-29 exceso de velocidad en esta vigencia (\$572.628) tenemos que para noviembre de 2024** les han impuesto comparendos a los ciudadanos por una cifra superior a **\$275.618** millones de pesos.

#### 5.4.9.2 Puntos de más imposición

En el **periodo comprendido entre enero y noviembre de 2024** las cámaras de fotodetección que más han impuesto comparendos son:

- Autopista Norte con Calle 102: **52.387** infracciones
- Avenida Ciudad de Cali con Calle 15 A: **43.369** infracciones
- Autopista Norte con Calle 183 A: **39.852** infracciones
- Autopista Norte con Calle 95: **38.426** infracciones
- Avenida Villavicencio con Carrera 28: **36.856** infracciones

#### 5.4.9.3 Puntos de menor imposición

En el **periodo comprendido entre enero y noviembre de 2024** las cámaras de fotodetección que menos han impuesto comparendos son:

- Avenida Boyacá con Calle 53: **504** infracciones
- Avenida Ciudad de Cali: **304** infracciones
- Avenida Carrera 9 con Calle 113: **301** infracciones
- Avenida Carrera 10 con Calle 19: **116** infracciones
- Avenida Boyacá con Calle 52: **114** infracciones

#### 5.4.9.4 Comparendos SITP

Entre mayo de 2020 y abril de 2024 se impusieron **337** fotocomparendos a buses del Sistema Integrado de Transporte Público, de los cuales **31** corresponden al componente troncal y **306** al zonal.

A continuación se discriminan las infracciones por las cuales fueron impuestos los 337 fotocomparendos:

- **324** por la infracción **C29** “Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.
- **11** por la infracción **D04** “No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, un “PARE” o un semáforo intermitente en rojo”
- **1** por la infracción **D02** “Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley”
- **1** por la infracción **C35** “No realizar la revisión técnico-mecánica”

#### 5.5 Recaudo 2020-2024

- **Total por vigencias de 2020 a 2024 de todas las infracciones**

Valor total de comparendos desde la entrada en operación (2020) y hasta el 30 de noviembre de 2024:

**\$1.203.279.658.770**

Valor total recaudo efectivo desde la entrada en operación hasta el 30 de noviembre de 2024:

**\$528.914.325.028**

- **Total por vigencias de 2020 a 2024 por C-29 (Exceso de Velocidad)**

Valor total comparendos por velocidad C-29 desde la entrada en operación hasta el 30 de noviembre de 2024:

**\$995.968.278.572**

Valor total recaudado comparendos por velocidad desde la entrada en operación hasta el 30 de noviembre de 2024:

**\$443.112.956.849**

Entonces, habiendo dejado claro el panorama actual en que nos encontramos respecto a la imposición de fotocomparendos y la necesidad de velar por la protección del bolsillo de los ciudadanos por encima de la necesidad de recaudo. Es que se propone que las sanciones y los pagos se hagan de manera proporcional a la diferencia entre la velocidad de captura del sistema y la velocidad máxima permitida para el tramo o vía donde ocurrieron los hechos.

#### 5.6 Impacto de los alivios tributarios y no tributarios

El Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 927 de 2024 *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, que contiene los artículos 316 “Alivios tributarios para obligaciones tributarias*

susceptibles de discusión”, 317 “Alivios tributarios para obligaciones en firme” y 318 “Alivios para deudores de obligaciones no tributarias”.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Secretaría Distrital de Hacienda<sup>49</sup> del 20 de diciembre de 2024, por ejemplo y hablando de alivios tributarios, luego de cinco meses de vigencia, Bogotá recuperó \$362.000 millones de pesos, los cuales serán destinados a ejecutar iniciativas contenidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Con esto se puede concluir que ya sea hablando de alivios tributarios o no tributarios se genera un impacto positivo frente al aumento de recaudo.

Dicho recaudo fue posible gracias a los 254.430 pagos que se realizaron por parte de las personas que se acogieron a estos alivios para pagar los valores adeudados en parte por las dificultades económicas que generó el Covid-19.

Como se evidenció, con esta medida se logró recaudar un dinero importante que servirá para invertir en temas de seguridad, educación y salud, entre otros.

Con esta iniciativa se busca beneficiar a las personas a las personas que no han podido pagar fotocomparendos impuestos por la infracción C-29 exceso de velocidad y que quieren ponerse al día. Hay que recordar que tener esta deuda ha hecho que muchos ciudadanos se encuentren embargados o en riesgo de estarlo, que no puedan renovar su licencia de conducción o realizar traspaso de vehículos, entre otros trámites. Además, estos alivios permitirían que ingresen a las arcas de la ciudad más de \$552 mil millones.

## 6 IMPACTO FISCAL

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:

*“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.*

*Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.*

Sin embargo, es relevante mencionar, que, para el caso concreto, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

*“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de*

---

<sup>49</sup> Secretaría Distrital de Hacienda (2024). <https://www.haciendabogota.gov.co/es/noticias/bogota-recupero-mas-de-362-mil-millones-de-pesos-con-los-alivios-tributarios-2024>

*iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.*

*“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.*

Por lo que, de ser necesaria la ejecución de algunos recursos para la implementación de esta iniciativa, o se entienda que la misma contiene impactos frente al recaudo esperado, considero posible que en la articulación con el Plan Distrital de Desarrollo, el mejoramiento del recaudo esperado o nominal que aún no ha entrado a la Secretaría de Hacienda Distrital y el presupuesto que se apruebe para las vigencias próximas de las entidades competentes, es posible se apropien los recursos con los cuales se puede financiar el presente proyecto en caso de requerirlo.

Cordialmente,

**HUMBERTO RAFAEL AMÍN MARTELO**

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Centro Democrático

**PROYECTO DE ACUERDO NO 094 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

## ACUERDO \_\_\_\_ DE 2025

**“POR EL CUAL SE REGULA DE MANERA PROPORCIONAL Y JUSTA EL VALOR A PAGAR DE LOS INTERESES CAUSADOS POR LAS SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD (C-29) EN BOGOTÁ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confieren los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

**ACUERDA**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** Establecer en favor de las personas objeto de la infracción C-29 “Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida” establecida en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), un alivio no tributario para que el pago de los intereses causados, se haga de manera justa y proporcional al grado de incumplimiento de la norma. Lo anterior teniendo en cuenta el margen de tolerancia y calibración de los dispositivos de fotodetección y la proporcionalidad o grado de velocidad en que se incumple la norma.

**ARTÍCULO 2. ALIVIO DE OBLIGACIÓN NO TRIBUTARIA POR LOS INTERESES CAUSADOS POR SANCIONES IMPUESTAS A TRAVÉS DE SAST:** Los deudores del Distrito Capital por concepto de obligaciones no tributarias correspondientes a infracciones de tránsito tipo (C-29) “Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida”, que hayan sido impuestas a través de SAST (Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones) que hayan entrado en mora desde el **01 de julio de 2022** y hasta el **31 de octubre de 2024**, podrán descontar de los intereses causados a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo, un valor proporcional a la diferencia entre la velocidad de captura del sistema reportada por la Secretaría Distrital de Movilidad y la velocidad máxima permitida para el tramo o vía donde ocurrieron los hechos así:

Entre 1 y 5 kilómetros por hora adicionales a la velocidad máxima permitida en el tramo o vía el 100% de los intereses causados a la fecha de pago.

Entre 6 y 10 kilómetros por hora adicionales a la velocidad máxima permitida en el tramo o vía el 80% de los intereses causados a la fecha de pago.

**Parágrafo 1.** Los deudores que a la fecha de publicación de este Acuerdo tengan suscrito algún acuerdo de pago vigente podrán acceder a la misma exoneración.

**Parágrafo 2.** Excepciones. No se concederá el beneficio establecido en el presente artículo a los siguientes deudores:

1. Las personas naturales o jurídicas que hayan sido objeto de multas derivadas de incumplimientos contractuales en Bogotá, Distrito Capital.
2. Las personas naturales que hayan sido sancionadas por conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los términos dispuestos en el artículo 5° de la Ley 1696 de 2013.

**Parágrafo 3.** El presente alivio no podrá acumularse a otros existentes.

La Administración Distrital reglamentará los requisitos que deben acreditar los contribuyentes para acceder a este alivio.

**Parágrafo 4.** La posibilidad que se otorga a través del presente artículo tiene validez para los pagos que se realicen antes del 31 de diciembre de 2027.

**ARTÍCULO 3. INFORME.** La Secretaría Distrital de Movilidad en conjunto con la Secretaría de Hacienda Distrital entregará un informe anual al Concejo de Bogotá D.C; en relación con el cumplimiento del presente Acuerdo.

**ARTÍCULO 4. VIGENCIA.** El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

**PROYECTO DE ACUERDO NO 095 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA MIGRACIÓN MÓVIL  
DEL APLICATIVO DE MANTENIMIENTO VIAL DE BOGOTÁ**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1. OBJETO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto dictar los lineamientos para la migración móvil del aplicativo de mantenimiento vial de Bogotá.

**2. ANTECEDENTES**

El proyecto de acuerdo se ha presentado ante la corporación así:

#	Título del proyecto	Ponentes	Trámite
161-2021	Por medio del cual se dictan los lineamientos para la migración móvil del aplicativo de mantenimiento vial de Bogotá.	H.C. Andrés Darío Onzaga Niño (Coordinador) y H.C. Marco Fidel Acosta Rico	Archivado
245	“Por medio del cual se dictan los lineamientos para la migración móvil del aplicativo de mantenimiento vial de Bogotá”	H.C. Carlos Alberto Carrillo Arenas (Coordinador) y H.C. Humberto Rafael Amín Martelo	Archivado
	“Por medio del cual se dictan los lineamientos para la migración móvil del aplicativo de mantenimiento vial de Bogotá”	H.C. Juan Manuel Díaz Martínez (Coordinador) y H.C. Sandra Consuelo Forero Ramírez (ponente)	Archivado

**3. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**

En el 2021, la Unidad de Mantenimiento Vial entregó un aplicativo web llamado "Reporte de Daños Viales". Este, se diseñó con el fin de recoger aportes ciudadanos que permitieran fortalecer el ejercicio de diagnóstico de la malla vial, el tratamiento de datos geográficos automatizados y la priorización de sus intervenciones. Dicho aplicativo se desarrolló de manera doméstica y utilizando como soporte la página oficial de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.

Ahora bien, según su creador, su acceso podría ser desde cualquier dispositivo móvil o desde cualquier computador a través de un link. Además, contiene algunos requisitos mínimos como contar con una cuenta Gmail para poder conocer quién reporta los huecos y de alguna forma poder hacerle seguimiento a la reparación en caso.

### 3.1 Problemáticas

Después de un periodo significativo de prueba, se han diagnosticado algunos errores dentro del funcionamiento del aplicativo. Pero, mucho más allá de ello, las principales problemáticas se han presentado en cuanto a su acceso, ya que, si bien es cierto que podría accederse desde cualquier dispositivo, su funcionalidad se ve afectada al ingresar desde dispositivos móviles como el celular.

La carga de archivos adjuntos y demás herramientas, se hace compleja una vez se realiza la solicitud a través del dispositivo móvil. Por ello, la iniciativa de este Proyecto, pretende dictar los lineamientos para que se realice la migración desde el aplicativo web hacia una aplicación híbrida. Las razones que acompañan la intención de esta iniciativa, se expondrán con mayor profundidad dentro de la sección de contexto del presente Proyecto de Acuerdo. Por último, y antecediendo a las problemáticas, es preciso señalar que la migración de este aplicativo garantizaría un aumento significativo respecto al número de usuarios.

Actualmente la unidad de mantenimiento vial cuenta con canales para realizar solicitud de arreglo de vías:

- Correo electrónico: [atencionalciudadano@umv.gov.co](mailto:atencionalciudadano@umv.gov.co).
- <http://www.umv.gov.co/>, opción Atención y Servicio a la Ciudadanía.
- Línea 195 o al teléfono 377 95 55, ext. 1002
- X: @UMVbogota
- Instagram: @umv.bogota
- Facebook: Unidad de Mantenimiento Vial

Sin embargo, estos canales no permiten hacer un seguimiento real del avance de las peticiones y/o de las obras.

La iniciativa es de gran importancia tanto a nivel social, económica, y medioambiental así:

- información en tiempo real
- se contribuye a la prevención de accidentes
- protección de vehículos
- priorización de reparaciones
- facilidad de uso
- fomento de soluciones inteligentes
- Integración de sistemas existentes.

Al revisar algunos antecedentes, encontramos que: no es la primera vez que la aplicación se presenta a la ciudad. Justo, hace 4 años, la Unidad de Mantenimiento Vial ya había diseñado un portal web para el reporte de huecos y baches. Sin embargo, al igual que con



la versión actual del aplicativo, esta no contaba con una extensión móvil, lo que en su momento provocó un número de registros muy bajos. Por ello, se cree que la introducción de esta extensión no tendría problemas por realizarse de manera doméstica, y su diseño y control podría surgir de una colaboración entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano. Se considera que la aplicación o extensión móvil ayudaría a resolver y agilizar el proceso de intervención de cada hueco o reporte de mal estado, teniendo en cuenta que, gracias a la consolidación de una base de datos, se puede identificar más fácilmente a la Entidad responsable y que sea esta la encargada de gestionar las acciones a las que haya lugar. Ahora bien, en medio de la transformación tecnológica en la que se están desempeñando cientos de ciudades en el mundo y con aras de que Bogotá se convierta en una ciudad inteligente, se hace necesario diseñar herramientas para que la ciudadanía obtenga participación real e incidente. Vemos en este Proyecto de Acuerdo una oportunidad para acercar a la ciudadanía a la gestión de las Entidades de forma directa, sin intermediarios, de manera rápida, ágil y sobre todo sencilla. De esta forma, y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, a continuación, presentaremos algunas de las características actuales del aplicativo y cuáles serán las necesidades que se podrían atender teniendo en cuenta su proceso de migración y actualización. La versión 2021 del aplicativo cuenta con: una breve descripción del tipo de afectación, un registro fotográfico y un soporte de coordenadas. Además de ello, tiene una extensión que le permite al ciudadano registrar con nombre propio la solicitud de mantenimiento ante la Unidad de Mantenimiento Vial. Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que se quiere es mejorar su acceso, se propone que:

Se migre desde la web app que se tiene hacia una app híbrida. Con esto, lograríamos que la totalidad de funciones se habiliten, pero, además de ello, se aumente considerablemente su accesibilidad, ya que este tipo de aplicaciones híbridas están diseñadas para funcionar en cualquier sistema operativo (Dharmwan, 2021). Adicional a ello, y gracias a que las aplicaciones híbridas utilizan una única base de código para todas las plataformas, la Unidad de Mantenimiento Vial no tendría que configurar un nuevo código para el aplicativo. Con esto, y recordando nuevamente el propósito del Proyecto, la idea sería genera mayor accesibilidad al aplicativo.

### 3. MARCO JURÍDICO

#### 3.1 Marco Constitucional

**Artículo 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

### **3.2 Marco Legal**

#### **Ley 1682 de 2013**

**Artículo 5º.** Las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares.

**Artículo 8º.** Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte:

**Calidad del servicio.** La infraestructura de transporte debe considerar las necesidades de los clientes, usuarios o ciudadanos, así como las características mínimas requeridas para cumplir con los niveles de servicio y los estándares nacionales o internacionales aplicables.

### **3.3 Marco Normativo Distrital**

#### **Acuerdo 10 DE 2010 "Por el cual se adoptan los Estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Distrito Capital"**

**Artículo 3.- Funciones.** - La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en desarrollo de su objeto tendrá las siguientes funciones:

2) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

3) Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

#### **4. COMPETENCIAS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**

Teniendo en cuenta la Constitución y las leyes que regulan el funcionamiento de las corporaciones municipales, encontramos que la competencia del Concejo de Bogotá para expedir un acuerdo relacionado con el objeto del presente proyecto.

##### **Constitución Política de Colombia:**

Artículo 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

(...)

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

##### **Decreto Ley 1421 de 1993:**

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

#### **5. IMPACTO FISCAL**

Teniendo en cuenta los mandatos de la ley 819 de 2003, en cuanto a la declaración de impacto fiscal de las normas estipulado en el artículo 7º de la mencionada ley, y teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C- 911 de 2007, en la que puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

Esta iniciativa no genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto se podrá desarrollar en el marco de las competencias y el alcance la Unidad de Mantenimiento vial de Bogotá.

## **6. CONCLUSIONES**

El alcance de la aplicación híbrida brindaría las garantías suficientes para que la gobernanza aumente de forma considerable y se restablezca en el mérito del servicio civil de la Unidad de Mantenimiento Vial. Consideramos que este Proyecto de Acuerdo no supone un esfuerzo mayor por parte de las Entidad, por lo que serían muchos más los beneficios que los costos que implicaría su desarrollo.

Cordialmente,

**DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA**  
**Concejal de Bogotá D.C**  
**Partido Centro Democrático**

**PROYECTO DE ACUERDO NO 095 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**PROYECTO DE ACUERDO N. \_\_\_\_\_ DE 2025**

**POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA MIGRACIÓN MÓVIL  
DEL APLICATIVO DE MANTENIMIENTO VIAL DE BOGOTÁ**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, y las que le confiere el numeral 1 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

**ACUERDA**

**ARTÍCULO 1. OBJETO.** Dictar los lineamientos para la migración móvil del aplicativo de mantenimiento vial de Bogotá.

**ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS.** Dentro de las acciones que se desplieguen, por parte de las autoridades competentes, en materia de migración móvil se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

- a) La Unidad de Mantenimiento Vial priorizará la migración digital del Sitio Web de reportes ciudadanos a una Aplicación Móvil, con el ánimo de implementar un sistema híbrido que facilite la participación de la ciudadanía.
- b) Las entidades competentes gestionarán la optimización del Sitio Web de reportes ciudadanos.
- c) Las entidades competentes actualizarán la información periódicamente, teniendo en cuenta los sistemas de información existentes en el Distrito, entre estos Sistema de Información Geográfica IDU – SIGIDU en los términos oportunos que establezca la Administración Distrital.
- d) Las entidades competentes desarrollarán y publicarán un informe trimestral, de forma conjunta, sobre la caracterización del Reporte Ciudadano, clasificando el medio de recepción de los distintos reportes en el Sistema de Información de la Malla Vial de Bogotá.
- e) Elabórese un informe trimestral, con la cantidad de reportes recibidos, en donde se logre distinguir el tipo de fuente desde el que se realizó el reporte. Es decir, si fue a través del aplicativo web, o si, por el contrario, fue a través de la aplicación móvil.

**ARTÍCULO 3. RESPONSABILIDADES**

La Administración Distrital, en cabeza del Sector de Movilidad, se encargará de coordinar las acciones, actividades, convocatorias y demás disposiciones que se consideren necesarias para el proceso de migración del aplicativo móvil hacia la aplicación híbrida propuesta.

**ARTÍCULO 4. VIGENCIA.** El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ del año 2024

**Presidente del Concejo**

**Secretaría General**

**Alcalde Mayor**

### **Referencias**

- Dharmwan, S. (17 de Marzo de 2021). *CYNOTECK*. Obtenido de Aplicaciones híbridas frente a aplicaciones nativas : <https://cynoteck.com/es/blog-post/hybrid-apps-vs-native-apps-the-checklist/#:~:text=La%20principal%20diferencia%3A%20Las%20aplicaciones,ya%20sea%20Android%20o%20iOS.>
- UMV . (16 de Julio de 2021). 2021. Obtenido de IDU Y UMV Unen Esfuerzos Para El Mantenimiento De La Malla Vial De Bogotá: <https://www.umv.gov.co/portal/2021/07/16/idu-y-umv-unen-esfuerzos-para-el-mantenimiento-de-la-malla-vial-de-bogota/>

**PROYECTO DE ACUERDO NO 096 DE 2025****PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS CORREDORES DE CIRCULACIÓN DE LAS ESTACIONES Y PORTALES DE TRANSMILENIO DE LA CIUDAD"****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos para el aprovechamiento económico a través de la modalidad de alquiler del espacio de las zonas de circulación en las estaciones del Sistema Transmilenio para la venta de confitería, productos comestibles empaquetados y bebidas envasadas.

**2. ANTECEDENTES**

El proyecto de acuerdo se ha presentado ante la corporación en la vigencia 2022 así:

#	Título del proyecto	Ponentes	Tramite
254-2022	Por medio del cual se establecen lineamientos para el aprovechamiento económico de los corredores de circulación de las estaciones de Transmilenio de la ciudad.	H.C. Diego Cancino, H.C Juan Felipe Grillo	Archivado
244-2024	"Por medio del cual se establecen lineamientos para el aprovechamiento económico de los corredores de circulación de las estaciones de Transmilenio de la ciudad"	H.C. Andrés Darío Onzaga Niño (Coordinador) y H.C. Álvaro José Argote Muñoz	Archivado
90-2024, 317-2024 / 467 - 2024	"Por medio del cual se establecen lineamientos para el aprovechamiento económico de los corredores de circulación de las estaciones de Transmilenio de la ciudad"	H.C. Rubén Darío Torrado Pacheco (Coordinador) y H.C.Rocío Dussán Pérez (ponente)	Archivado

**3. JUSTIFICACIÓN**

Los efectos generados por la Pandemia tuvieron gran repercusión en muchos sectores de la economía de la ciudad, entre ellos, el sector informal (Avendaño, 2020). Como prueba de ello, observamos un reciente aumento en el número de vendedores informales en la ciudad y especialmente en el Sistema Transmilenio. Algunas de las causas que soportan este aumento en la informalidad son la pérdida de empleo y la falta de oportunidades que se ofrecen actualmente en la ciudad. Muchas veces, la falta de gestión por parte del sector formal, ha contribuido a que se sigan abriendo brechas económicas y de desigualdad en la ciudad.

Pese a ello, y de manera desafortunada debemos recordar que la informalidad genera procesos de desestabilización dentro del funcionamiento ordinario del sistema (Flórez, 2012). Generalmente, las ventas informales producen un desincentivo para cientos de ciudadanos que no están de acuerdo con este tipo de prácticas. Ahora bien, revisando el reglamento interno del sistema y el actual código de Policía, encontramos que estas actividades de ventas dentro del sistema, se encuentran prohibidas y en muchos casos, omiten la ley para continuar funcionando. Esto, no solo representa una problemática social, sino que también representa una problemática económica, debido a su desaprovechamiento, ya que los vendedores informales no aportan recursos al sistema.

Según el Instituto para el Desarrollo Social (IPES), en 2018 había más de 2.669 vendedores informales en Transmilenio. 1.591 dentro de las estaciones y 1.078 en las cercanías del sistema (puentes peatonales y entradas). Seguramente, estas cifras han crecido desde entonces (EL TIEMPO, 2018). Razón por la cual, se hace necesaria la promoción de Proyectos que logren atender las necesidades de esta población, pero que también constituyan una fuente de ingresos para el sistema.

De esta forma, este Proyecto de Acuerdo procura mejorar las condiciones económicas de gran parte de esta población, a partir de la incorporación de la modalidad de alquiler para la venta de productos de confitería, productos comestibles empaquetados y bebidas envasadas. Esta no es solo una apuesta por la formalización, sino que también es una apuesta para el aprovechamiento económico de los corredores de circulación de las estaciones del sistema. Así, esta propuesta se constituirá formalmente como un mecanismo de captura de valor, que seguramente dejará importantes cifras para el sistema Transmilenio.

Los corredores de circulación fueron elegidos estratégicamente para no afectar y/o incidir sobre el funcionamiento ordinario de las estaciones de Transmilenio. Con los corredores de circulación, nos referimos específicamente al espacio comprendido entre los vagones. Una vez hecha esta aclaración, también debemos señalar que la elección de confitería, productos comestibles empaquetados y bebidas envasadas corresponde al cumplimiento de las normas básicas de sanidad y salubridad. La venta de estos productos no genera exigencias adicionales.

Por último, será el sistema de Transmilenio el encargado de definir las condiciones para otorgar los permisos de operación en los puestos que se vayan a instalar en los corredores de circulación. Dentro del pliego de condiciones, deberán establecerse prioridades para la población más vulnerable. También, deberá establecerse una condición de temporalidad



para que todos los participantes tengan igualdad de condiciones y todos tengan la oportunidad de participar en el alquiler de estos espacios. Adicionalmente, el alquiler de estos espacios vendrá acompañado de la presencia de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá para garantizar el orden y la seguridad de los puestos, así como controlar el flujo de los demás vendedores informales dentro del sistema. Asimismo, será Transmilenio el encargado de determinar la capacidad de las estaciones en donde se podrán alquilar algunos de los corredores de circulación para la venta de estos productos. Entendemos que todas las estaciones de Transmilenio no cuentan con las mismas condiciones, por lo que es preciso que se realice un estudio de flujos para el diseño y se puedan brindar garantías para el sistema.

Organizar la venta informal en TransMilenio es un tema importante, ya que tiene impactos significativos en diversos aspectos sociales, económicos, y operativos del sistema de transporte público en Bogotá. A continuación, se destacan algunos puntos clave sobre su importancia:

#### **Seguridad de los Usuarios**

La venta informal puede generar riesgos para la seguridad de los pasajeros, ya que los vendedores suelen moverse entre los buses y estaciones, exponiéndose y exponiendo a los usuarios a posibles accidentes.

En algunos casos, este tipo de actividad puede ser usada como pretexto para actividades ilícitas, como robos o estafas.

#### **Calidad del Servicio**

La presencia de vendedores informales puede interferir con la operación del sistema, afectando el flujo de pasajeros y el confort dentro de los buses.

Los altos niveles de ruido y el constante movimiento de los vendedores pueden generar incomodidad en los usuarios.

#### **Economía Formal**

La venta informal afecta a los comerciantes formales, quienes pagan impuestos y cumplen con normativas legales. La competencia desleal puede perjudicar la economía formal.

Además, al no regularse, estas actividades no aportan al recaudo fiscal, lo que limita los recursos públicos para mejorar el sistema.

#### **Control de Espacios Públicos**

TransMilenio es un espacio público, y su regulación es esencial para garantizar el orden y el bienestar general de los ciudadanos.

El descontrol en las actividades informales puede dar lugar a una percepción de falta de autoridad y generar un ambiente menos seguro.

#### **Salud Pública**

La venta de alimentos en condiciones inadecuadas de higiene puede representar riesgos para la salud de los usuarios.

La falta de control sobre los productos ofrecidos dificulta garantizar su calidad y seguridad.

#### **Sostenibilidad del Sistema de Transporte**

TransMilenio depende de los ingresos por pasajes para su operación y mantenimiento. Las actividades informales dentro del sistema pueden impactar negativamente la percepción de calidad, desincentivando el uso del transporte público.

#### Medidas Posibles

Regular la venta informal no implica necesariamente erradicarla, sino buscar un equilibrio que contemple soluciones como:

Implementar zonas específicas para actividades comerciales reguladas.

Mejorar la supervisión y el control en estaciones y buses.

La regulación adecuada de la venta informal en TransMilenio es esencial para garantizar un sistema de transporte más seguro, eficiente y sostenible, en beneficio de todos los usuarios.

## 4. MARCO LEGAL

### A nivel Constitucional

**ARTICULO 25.** El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

**ARTICULO 53.** El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

### A nivel Nacional

**LEY 1988 DE 2019.** Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones.

**Artículo 4°.** La política pública de los vendedores informales deberá formularse a partir de los siguientes lineamientos:

- a) Establecer programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital de esta población, y a gozar de una subsistencia en condiciones dignas, implementando alternativas de trabajo formal para vendedores ambulantes;
- b) Desarrollar programas de capacitación a vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA);

- c) Fomentar proyectos productivos para los vendedores informales;
- d) Reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales Comerciales de Interés Social (LCIS), para promover la inclusión social y mejorar condiciones de vida de vendedores informales;
- e) Establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la población, para la toma de decisiones;
- f) Impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informales, a fin de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios;
- g) Se desarrollará un sistema de registro e inscripción de los vendedores informales, que permita caracterizarlos para la elaboración de las líneas de acción y programas que integran la política pública. El registro de los venteros informales se actualizará de manera permanente y será concertado con las asociaciones de venteros;
- h) Disponer de espacios seguros para las actividades que realizan los vendedores informales;
- i) La política pública establecerá la carnetización de los vendedores informales para facilitar su identificación en el espacio público. Las organizaciones de vendedores informales legalmente constituidas podrán realizar la veeduría a la carnetización.

### **A nivel Distrital**

**ACUERDO 812 DE 2021.** Por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones.

**ARTÍCULO 1. Objeto.** El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales, los cuales estarán formulados en consonancia con la Ley 1988 de 2019 "Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones" con el fin de procurar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo, al principio de confianza legítima y a la convivencia en el espacio público de las personas que se dediquen voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio público como vendedores informales, así como proteger, reglamentar y controlar el uso y aprovechamiento del espacio público del Distrito Capital.

**ARTÍCULO 5. Principios.** La formulación de la política pública deberá orientarse por los siguientes principios básicos que la caracterizan como:

- a. Dignidad Humana. Los vendedores informales son sujetos libres de elegir un proyecto de vida, profesión u oficio por lo que se les deben garantizar el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos del trabajador informal en condiciones dignas.
- b. Diversidad poblacional, social y cultural. Se respetará la diversidad de características, circunstancias y necesidades de los vendedores informales; la diversidad de actividades, las prácticas y las dinámicas artísticas, culturales y patrimoniales de las actividades económicas que ocurren en el espacio público para los fines de identificación y registro; así

como la necesidad de abordar estas diversidades mediante enfoques específicos y diferenciados.

c. Buena Fe. Debe existir coherencia en las actuaciones que adelante la administración y la población de vendedores informales, respetando los compromisos adquiridos y los derechos reconocidos por las normas legales y la jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas. Se debe presumir la buena fe respecto de aquellas actividades que realizan los vendedores informales, no pueden ser consideradas por sí mismas ilegales, ni pueden ser estigmatizadas o criminalizadas por esta razón.

d. Participación. Participación real y efectiva de la ciudadanía, organizaciones de vendedores informales y demás actores en el proceso de la formulación de la política pública.

**ARTÍCULO 6. Lineamientos.** La política pública de los vendedores informales en el Distrito Capital deberá formularse a partir de los lineamientos establecidos en el artículo 4º de la Ley 1988 de 2019 y los que a continuación se establecen:

a) La Administración Distrital a través de las entidades de los sectores central, descentralizado y de las localidades en el marco de sus competencias, adelantarán las acciones que fortalezcan la caracterización e identificación con enfoques diferenciales de todos los vendedores informales del Distrito Capital, de acuerdo con las categorías contempladas en la Ley 1988 de 2019 y en el artículo segundo del presente Acuerdo. Dicho registro se actualizará de forma periódica.

b) Fortalecer las estrategias para la inclusión de todos los vendedores informales en el R.I.V.I. según la Ley 1988 de 2019 y el artículo segundo del presente Acuerdo.

El proceso de inscripción en el Registro Individual de Vendedores Informales RIVI se actualizará de manera permanente y será concertado con las organizaciones de vendedores informales, los movimientos y colectivos de base comunitaria. Propender para que el RIVI sea un instrumento para la elaboración de las líneas de acción y los programas que integran la política pública y para reconocer nuevos vendedores, sin que esto implique retirar del sistema de información a quienes ya se han reconocido de ocupación u oficio en el Distrito Capital.

## 5. COMPETENCIAS DEL CONCEJO

**Artículo 313.** Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 313. 7 de julio de 1991 (Colombia).

**DECRETO LEY 1421 de 1993**

**Artículo 12. Atribuciones.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

**6. IMPACTO FISCAL**

Teniendo en cuenta los mandatos de la Ley 819 de 2003, este proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal que implique o conlleve a una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de unas nueve fuentes de financiación.

**7. CONCLUSIONES**

Este Proyecto de Acuerdo propone la inclusión de un nuevo mecanismo para la captura de valor en el sistema de Transmilenio. Su aprobación generaría incentivos para que la ciudadanía retorne de manera gradual y se apropie del sistema. También, este Proyecto contribuiría al aprovechamiento económico y a la formalización de algunas de las dinámicas que diariamente se ven y afectan el funcionamiento ordinario del sistema Transmilenio.

Cordialmente,

**DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA**  
**Concejal de Bogotá D.C**  
**Partido Centro Democrático**

**PROYECTO DE ACUERDO NO 096 DE 2025**  
**PRIMER DEBATE**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL  
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS CORREDORES DE CIRCULACIÓN DE  
LAS ESTACIONES Y PORTALES DE TRANSMILENIO DE LA CIUDAD"**

**EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que les  
confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

**ACUERDA**

**Artículo 1. Objeto.** Establecer lineamientos para el aprovechamiento económico a través de la modalidad de alquiler del espacio de las zonas de circulación en las estaciones del Sistema Transmilenio para la venta de confitería, productos comestibles empaquetados y bebidas envasadas.

**Artículo 2- Definiciones.**

*Confitería* - Productos alimenticios a base de azúcar, golosinas y caramelos.

*Productos comestibles empaquetados* - Se entiende por empaquetado a todo aquel proceso para proteger y resguardar un producto durante los procesos de distribución, almacenaje y manipulación. El empaquetado de alimentos tiene como función mantener en condiciones óptimas su contenido.

*Bebidas envasadas* - Son aquellas bebidas que cuentan con un envase plástico o de otro material que permiten manipulación simple.

**Artículo 2. Lineamientos.** La Empresa de Transporte Transmilenio, definirá los corredores de circulación aptos, de acuerdo a un estudio de flujos que garantice el correcto funcionamiento del sistema en cada una de sus estaciones.

**Artículo 3. Ejecución.** Instituto para la Economía Social en coordinación con la Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, Transmilenio y la secretaría de Seguridad de manera articulada y acorde a sus competencias, se desarrollarán las de condiciones para el alquiler de estos espacios y se definirá la lista de priorizados (adultos mayores y madres cabeza de hogar).

**Artículo 4. Vigencia.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ del año 2024  
**Presidente del Concejo** **Secretaría General**

**Alcalde Mayor**

### Referencias

- Avendaño, W. C. (2020). Impacto social del Covid-19 en un contexto de informalidad . *Revista ESPACIOS*, 39 - 48.
- EL TIEMPO. (21 de Abril de 2018). *Concentración de ventas informales junto a estaciones de Transmilenio*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-vendedores-ambulantes-en-bogota-207566>
- Flórez, D. F. (2012). *COMERCIO INFORMAL EN TORNO AL SISTEMA TRANSMILENIO Y OPORTUNIDADES DE FORMALIZACIÓN BASADAS EN MODELOS TOD*. Bogotá: Universidad de los Andes .